



# ANALES DEL CONCEJO

## DE BOGOTÁ, D.C.

### PROYECTOS DE ACUERDO

AÑO II N°. 4042 DIRECTORA: LUZ ANGÉLICA VIZCAINO SOLANO. OCTUBRE 29 DEL AÑO 2025

#### TABLA DE CONTENIDO

Pág.

<b><u>PROYECTO DE ACUERDO N° 967 DE 2025 PRIMER DEBATE</u></b> “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS HUMEDALES DEL DISTRITO CAPITAL AL SISTEMA DISTRITAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y AL SISTEMA DISTRITAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2469 DE 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.....	43703
<b><u>PROYECTO DE ACUERDO N° 968 DE 2025 PRIMER DEBATE</u></b> “POR MEDIO DEL CUAL SE NOMBRAN DOS DE LOS TRES EDIFICIOS DEL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.”.....	43721
<b><u>PROYECTO DE ACUERDO N° 969 DE 2025 PRIMER DEBATE</u></b> “POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA UN LITERAL AL ARTÍCULO 4 DEL ACUERDO 018 DE 1999 PARA FORTALECER LAS FUNCIONES DEL DADEP EN MATERIA DE INVENTARIO Y GEORREFERENCIACIÓN DE ESTACIONES RADIO ELÉCTRICAS EN EL ESPACIO PÚBLICO”.....	43788
<b><u>PROYECTO DE ACUERDO N° 970 DE 2025 PRIMER DEBATE</u></b> “PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE AL PALACIO DEL COLESTEROL COMO ESPACIO GASTRONÓMICO DE INTERÉS CULTURAL, SOCIAL Y TURÍSTICO DEL DISTRITO CAPITAL”.....	43749
<b><u>PROYECTO DE ACUERDO N° 971 DE 2025 PRIMER DEBATE</u></b> “POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS PARA ATRAER LA INVERSIÓN, GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESARROLLO URBANO EQUITATIVO EN BOGOTÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.....	43757
<b><u>PROYECTO DE ACUERDO N° 972 DE 2025 PRIMER DEBATE</u></b> “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS PARA EL EQUILIBRIO ENTRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA MANIFESTACIÓN PÚBLICA Y PACÍFICA, Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS USUARIOS DEL SITP DE BOGOTÁ Y LA ESTABILIZACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.....	43787
<b><u>PROYECTO DE ACUERDO N° 973 DE 2025 PRIMER DEBATE</u></b> “POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS BAJO LOS CUALES SE PLANEARÁ Y EJECUTARÁ EL PROGRAMA DE CULTURA METRO DE BOGOTÁ”.....	43813

## **PROYECTO DE ACUERDO No 967 DE 2025**

### **PRIMER DEBATE**

**“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS HUMEDALES DEL DISTRITO CAPITAL AL SISTEMA DISTRITAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y AL SISTEMA DISTRITAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2469 DE 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”**

### **EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

#### **1. OBJETIVO**

Este Acuerdo tiene como objetivo implementar medidas integrales, normativas y programáticas para asegurar la incorporación efectiva y prioritaria de los humedales del Distrito Capital en el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres (SDGRD) y en el Sistema Distrital de Cambio Climático (SDCC). Esto se realiza en cumplimiento de la Ley 2469 de 2025, reconociendo estos ecosistemas como una infraestructura natural clave para adaptarse al cambio climático, reducir el riesgo de desastres y conservar la biodiversidad urbana.

Con este Acuerdo se busca fortalecer la gobernanza ambiental, garantizar la participación comunitaria en la gestión de los humedales, promover acciones de restauración ecológica, y asegurar su articulación con la planificación territorial y la estructura ecológica principal del Distrito Capital.

#### **2. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA**

##### **2.1 Contexto Histórico**

Los humedales del Distrito Capital han sido parte fundamental de la historia ambiental de la Sabana de Bogotá, representando ecosistemas de alta productividad biológica y servicios ecosistémicos clave como la regulación hídrica, el almacenamiento de carbono, la mitigación de inundaciones y la conservación de la biodiversidad urbana (Andrade, 2011). Antes de la urbanización masiva del siglo XX, la sabana contaba con más de 50.000 hectáreas de áreas inundables y humedales, que fueron drásticamente reducidas por la expansión urbana, la canalización de ríos, el relleno de cuerpos de agua y la falta de planeación ecológica (Van der Hammen, 2006).

Durante las décadas de 1980 y 1990, ante la degradación sistemática de los humedales urbanos, surgieron procesos ciudadanos de defensa ambiental liderados por comunidades locales, organizaciones ambientales y sectores académicos, quienes exigieron el reconocimiento jurídico y ecológico de estos ecosistemas. Uno de los hitos más relevantes fue la Sentencia del Consejo de Estado (Radicación 25000-23-24-000-2001-90025-01 de 2014) que ordenó la delimitación y protección de varios humedales de Bogotá, incluyendo Juan Amarillo, Córdoba y Capellanía, sentando precedente en la defensa del derecho colectivo a un ambiente sano.

El Decreto 190 de 2004 (POT de Bogotá) reconoció a los humedales como parte de la Estructura Ecológica Principal (EEP), obligando a su inclusión en la planificación territorial. Sin embargo, la implementación de esta figura ha sido parcial, y muchos planes de manejo ambiental (PMA) han carecido de articulación efectiva con los sistemas de gestión del riesgo y cambio climático, limitando su impacto frente a las crecientes amenazas ambientales.

En los últimos años, el cambio climático ha intensificado los riesgos asociados a eventos extremos como inundaciones, sequías y pérdida de biodiversidad. Bogotá no es ajena a estos fenómenos: entre 2010 y 2011, el fenómeno de La Niña generó afectaciones significativas en zonas urbanas y rurales del Distrito, especialmente en sectores próximos a humedales, evidenciando la urgencia de integrar estos ecosistemas en la gestión del riesgo de desastres (IDIGER, 2012).

En respuesta a este contexto, el Congreso de la República aprobó la Ley 2469 de 2025, por medio de la cual se incorporan los humedales al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y al Sistema Nacional de Cambio Climático, reconociendo su papel estratégico como infraestructura natural para la adaptación climática. Esta Ley exige a las entidades territoriales adoptar medidas específicas para articular los humedales a sus sistemas de gestión del riesgo y de cambio climático, con enfoque de cuenca, participación comunitaria y justicia ambiental.

Bogotá, como capital del país y territorio históricamente afectado por decisiones urbanísticas excluyentes de la naturaleza, debe liderar el cumplimiento de esta ley mediante una normatividad local que reconozca a los humedales no solo como cuerpos de agua aislados, sino como estructuras vivas del metabolismo urbano, esenciales para construir resiliencia, equidad territorial y sostenibilidad.

Este proyecto de acuerdo se inscribe así en una tradición de lucha ambiental, mandatos legales y principios constitucionales que abogan por un modelo de ciudad más justo, ecológico y adaptado al cambio climático.

## 2.2 Justificación

La ciudad de Bogotá cuenta con una riqueza ecológica estratégica representada en sus humedales que cumplen funciones fundamentales en la regulación hídrica, mitigación del cambio climático provisión de servicios ecosistémicos y conservación de la biodiversidad. Sin embargo, estos ecosistemas enfrentan amenazas crecientes por urbanización desordenada, rellenos ilegales, contaminación y la baja articulación institucional para su protección.

La ciudad de Bogotá cuenta con una riqueza ecológica estratégica representada en sus humedales, que cumplen funciones fundamentales en la regulación hídrica, mitigación del cambio climático, provisión de servicios ecosistémicos y conservación de la biodiversidad. Sin embargo, estos ecosistemas enfrentan amenazas crecientes por urbanización desordenada, rellenos ilegales, contaminación y la baja articulación institucional para su protección.

En respuesta a este contexto, el Congreso de la República expidió la Ley 2469 de 2025, que establece la incorporación de los humedales al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y al Sistema Nacional de Cambio Climático (SNCC), especialmente en su componente de adaptación. La ley también ordena adoptar mecanismos en las cuencas hidrográficas para garantizar la gestión integral del recurso hídrico y la protección de los humedales.

Este proyecto de acuerdo busca aterrizar y aplicar esta ley en el Distrito Capital, fortaleciendo el marco normativo local para que los humedales sean reconocidos como elementos claves del sistema distrital de gestión del riesgo, restauración ecológica y planificación del territorio. Esto se hace más urgente ante el reconocimiento de la emergencia climática en Bogotá, declarada por el Concejo mediante el Acuerdo 790 de 2020.

## 3. METODOLOGÍA

La construcción de este proyecto de acuerdo se fundamenta en una metodología participativa, técnica y normativa, orientada por principios de planificación ambiental integrada, justicia climática y gobernanza ecosistémica, en concordancia con el mandato de la Ley 2469 de 2025. La propuesta legislativa fue desarrollada a través de las siguientes etapas:

### 3.1 Revisión normativa y jurisprudencial

Se llevó a cabo un análisis exhaustivo del marco jurídico aplicable, incluyendo leyes, decretos, sentencias judiciales y lineamientos técnicos nacionales e internacionales, con el fin de garantizar que el contenido del proyecto se alinee con los marcos vigentes de política pública en materia ambiental, climática y de riesgo.

**Normas consultadas:**

- Ley 1523 de 2012 – Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
- Ley 1931 de 2018 – Por la cual se crea el Sistema Nacional de Cambio Climático.
- Ley 2469 de 2025 – Por medio de la cual se incorporan los humedales al SNGRD y al SNCC.
- Decreto 190 de 2004 – POT vigente de Bogotá.
- Sentencia del Consejo de Estado Rad. 25000-23-24-000-2001-90025-01 de 2014.
- Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNBSE, MinAmbiente, 2012).

**3.2 Análisis ecosistémico de los humedales del Distrito**

Se realizó un estudio documental de los principales diagnósticos y líneas base sobre los humedales urbanos de Bogotá, integrando enfoques de servicios ecosistémicos, conectividad ecológica, amenaza por cambio climático, y vulnerabilidad social (Andrade, G. et al; 2011). Este componente fue clave para sustentar técnicamente la necesidad de su integración efectiva a los sistemas distritales de gestión del riesgo y cambio climático Van der Hammen, T. (2006).

**3.3 Consulta y participación comunitaria**

El proyecto fue construido con insumos de espacios de diálogo social con organizaciones ambientales, colectivos ciudadanos, veedurías de humedales, ediles de localidades con presencia de estos ecosistemas (Suba, Kennedy, Engativá, Fontibón y Bosa), así como representantes del sector académico y de entidades distritales como la Secretaría de Ambiente, el IDIGER y el Jardín Botánico (Red de Humedales de Bogotá, 2023)

Se aplicarán técnicas de recolección como:

- Mesas de trabajo locales y temáticas.
- Recorridos comunitarios de verificación en campo.
- Consulta a planes de manejo ambiental vigentes.
- Sistematización de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía sobre deterioro y riesgos en humedales (Participación Bogotá IDPAC, 2024)

### 3.4 Articulación con políticas públicas distritales

El contenido del proyecto de acuerdo fue alineado con los objetivos del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027, el Plan de Acción Climática (PAC) de Bogotá, y el Plan Distrital de Gestión del Riesgo, asegurando coherencia interinstitucional e inclusión en los instrumentos de planificación ambiental y territorial.

### 3.5 Redacción técnica-legislativa y validación jurídica

La redacción del articulado del proyecto de acuerdo fue elaborada bajo criterios de técnica normativa, claridad conceptual y competencia legal del Concejo de Bogotá, con el acompañamiento de asesores jurídicos y expertos en derecho ambiental.

### Síntesis metodológica

Este proyecto de acuerdo es resultado de un ejercicio legislativo responsable, basado en evidencia científica, enfoque territorial y participación ciudadana. Responde al mandato de la Ley 2469 de 2025, pero también a una deuda histórica con los ecosistemas que sostienen la vida en Bogotá.

## 4. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El presente proyecto de acuerdo se fundamenta en un marco jurídico robusto que reconoce a los humedales como ecosistemas estratégicos para la sostenibilidad urbana, el manejo del riesgo y la adaptación al cambio climático, en concordancia con las competencias legales y constitucionales del Concejo de Bogotá como autoridad normativa de orden local.

### 4.1 Constitución Política de Colombia

- **Artículo 79:** Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y el Estado debe proteger la diversidad e integridad del ambiente.
- **Artículo 80:** El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación y restauración.
- **Artículo 313, numeral 9:** Faculta a los concejos municipales y distritales para dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio.

Estos preceptos obligan a las autoridades territoriales a adoptar normas y medidas que garanticen la conservación de los ecosistemas y prevengan los riesgos derivados de la transformación ambiental del territorio.

### 4.2 Ley 136 de 1994 (Art. 91) – Régimen municipal

Establece que los concejos municipales y distritales pueden reglamentar la preservación del medio ambiente y participar en la formulación de políticas ambientales en el ámbito de su jurisdicción.

#### **4.3 Ley 99 de 1993 – Sistema Nacional Ambiental (SINA)**

Crea el Ministerio de Ambiente y establece que las autoridades ambientales deben coordinar la gestión integral de los recursos naturales, reconociendo la importancia ecológica de ecosistemas como los humedales.

#### **4.4 Ley 1523 de 2012 – Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres**

Establece el marco para la gestión del riesgo en Colombia y obliga a los entes territoriales a incorporar el análisis del riesgo en los instrumentos de planeación, reconociendo la importancia de los ecosistemas en la reducción del riesgo.

#### **4.5 Ley 1931 de 2018 – Sistema Nacional de Cambio Climático**

Define los mecanismos de articulación entre los niveles de gobierno para la adaptación y mitigación del cambio climático, e impone a los entes territoriales el deber de formular e implementar planes y acciones climáticas.

#### **4.6 Ley 2469 de 2025**

Es la norma central que motiva este proyecto. Ordena la incorporación de los humedales al **Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD)** y al **Sistema Nacional de Cambio Climático**, reconociéndolos como infraestructura natural y actores estratégicos en la adaptación climática. Exige a las entidades territoriales desarrollar acciones normativas, técnicas y presupuestales para cumplir este mandato.

#### **4.7 Decreto 190 de 2004 – Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá**

Reconoce a los humedales como parte integral de la **Estructura Ecológica Principal** del Distrito Capital, lo que les otorga un régimen especial de protección y exige su articulación con los sistemas de planeación urbana y ambiental.

#### **4.8 Acuerdo 546 de 2013 – Política Pública de Ecurbanismo y Construcción Sostenible.**

Establece principios para promover el equilibrio entre el desarrollo urbano y la conservación ambiental, destacando la importancia de la infraestructura ecológica en la resiliencia urbana.

#### **4.9 Sentencia C-339 de 2002 (Corte Constitucional):**

Reafirma la prevalencia del derecho al ambiente sano y la responsabilidad de las entidades territoriales en su protección.

#### **4.10 Consejo de Estado, Sentencia Rad. 25000-23-24-000-2001-90025-01 de 2014:**

Ordena la delimitación y protección efectiva de varios humedales de Bogotá como bienes de interés público y patrimonio ecológico.

#### 4.10 Competencia del Concejo de Bogotá

De acuerdo con el **Artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 (Estatuto Orgánico de Bogotá)**, el Concejo Distrital tiene la facultad para dictar acuerdos sobre:

- La protección del medio ambiente, los recursos naturales y la planificación del desarrollo territorial;
- La creación de políticas públicas ambientales;
- La reglamentación de los usos del suelo, incluyendo áreas protegidas;
- El fortalecimiento del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y del Sistema Distrital de Cambio Climático.

En este marco, el Concejo de Bogotá no solo tiene la **facultad**, sino también el **deber político y ético** de expedir normas orientadas a garantizar la protección de los humedales como bienes comunes estratégicos, especialmente en el contexto de emergencia climática declarado por el propio Distrito.

### 5. IMPACTO FISCAL

Este proyecto de acuerdo no crea una nueva entidad ni modifica la estructura administrativa del Distrito, y por tanto no genera gastos permanentes. En cambio, propone la adopción de medidas de articulación, planeación y priorización de los humedales dentro de los instrumentos existentes de gestión del riesgo de desastres y cambio climático. Las acciones propuestas podrán ser financiadas con cargo a los recursos de inversión previstos en los siguientes planes e instrumentos:

#### 5.1 Plan de Desarrollo Distrital 2024–2027

El Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura” incluye en su eje ambiental líneas estratégicas relacionadas con la restauración ecológica, la acción climática y la gestión del riesgo de desastres, que podrán servir de marco para la inclusión de acciones específicas sobre humedales, sin requerir adiciones presupuestales extraordinarias.

#### 5.2 Plan de Acción Climática de Bogotá (PAC 2020–2050)

El PAC contempla estrategias de adaptación climática basadas en soluciones basadas en la naturaleza (SbN), dentro de las cuales los humedales urbanos se reconocen como infraestructura natural esencial para la resiliencia climática. En su línea estratégica 3, se priorizan intervenciones de restauración, conservación y conectividad de ecosistemas urbanos, que podrán financiar parcialmente las acciones propuestas en este proyecto (Secretaría de Ambiente, 2020).



### 5.3 Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres 2022–2031

Este plan asigna recursos específicos a medidas de reducción del riesgo, incluyendo intervenciones en zonas de amenaza por inundación, restauración ambiental y ordenamiento del territorio con enfoque preventivo. Los humedales hacen parte de las áreas críticas identificadas para reducción de vulnerabilidades (IDIGER, 2020).

### 5.4 Fuentes complementarias

Este proyecto puede ser financiado parcialmente mediante recursos de cooperación internacional, regalías, transferencias intergubernamentales, y mecanismos como los pagos por servicios ambientales (PSA), fondos ambientales (como el FAEP o Fondo Verde Distrital) o inversiones obligatorias de compensación ambiental en el marco de licencias urbanísticas y ambientales.

La implementación de las medidas propuestas puede dividirse en tres fases presupuestales:

Fase	Actividad principal	Posible fuente	Rango estimado
1	Incorporación normativa en instrumentos de planificación (SDGRD y SDCC)	Funcionamiento sector ambiente / IDIGER	\$0 – \$200 millones (ajustes normativos y técnicos)
2	Estudios y priorización de humedales para acciones de restauración y monitoreo	PAC / Plan de Gestión del Riesgo / IDIGER / SDA	\$1.000 – \$3.000 millones
3	Intervención ecológica y monitoreo comunitario	Presupuesto inversión ambiental + cooperación	Desde \$5.000 millones, progresivo

Tabla 1. Fases presupuestales para la implementación del Proyecto de Acuerdo

Estas cifras son aproximadas y podrán ajustarse en la fase de implementación, según lo determinen las entidades competentes en los planes operativos anuales de inversión (POAI) y en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) del sector ambiental y de riesgo.

El presente proyecto de acuerdo no compromete recursos no apropiados, no crea rentas nuevas ni gastos permanentes, y se ejecutará conforme a los principios de eficiencia y sostenibilidad financiera definidos en la Ley 819 de 2003, y en el marco fiscal del Distrito.

Además, este tipo de inversión en infraestructura natural genera retornos socioeconómicos comprobables. Estudios del Banco Mundial (2021) y de la CEPAL (2022) han demostrado que las Soluciones Basadas en la Naturaleza pueden generar beneficios de hasta 3 a 1 en reducción de costos por daños y pérdidas frente a desastres, incremento de resiliencia comunitaria y mejora en la calidad de vida urbana.

## **6. TÍTULO – ATRIBUCIONES - CONSIDERANDOS**

### **6.1 TÍTULO**

#### **PROYECTO DE ACUERDO No. \_\_\_\_ DE 2025**

**“Por medio del cual se adoptan medidas para la incorporación de los humedales del Distrito Capital al Sistema Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y al Sistema Distrital de Cambio Climático, en cumplimiento de la Ley 2469 de 2025, y se dictan otras disposiciones”**

### **6.2 Atribuciones**

El Concejo de Bogotá, D.C., en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 313 numeral 9 de la Constitución Política, el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 (Estatuto Orgánico de Bogotá), la Ley 2469 de 2025, la Ley 99 de 1993, la Ley 1523 de 2012, la Ley 1931 de 2018, y demás normas concordantes, ACUERDA:

### **6.3 Considerandos**

- Que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia consagra el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente y conservar las áreas de especial importancia ecológica.
- Que el artículo 313 de la Constitución, en su numeral 9, faculta a los concejos distritales para dictar las normas necesarias para el control, preservación y defensa del patrimonio ecológico del territorio.
- Que el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 establece que corresponde al Concejo de Bogotá dictar normas para la preservación y defensa del patrimonio ecológico y natural del Distrito Capital, así como reglamentar lo relacionado con el medio ambiente.
- Que la Ley 2469 de 2025 establece que los humedales deben ser incorporados a los Sistemas Nacionales y Territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático, reconociendo su función ecológica, su capacidad de regulación hídrica, y su importancia como infraestructura natural esencial para la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres.

- Que la Ley 1523 de 2012 establece que la gestión del riesgo de desastres es un proceso social, colectivo y participativo, cuyo fin es la prevención, mitigación y atención de los efectos de los fenómenos naturales y antrópicos, y que debe estar incorporado en todos los niveles de planificación del desarrollo.
- Que la Ley 1931 de 2018 establece las directrices para la gestión del cambio climático en Colombia y define la obligación de las entidades territoriales de formular e implementar acciones que promuevan la adaptación basada en ecosistemas.
- Que el Plan de Acción Climática de Bogotá (PAC) reconoce a los humedales como ecosistemas clave para enfrentar los efectos del cambio climático urbano, proponiendo su restauración, protección y articulación con instrumentos de planeación.
- Que el Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres (2022–2031) identifica los humedales como áreas funcionales para la reducción de vulnerabilidades frente a fenómenos como inundaciones, y recomienda su incorporación como zonas de mitigación activa del riesgo.
- Que la jurisprudencia del Consejo de Estado, en especial la sentencia Rad. 25000-23-24-000-2001-90025-01 (2014), ha ordenado al Distrito la delimitación, recuperación y protección de humedales como bienes públicos de especial protección, y ha reconocido su papel en el equilibrio ambiental de la ciudad.
- Que los principios de desarrollo sostenible, precaución, resiliencia climática, gestión integral del agua y participación ciudadana exigen que las políticas públicas territoriales incorporen los ecosistemas estratégicos en sus estrategias de planificación, inversión y gobernanza, conforme a lo establecido en la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNBSE).
- Que el Distrito Capital ha declarado la Emergencia Climática mediante acto administrativo de la Alcaldía Mayor en el año 2020, lo cual compromete a todas las entidades del orden distrital a adoptar medidas urgentes y estructurales para la adaptación y mitigación del cambio climático, priorizando la protección de los ecosistemas estratégicos.
- Que el deterioro progresivo de los humedales por ocupación ilegal, contaminación, infraestructura vial, rellenos y mal manejo institucional ha debilitado sus funciones ecosistémicas, generando mayor exposición al riesgo de desastres y profundizando la desigualdad ambiental en territorios históricamente vulnerados.

- Que este proyecto de acuerdo responde a un mandato legal, ambiental, ético y social para asegurar el papel de los humedales como infraestructura natural esencial, integrarlos a los sistemas distritales de gestión del riesgo y cambio climático, y avanzar hacia un modelo de ciudad más resiliente, justa y ecológicamente equilibrada.

## **7. CONCLUSIONES**

### **7.1 El cambio climático y el riesgo de desastres exigen una respuesta ecosistémica e integral.**

La evidencia científica nacional e internacional ha demostrado que la restauración, protección y gestión sostenible de ecosistemas estratégicos, como los humedales urbanos, constituye una de las soluciones más efectivas para reducir vulnerabilidades y aumentar la resiliencia de las ciudades frente a eventos extremos como inundaciones, sequías y olas de calor.

### **7.2 Los humedales del Distrito Capital deben ser reconocidos como infraestructura natural esencial.**

Estos ecosistemas prestan servicios fundamentales para el metabolismo urbano, como la regulación hídrica, la recarga de acuíferos, el almacenamiento de carbono y el hábitat de la biodiversidad que se observa hoy en día en el distrito capital. Su deterioro debilita la capacidad adaptativa de la ciudad y pone en riesgo a miles de personas que habitan áreas aledañas.

### **7.3 La Ley 2469 de 2025 obliga a los entes territoriales a incorporar los humedales a sus sistemas de gestión del riesgo y cambio climático.**

Este mandato legal es una oportunidad para avanzar hacia un modelo de planificación territorial basado en el respeto por la naturaleza y el principio de precaución, mediante la articulación normativa, institucional y presupuestal de las entidades responsables en el Distrito Capital.

### **7.4 El Concejo de Bogotá tiene la competencia constitucional y legal para expedir normas que garanticen la protección ecológica de los humedales.**

Conforme al artículo 313 numeral 9 de la Constitución Política y al artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, el Concejo puede dictar normas sobre preservación del medio ambiente y protección del patrimonio ecológico, especialmente en el marco de políticas públicas de gestión del riesgo, adaptación climática y ordenamiento territorial.

### **7.5 La incorporación de los humedales al Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y al Sistema Distrital de Cambio Climático no implica un gasto adicional estructural.**

Las acciones contempladas pueden ser implementadas mediante los recursos de inversión ya previstos en el Plan de Desarrollo Distrital, el Plan de Acción Climática (PAC), el Plan Distrital de Gestión del Riesgo (PDGRD), y con apoyo de fuentes complementarias como cooperación internacional, regalías, PSA o compensaciones ambientales (Secretaría de Ambiente, 2020; IDIGER, 2020).

### **7.6 Este proyecto de acuerdo representa un avance hacia una ciudad más resiliente, equitativa y ambientalmente responsable.**

Incorporar los humedales al sistema distrital de gestión del riesgo y cambio climático es una acción concreta de justicia climática y justicia ambiental, que responde a los principios del desarrollo sostenible, a la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (especialmente ODS 11, 13 y 15), y a la Declaratoria de Emergencia Climática hecha por el Distrito en 2020.

### **7.7 El papel de las comunidades y organizaciones sociales es clave en la gobernanza de los humedales.**

Este proyecto de acuerdo contempla un enfoque participativo y territorializado, reconociendo el conocimiento local, la vigilancia comunitaria, y el derecho de las comunidades a incidir en el manejo y restauración de estos ecosistemas vitales.

## **8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

- Acuerdo 790 de 2020. Concejo de Bogotá. “Por el cual se declara la emergencia climática en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”.
- Andrade, G. (2011). *Ecosistemas estratégicos para la adaptación al cambio climático en Colombia*. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.
- Andrade, G. et al. (2011). *Ecosistemas estratégicos para la adaptación al cambio climático en Colombia*. Instituto Humboldt.
- CAR Cundinamarca. (2022). *Diagnóstico participativo de humedales compartidos en Bogotá y Sabana*.

- Congreso de la República de Colombia. Ley 2469 de 2025. *Por medio de la cual se incorporan los humedales al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y al Sistema Nacional de Cambio Climático.*
- Consejo de Estado. Sentencia Radicación 25000-23-24-000-2001-90025-01 (2014).
- Constitución Política de Colombia (1991), artículos 79 y 80.
- Decreto 190 de 2004. Por el cual se compilan las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, D.C.
- IDEAM. (2023). *Informe Nacional sobre Cambio Climático y Ecosistemas Estratégicos.*
- IDIGER (2012). *Balance de afectaciones por el fenómeno de La Niña 2010-2011 en Bogotá D.C.* Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático.
- IDIGER (2020). *Mapa Distrital de Amenazas por Inundación.*
- Jardín Botánico de Bogotá (2021). *Inventario de humedales y su estado ecológico.*
- ONU Medio Ambiente. (2022). *Lineamientos internacionales para la adaptación basada en ecosistemas.*
- Participación Bogotá (IDPAC) (2024). *Sistematización de encuentros ciudadanos sobre gobernanza ambiental.*
- Red de Humedales de Bogotá (2023). *Informes de monitoreo comunitario de humedales.*
- Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA). (2024). *Caracterización ecológica de los humedales del Distrito Capital.*
- Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). (2024). *Guía técnica para la incorporación de ecosistemas en el SNGRD.*
- Van der Hammen, T. (2006). *La sabana de Bogotá: de los ecosistemas naturales a la estructura socioecológica.* Bogotá: Sociedad Colombiana de Ecología.
- Van der Hammen, T. (2006). *La sabana de Bogotá: de los ecosistemas naturales a la estructura socioecológica.*
- Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres 2022-2031 (IDIGER).
- Plan de Acción Climática – PAC Bogotá 2020-2050 (Secretaría de Ambiente, 2020).
- Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (versión vigente y proyecto modificado).

- Congreso de la República. Ley 819 de 2003, Artículo 7.
- Congreso de la República. Ley 2469 de 2025.
- Alcaldía de Bogotá. Plan de Desarrollo Distrital 2024–2027.
- Secretaría Distrital de Ambiente. (2020). *Plan de Acción Climática de Bogotá (PAC)*.
- IDIGER. (2020). *Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres 2022–2031*.
- CEPAL. (2022). *Soluciones basadas en la naturaleza para el desarrollo sostenible en América Latina*.
- Banco Mundial. (2021). *Nature-based Solutions for Disaster Risk Management*.
- IDIGER. (2020). *Plan Distrital de Gestión del Riesgo 2022–2031*.
- Secretaría Distrital de Ambiente. (2020). *Plan de Acción Climática (PAC) de Bogotá*.
- IPCC. (2022). *Sixth Assessment Report*. Intergovernmental Panel on Climate Change.
- Banco Mundial. (2021). *Nature-Based Solutions for Disaster Risk Management*.
- CEPAL. (2022). *Soluciones basadas en la naturaleza para el desarrollo sostenible*.
- Andrade, G. et al. (2011). *Ecosistemas estratégicos para la adaptación al cambio climático en Colombia*. Instituto Humboldt.
- Van der Hammen, T. (2006). *La sabana de Bogotá: de los ecosistemas naturales a la estructura socioecológica*.
- Congreso de la República. Ley 2469 de 2025.
- Congreso de la República. Ley 1523 de 2012.
- Congreso de la República. Ley 1931 de 2018.
- IDIGER. (2020). *Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres 2022–2031*.
- Secretaría de Ambiente. (2020). *Plan de Acción Climática (PAC) de Bogotá*.
- Constitución Política de Colombia (1991), Art. 79, 80 y 313.
- Decreto Ley 1421 de 1993.
- Agenda 2030 – Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU).

- Alcaldía Mayor de Bogotá. (2020). *Declaratoria de Emergencia Climática*.
- Listado oficial de los humedales reconocidos en Bogotá.
- Diagnóstico sobre el riesgo climático en humedales (IDEAM – SDA).
- Inventario de acciones del Plan Distrital de Gestión del Riesgo en humedales.
- Indicadores de adaptación climática aplicados a los ecosistemas de humedal.
- Ley 2469 de 2025. Congreso de la República de Colombia.

Cordialmente,

**JOSE CUESTA NOVOA**

**Concejal de Bogotá D.C**

**Colombia Humana**



**PROYECTO DE ACUERDO No 967 DE 2025****PRIMER DEBATE**

**“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS HUMEDALES DEL DISTRITO CAPITAL AL SISTEMA DISTRITAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y AL SISTEMA DISTRITAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2469 DE 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”**

**EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.**

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las que le confieren los numerales 1, 7, y 25 artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993,

**RESUELVE****Artículo 1. Objeto.**

El presente Acuerdo tiene por objeto establecer lineamientos, instrumentos y obligaciones para la incorporación efectiva de los humedales del Distrito Capital al Sistema Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y al Sistema Distrital de Cambio Climático, en cumplimiento de la Ley 2469 de 2025.

**Artículo 2. Ámbito de aplicación.**

Las disposiciones del presente Acuerdo son de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del nivel central, descentralizado, y para las Alcaldías Locales en cuya jurisdicción se encuentren humedales urbanos, periurbanos o rurales.

**Artículo 3. Lineamientos generales.**

Las autoridades distritales deberán:

- a) Incorporar los humedales como zonas de protección prioritaria en el análisis de riesgo y vulnerabilidad climática.

- b) Integrar los Planes de Manejo Ambiental de los humedales (PMAH) con los Planes de Gestión Local del Riesgo.
- c) Reconocer a los humedales como infraestructura natural para la adaptación al cambio climático.
- d) Incluir los humedales y sus cuencas de recarga hídrica en los instrumentos de ordenamiento territorial, como zonas de amenaza por fenómenos de origen natural y antrópico.

#### **Artículo 4. Instrumentos de planificación y acción.**

Las entidades distritales competentes deberán:

- a) Elaborar un Plan Distrital de Gestión del Riesgo en Humedales, que deberá actualizarse cada 4 años.
- b) Diseñar un Sistema de Monitoreo Integrado de Humedales con sensores ambientales, mapas de riesgo e indicadores climáticos.
- c) Garantizar la inclusión de estos ecosistemas en el Plan de Acción Climática de Bogotá y los Planes Locales de Desarrollo.
- d) Articular acciones con la CAR en zonas rurales de Bogotá donde existan humedales compartidos.

#### **Artículo 5. Participación y gobernanza socioecológica.**

Créanse los Consejos Locales de Humedales y Gestión del Riesgo, como instancias de articulación entre la ciudadanía, organizaciones ambientales, academia y autoridades locales para la formulación, seguimiento y veeduría social de los planes y acciones adoptadas.

#### **Artículo 6. Presupuesto y financiación.**

El Distrito deberá destinar anualmente un porcentaje mínimo del 0,5% del presupuesto del Fondo de Gestión del Riesgo para actividades de protección, restauración y monitoreo de humedales, en el marco de los proyectos de inversión de cambio climático y protección de la Estructura Ecológica Principal.

#### **Artículo 7. Educación, cultura y apropiación social.**

La Secretaría de Educación Distrital, en coordinación con la Secretaría de Ambiente, diseñará estrategias pedagógicas sobre el valor de los humedales, enfocadas en la prevención del riesgo, la adaptación al cambio climático y la cultura del agua.

**Artículo 8. Seguimiento y control.**

El seguimiento al cumplimiento del presente Acuerdo estará a cargo de la Comisión de Plan de Desarrollo del Concejo de Bogotá, que podrá crear una Subcomisión Técnica Permanente de Humedales y Cambio Climático, con participación ciudadana.

**Artículo 9. Vigencia.**

El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

**NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE**

**PROYECTO DE ACUERDO No 968 DE 2025****PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE NOMBRAN DOS DE LOS TRES EDIFICIOS DEL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.”****I. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO**

El presente Proyecto de Acuerdo tiene por objeto rendir homenaje a los ilustres ciudadanos José Acevedo y Gómez y María Currea de Aya, mediante la asignación de sus nombres a dos de los tres edificios que conforman el complejo del Concejo de Bogotá, D.C. Esta designación se realiza en concordancia con la Resolución 0820 de 2022, expedida por la Mesa Directiva, la cual estableció el concurso público para la selección de los nombres de dichos edificios, con el fin de reconocer y exaltar la memoria de personajes destacados en la historia política y social de la ciudad y del país.

**II. MARCO JURÍDICO DE LA INICIATIVA****CONSTITUCIÓN POLÍTICA**

**ARTICULO 2.** Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (...).

**ARTICULO 20.** Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios de comunicación masiva (...)

**ARTICULO 209.** La función Administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad y eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones. (...)

**DECRETO – LEY 1421 DE 1993**

**ARTICULO 8. FUNCIONES GENERALES.** El Concejo es la suprema autoridad del Distrito Capital. En materia administrativa sus atribuciones son de carácter normativo, También le corresponde vigilar y controlar la gestión que cumplan las autoridades distritales.

**MARCO ADMINISTRATIVO DEL CONCEJO DE BOGOTÁ****RESOLUCIÓN 343 DE 2020 MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 317 DE 2022.**

**ARTÍCULO 3º.** Plan de Acción Cuatrienal para el período 2020-2023. Adoptar el Plan de Acción Cuatrienal para el periodo 2020-2023, «Concejo generador de valor público, transformador de realidades y vidas» del Concejo de Bogotá, D.C., el cual orientará la gestión institucional durante este período. (...)

APUESTAS ESTRATÉGICAS  
(...)

2. Concejo visible, transparente, abierto, cercano y sintonizado con la ciudadanía.

**RESOLUCIÓN 0820 DE 2022**

**ARTÍCULO 1º.** Objeto. La presente resolución establece el procedimiento y las condiciones para el desarrollo del concurso para la selección de los nombres para dos de los edificios del Concejo de Bogotá, que corresponden al ubicado en la calle 36 y el ubicado en la calle 34.

**RESOLUCIÓN 0871 DE 2022**

**ARTÍCULO 1º.** Otorgar un reconocimiento a los funcionarios Leyla Rodríguez Parra, Secretaria Ejecutiva 425-08 y Cesar Augusto Delgado Aguilar, Profesional Especializado 222-05, identificados con cédula de ciudadanía No. 51.879.032 y 9.350.877, respectivamente, quienes conformaron el equipo que presentó las propuestas que resultaron ganadoras para cada uno de los dos edificios, con los siguientes nombres: Nombre ganador para el edificio nuevo: EDIFICIO MARÍA CUREA DE AYA, con un puntaje consolidado del 42,35%; nombre edificio calle 36: EDIFICIO JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ, con un puntaje consolidado del 48,08%.

**ARTÍCULO 2º.** Los puntajes consolidados obtenidos para cada una de las propuestas de nombre presentadas para los edificios son los siguientes:

Propuesta nombre Edificio Nuevo	Puntaje	Propuesta nombre Edificio Antiguo	Puntaje
PORTAL DEL CABILDO	37,00%	VILLA VALOR	25,09%
CHYZAGÜE ó CHIZAGÜE	32,10%	TORRE A 6	18,00%
EDIFICIO EL NOGAL	24,75%	QUYSCUA	28,90%
<b>EDIFICIO MARÍA CURREA DE AYA</b>	<b>42,35%</b>	PALACIO DE LOS REGIDORES	30,37%
EDIFICIO PALACIO DISTRITO CAPITAL	23,45%	MARIA CURREA	32,95%
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ	23,23%	LA CASA DE LAS PALMAS	28,43%
KRATOS	26,98%	JORGE ELIÉCER GAITÁN	30,42%
NATALIA PONCE DE LEON	25,75%	<b>EDIFICIO JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ</b>	<b>48,08%</b>
TORRE B 5	16,70%	DEMOS	28,45%
VILLA ESPERANZA	28,17%	CASA COLONIAL CALLE 34	25,25%

### III. JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa tiene como propósito rendir homenaje a dos figuras históricas de gran relevancia para la vida política y social del país, mediante la asignación de sus nombres a los edificios que conforman el complejo del Concejo de Bogotá, D.C. Esta decisión reconoce su legado y contribución al desarrollo democrático y al fortalecimiento de la participación ciudadana.

#### 1. Edificio actual (Calle 36): “Edificio José Acevedo y Gómez”

Se propone denominar el edificio tradicional del Concejo de Bogotá, ubicado en la Calle 36, como **“Edificio José Acevedo y Gómez”**, en reconocimiento al papel histórico de este líder en el proceso de independencia nacional. José Acevedo y Gómez, conocido como **“El Tribuno del Pueblo”**, fue un personaje central en los hechos del 20 de julio de 1810, fecha clave en la historia de Colombia. Siendo regidor del Cabildo de Santafé, fue quien, con vehemencia y elocuencia, incitó al pueblo a la acción, avivando el espíritu revolucionario y favoreciendo la creación de la Junta Suprema de Gobierno.

Acevedo y Gómez pronunció la emblemática frase:

*“Si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, si dejáis escapar esta ocasión única y feliz, antes de doce horas seréis tratados como insurgentes: ved los calabozos, los grillos y las cadenas que os esperan.”*

Su figura está íntimamente ligada al nacimiento de la democracia, al concepto de cabildo abierto y a la participación ciudadana en la deliberación política, razón por la cual resulta altamente representativo que el edificio principal del Concejo de Bogotá lleve su nombre.

Además, el nombre de José Acevedo y Gómez es referente nacional del Concejo de Bogotá, en la medida que así se denomina la más antigua orden civil al mérito que otorga esta Corporación a los ciudadanos que se han distinguido por los servicios prestados a la ciudad y que sean de reconocida importancia, la cual fue creada mediante el Acuerdo 36 de 1993.

## **2. Edificio nuevo (Calle 34): “Edificio María Currea de Aya”**

Para el edificio más reciente del complejo del Concejo de Bogotá, ubicado en la Calle 34, se propone el nombre de **“Edificio María Currea de Aya”**, en honor a una de las pioneras del movimiento por los derechos políticos de las mujeres en Colombia. María Currea de Aya fue una destacada líder social y política, que tuvo un papel fundamental en la obtención del derecho al voto para las mujeres en 1957, en reconocimiento de lo cual fue nombrada primera concejal de Bogotá y presidenta del Cabildo en el año 1959, siendo la primera mujer en ocupar dichos puestos.

Además, en el año 1960 fue designada como “Mujer de las Américas” por la Unión de Mujeres Americanas con sede en Nueva York. Se trató de un reconocimiento por su trabajo a favor de las mujeres y por su labor como enfermera en pro de la salud de las colombianas.

Su legado ha sido reconocido por esta Corporación a través de la creación de la **Orden Civil al Mérito María Currea de Aya**, establecida en el año 2004. Esta distinción se entrega anualmente, cada 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, a aquellas mujeres que se han destacado en el ámbito social, cultural, laboral y en la defensa de los derechos humanos en el Distrito Capital.

Otorgar su nombre a uno de los edificios del Concejo constituye un acto simbólico y de justicia histórica, que honra la lucha de las mujeres por la igualdad y destaca el papel fundamental de su participación en los espacios de toma de decisiones públicas.

## **IV. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ**

El presente Proyecto de Acuerdo se enmarca dentro de las competencias constitucionales y legales asignadas al Concejo de Bogotá, D.C., en virtud de las siguientes disposiciones:

### **1. Constitución Política de Colombia**

El **Artículo 313** establece las funciones generales de los concejos municipales y distritales. En particular:

**Numeral 1.** Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio.

Esta disposición otorga al Concejo la facultad de expedir normas que organicen el funcionamiento de la administración distrital, lo cual incluye la denominación de bienes inmuebles del Distrito con fines institucionales y conmemorativos.

## **2. Estatuto Orgánico de Bogotá – Decreto Ley 1421 de 1993**

- **Artículo 3.º – Objeto del Estatuto:**

“El presente estatuto político, administrativo y fiscal tiene por objeto dotar al Distrito Capital de los instrumentos que le permitan cumplir las funciones y prestar los servicios a su cargo; promover el desarrollo integral de su territorio; y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.”

- **Artículo 12 – Funciones del Concejo Distrital:**

Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley:

**1.** Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

- **Artículo 13 – Iniciativa Legislativa:**

Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales, el Alcalde Mayor por conducto de sus secretarios, jefes de departamento administrativo o representantes legales de las entidades descentralizadas. También pueden presentar iniciativas el Personero, el Contralor y las Juntas Administradoras Locales en materias relacionadas con sus competencias. Así mismo, los ciudadanos y las organizaciones sociales pueden presentar proyectos de acuerdo sobre temas de interés comunitario, conforme a la ley estatutaria correspondiente.

## **3. Reglamento Interno del Concejo de Bogotá – Acuerdo 741 de 2019**

- **Artículo 34 Competencia de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno:**

La Comisión Segunda es la encargada de ejercer la función normativa y de control político respecto a los sectores administrativos de: Educación, Integración Social, Gestión Pública, Gobierno, Seguridad, Convivencia y Justicia, Mujer, y Gestión Jurídica, así como de sus entidades adscritas y vinculadas. También tiene competencia sobre la organización administrativa de la estructura de la Administración Pública Distrital.



De manera específica, esta comisión se encarga del estudio y trámite de proyectos relacionados con:

- La organización y funcionamiento del Concejo de Bogotá y la Administración Distrital.
- Asuntos institucionales y de régimen político.
- Actos simbólicos, conmemorativos y de reconocimiento público.
- Nomenclatura oficial de bienes públicos del Distrito Capital.

#### **4. Iniciativa del Proyecto de Acuerdo**

De conformidad con el **Artículo 65 del Acuerdo 741 de 2019**, los proyectos de acuerdo pueden ser presentados:

“Por los concejales individualmente, a través de las bancadas, de manera integrada con otros concejales o bancadas, y por el Alcalde Mayor, por medio de sus Secretarios, Jefes de Departamento Administrativo o Representantes Legales de las Entidades Descentralizadas.”

### **V. IMPACTO FISCAL**

El Artículo 7 de la Ley 819 de 2003, establece:

*“Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.*

*Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo.”*

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, la presente iniciativa no generará un impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, no obstante, ante el cambio de Administración Distrital y consecuentemente los incrementos presupuestales para este año, no se ocasionará la creación directa de una nueva fuente de financiación.

**PROYECTO DE ACUERDO No 968 DE 2025****PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE NOMBRAN DOS DE LOS TRES EDIFICIOS DEL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.”**

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en los numerales 1° y 3° del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993,

**ACUERDA:****ARTÍCULO 1°- OBJETO.**

El presente Acuerdo tiene por objeto rendir homenaje a los ilustres ciudadanos **José Acevedo y Gómez** y **María Currea de Aya**, mediante la asignación de sus nombres a dos de los tres edificios que conforman el complejo institucional del Concejo de Bogotá, D.C. Esta designación se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en la **Resolución 0820 de 2022**, mediante la cual se convocó el concurso público para la selección de los nombres, con el fin de reconocer y exaltar la memoria de personajes destacados en la historia política y social de la ciudad y del país, cuyos ganadores fueron reconocidos mediante la **Resolución 0871 de 2022**.

**ARTÍCULO 2°. DENOMINACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE 34.**

Asígnese el nombre **“Edificio María Currea de Aya”** al inmueble ubicado en la **Calle 34 No. 28A - 41**, sede del Concejo de Bogotá, D.C.

**ARTÍCULO 3°. DENOMINACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE 36.**

Asígnese el nombre **“Edificio José Acevedo y Gómez”** al inmueble ubicado en la **Calle 36 No. 28A - 41**, sede principal del Concejo de Bogotá, D.C.

**ARTICULO 4°- VIGENCIA.** El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

**AUTOR:**

**SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA**

Concejal de Bogotá

Partido Liberal Colombiano

## **PROYECTO DE ACUERDO No 969 DE 2025**

### **PRIMER DEBATE**

#### **“POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA UN LITERAL AL ARTÍCULO 4 DEL ACUERDO 018 DE 1999 PARA FORTALECER LAS FUNCIONES DEL DADEP EN MATERIA DE INVENTARIO Y GEORREFERENCIACIÓN DE ESTACIONES RADIOELÉCTRICAS EN EL ESPACIO PÚBLICO”**

### **EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

#### **I. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO**

El presente proyecto de acuerdo tiene como objetivo adicionar una función al artículo 4 del Acuerdo 018 de 1999, con el fin de facultar al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) para realizar el inventario, actualización y georreferenciación de las infraestructuras de telecomunicaciones, en particular las estaciones radioeléctricas instaladas en el espacio público del Distrito Capital. Esta información técnica permitirá a las entidades competentes, como la Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaría del Hábitat y la Secretaría de Hacienda, avanzar en procesos de autorización, control, regularización y aprovechamiento económico de esta infraestructura, en concordancia con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial (Decreto 555 de 2021), el Decreto Distrital 083 de 2023 y las disposiciones vigentes en materia de telecomunicaciones.

#### **II. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO**

A lo largo de los años 2011 a 2024, el Distrito Capital ha expedido múltiples decretos para regular el despliegue y la autorización de estaciones radioeléctricas, así como la coordinación entre entidades como el DADEP, la Secretaría de Planeación, la Secretaría Distrital de Hábitat y la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, la derogatoria sucesiva de estos decretos ha generado una desarticulación en los procesos institucionales, técnicos y operativos relacionados con estas infraestructuras.

Entre los decretos más relevantes derogados (ver Tabla 1.), se encuentran el Decreto 543 de 1995, el 061 de 1997, el 676 de 2011, el 397 de 2017, el 805 de 2019 y el 083 de 2023. Actualmente, los decretos vigentes que enmarcan el tratamiento normativo y fiscal de las estaciones radioeléctricas son el Decreto 555 de 2021 (Plan de Ordenamiento Territorial), el Decreto 315 de 2024 (aprovechamiento económico del espacio público) y el Decreto 482 de 2024 (Procedimiento Único de despliegue de redes).

#### **Tabla 1.**

Evolución normativa distrital sobre regulación de estaciones radioeléctricas y el uso del espacio público (1995-2024)

DECRETO	TEMA	VIGENCIA
543 de 1995	<i>"Por el cual se reglamenta la expedición del permiso urbanístico para la instalación de los elementos que conforman a la red de telefonía móvil celular y se dictan otras disposiciones".</i>	<b>DEROGADO</b>
061 de 1997	<i>"por el cual se establecen las normas urbanísticas y arquitectónicas necesarias para la aprobación del diseño y la ocupación temporal o permanente del espacio donde se instalarán los elementos que conforman una estación de la red de telecomunicaciones inalámbricas, se dictan otras disposiciones.".</i>	<b>DEROGADO</b>
676 de 2011	<i>"Por el cual se reglamenta el Acuerdo 339 de 2008, se establecen las normas urbanísticas, arquitectónicas y técnicas para la ubicación e instalación de Estaciones de Telecomunicaciones Inalámbricas utilizadas en la prestación del servicio público de telecomunicaciones en Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones".</i>	<b>DEROGADO</b>
397 de 2017	<i>"Por el cual se establecen los procedimientos, las normas urbanísticas, arquitectónicas y técnicas para la localización e instalación de Estaciones Radioeléctricas utilizadas en la prestación de los servicios públicos de TIC en Bogotá</i>	<b>DEROGADO</b>

	<i>D.C., y se dictan otras disposiciones”.</i>	
805 de 2019	<i>“Por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto Distrital 397 de 2017, modificado por el Decreto Distrital 472 de 2017, y se dictan otras disposiciones”.</i>	<b>DEROGADO</b>
555 de 2021	<i>“Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.”.</i>	<b>VIGENTE</b>
083 de 2023	<i>“Por medio del cual se establecen los requisitos y el procedimiento para la autorización, instalación, localización y regularización de estaciones radioeléctricas en Bogotá, D.C., en los términos señalados en los artículos 218 y 219 del Decreto Distrital 555 de 2021 y se dictan otras disposiciones”</i>	<b>DEROGADO</b>
315 de 2024	<i>“Por medio del cual se reglamentan los artículos <a href="#">147</a> y <a href="#">549</a> del Decreto Distrital 555 de 2021, en lo que tiene que ver con el aprovechamiento económico del espacio público y la explotación económica de la infraestructura pública en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones.”</i>	<b>VIGENTE</b>
482 de 2024	<i>“Por medio del cual se adopta en el Distrito Capital el Procedimiento Único para el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones,</i>	<b>VIGENTE</b>

	<i>contemplado en el Decreto <a href="#">1031</a> de 2024 en el cual se adiciona el Título <a href="#">30</a> a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015 y se dictan otras disposiciones”.</i>	
--	---	--

Pese a este andamiaje normativo, el Distrito no cuenta con un inventario técnico, detallado y actualizado de las estaciones radioeléctricas o también denominadas redes de infraestructura de telecomunicaciones instaladas en el espacio público. Según información de la Secretaría Distrital de Planeación, el último trabajo de campo se realizó en 1995. Desde entonces, si bien se han aprobado 7.742<sup>1</sup> estaciones radioeléctricas en Bogotá (registro de la BDGC), solo 3.305 cuentan con información completa, lo que representa apenas un 42,7 % del total.

Esta situación ha dificultado la identificación territorial, la gestión interinstitucional, el control urbanístico y el aprovechamiento económico del espacio público utilizado para telecomunicaciones. En ese contexto, se propone adicionar al artículo 4 del Acuerdo 018 de 1999 una función específica al DADEP, para que asuma la elaboración, actualización, rastreo, control y georreferenciación del inventario de estaciones radioeléctricas o también denominadas redes de infraestructura de telecomunicaciones existentes en Bogotá D.C., sin invadir competencias, pero facilitando la articulación técnica con las entidades competentes.

Ya que, contar con un inventario oficial, actualizado y accesible permitirá al Distrito:

- Optimizar el recaudo por aprovechamiento económico de dichas infraestructuras.
- Generar datos confiables para el control y la planeación territorial.
- Facilitar procesos de regularización y fiscalización.
- Mejorar la transparencia sobre el uso del espacio público.

**Diagnóstico técnico institucional sobre las estaciones radioeléctricas**

Las entidades competentes han reconocido las limitaciones actuales para ejercer control, registro y seguimiento efectivo a las estaciones radioeléctricas en Bogotá. Según información remitida por la Secretaría Distrital del Hábitat, entre noviembre de 2023 y 2024, se radicaron 22 solicitudes para nuevas estaciones, de las cuales únicamente 8 fueron autorizadas, y 14 devueltas por incumplimientos técnicos o documentales. Además, se proyecta la instalación de 48 estaciones para el año en curso.

De manera preocupante, la Secretaría Distrital de Hábitat, también informa que apenas se ha recibido una sola queja ciudadana tras la expedición del Decreto 083 de 2023, lo que podría evidenciar un bajo nivel de conocimiento por parte de la ciudadanía respecto a los mecanismos de control y participación. Igualmente, se confirma que no existe un inventario actualizado y completo, lo cual impide aplicar de forma efectiva los cobros por aprovechamiento económico.

<sup>1</sup> Información suministrada por la SDP mediante oficio 3-2024-35783 del 15 de octubre de 2024.

Por su parte, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) indica que las funciones de control y sanción por instalaciones irregulares recaen actualmente en las alcaldías locales, conforme a la Ley 2116 de 2021 y el Decreto 083 de 2023, lo cual ha fragmentado las competencias y dificultado la articulación interinstitucional.

Finalmente, la Secretaría de Planeación ha manifestado que la falta de trazabilidad histórica y de articulación con el Sistema de Información Geográfica ha dificultado el cumplimiento del objetivo de contar con una red de telecomunicaciones ordenada, que a la vez garantice recaudo, cobertura y sostenibilidad del espacio público.

Por estas razones, se hace indispensable la creación de un marco institucional claro y una competencia centralizada que permita ordenar el ecosistema de estaciones radioeléctricas, mejorar la fiscalización del uso del espacio público, y fortalecer la política pública asociada a la conectividad y a la sostenibilidad urbana.

### III. MARCO JURÍDICO

Desde 1995 hasta la fecha, el Distrito Capital ha expedido y derogado múltiples normas para regular la instalación, localización y autorización de estaciones radioeléctricas en Bogotá. Este marco normativo ha tenido ajustes importantes que han afectado la estabilidad regulatoria del sector y han dificultado la consolidación de un sistema unificado de control y gestión del espacio público asociado a infraestructuras de telecomunicaciones.

#### ➤ Constitución Política

En el inciso primero del artículo 82 de la Constitución Política se ordena que es “deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.” (Negrilla JPR). Por otra parte, en el artículo 63 de la Carta se dispone que los “bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.”.

En el artículo 365 de la Carta se dispone que “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado (...)”, razón por la cual debe “asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.” También se ordenó en la misma norma que los “servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares.”.

El numeral 6 del artículo 313 de la Constitución Política establece que corresponde a los concejos municipales y distritales determinar “la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta.”.

### ➤ **Legislación y disposiciones administrativas**

En el artículo 7 de la Ley 9 de 1989 se regularon, especialmente, algunas competencias de los concejos municipales y distritales y de los alcaldes relacionadas con los bienes de uso público. Por una parte se estableció que los concejos podrían crear entidades “responsables de administrar, defender, desarrollar, mantener y apoyar financieramente el espacio público, el patrimonio inmobiliario y las áreas de cesión.” Y, a los alcaldes les asignó la competencia de “crear dependencias u organismos administrativos, otorgándoles autonomía administrativa y financiera sin personería jurídica” y, también, la facultad de reglamentar “lo concerniente a la administración, mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio público.”. En la misma norma se impuso que los alcaldes “podrán entregar a particulares la administración, mantenimiento y aprovechamiento económico de los bienes de uso público, utilizando el mecanismo contenido en el Capítulo XVI de la Ley 489 de 1998. Igualmente podrán expedir actos administrativos que permitan la ocupación temporal de dichos bienes, considerando en ambos casos lo dispuesto por el artículo 63 de la Constitución.”.

En el literal d) del artículo 91 de la Ley 136 de 1994 se establece que corresponde al alcalde en relación con la administración municipal: “Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente.”.

En el artículo 5 de la Ley 9 de 1989, modificado por el artículo 22 de la Ley 2044 de 2020, se define el espacio público en los siguientes términos:

ARTÍCULO 5o. Entiéndese por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes.

Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyan, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo.



Parágrafo 1°. El espacio público resultante de la adopción de instrumentos de planeamiento o de gestión o de la expedición de licencias urbanísticas se incorporará con el solo procedimiento de registro de la escritura de constitución de la urbanización o la parcelación en la Oficina de Instrumentos Públicos, en la cual se determinen las áreas públicas objeto de cesión y las áreas privadas, por su localización y linderos.

La escritura correspondiente deberá otorgarse y registrarse antes de la iniciación de las ventas del proyecto respectivo.

Parágrafo 2°. El espacio público resultante del desarrollo de proyectos de infraestructura se incorporará mediante el registro de la escritura de entrega o cesión en la oficina de instrumentos públicos. Así mismo, previo procedimiento de desenglobe y apertura del folio de matrícula inmobiliaria en la escritura de cesión se debe determinar su localización, cabida y linderos. La escritura correspondiente deberá otorgarse y registrarse antes de la puesta en funcionamiento de la infraestructura construida.

Parágrafo 3°. Luego de la suscripción de la escritura del espacio público generado mediante cesión o entrega de infraestructura, se notificará por parte de la oficina de instrumentos públicos a las entidades territoriales como representantes del patrimonio inmueble municipal o distrital, quienes en un término máximo de 15 días hábiles verificarán su concordancia con las normas y estándares del espacio público establecidas en los instrumentos de ordenamiento territorial de cada municipio o distrito si la encuentran acorde, manifestarán su aceptación, caso contrario solicitarán al notario los ajustes y aclaraciones respectivas y radicarán las escrituras ajustadas a la respectiva oficina de Registro de Instrumentos Públicos.”.

También en los artículo 2.2.3.1.1 del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 de 2015, se dispuso una regulación detallada frente al espacio público.

Entre otros aspectos se dispuso: se estableció como un deber del Estado y especialmente de los municipio y distritos, la protección del espacio público (art.2.2.3.1.1); se realizó la definición del espacio público (art.2.2.3.1.2); se enunciaron sus componentes y elementos (arts.2.2.3.1.3 y 2.2.3.1.5); se reguló su destinación (art.2.2.3.1.4); se establecieron las reglas para su administración, mantenimiento, administración y las competencias de las entidades públicas (arts.2.2.3.3.1, 2.2.3.3.2, 2.2.3.3.3). Frente a los anteriores aspectos se impuso:

- Definición de espacio público: “El espacio público es el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de los habitantes.”. (Art.2.2.3.1.2). (Resaltado JPR).

- Componentes y elementos del espacio público. Hacen parte del espacio público los bienes de uso público, que son aquellos destinados al uso o disfrute colectivo; los “elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen necesidades de uso público” y; las “áreas requeridas para la conformación del sistema de espacio público (...)”. (Art.2.2.3.1.5).

También hace parte del espacio público elementos naturales como cerros, montañas, colinas, volcanes, nevados cuencas, microcuencas, manantiales, ríos, quebradas, arroyos, playas fluviales, rondas hídricas, zonas de manejo, zonas de bajamar y protección ambiental, y relacionados con cuerpos de agua, tales como mares, playas marinas, arenas y corales, ciénagas, lagos, lagunas, pantanos, humedales, rondas hídricas, zonas de manejo y protección ambiental. (Art.2.2.3.1.5).

Igualmente hacen parte elementos artificiales relacionados con corrientes de agua, tales como “canales de desagüe, alcantarillas, aliviaderos, diques, presas, represas, rondas hídricas, zonas de manejo y protección ambiental, y relacionados con cuerpos de agua tales como: embalses, lagos, muelles, puertos, tajamares, rompeolas, escolleras, rondas hídricas, zonas de manejo, protección ambiental”. (Art.2.2.3.1.5).

También constituyen elementos del espacio público las áreas “de especial interés ambiental, científico y paisajístico, las áreas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular, los componentes de los cruces o intersecciones, tales como: esquinas, glorietsas orejas, puentes vehiculares, túneles y viaductos; las áreas articuladoras de espacio público y de encuentro; las áreas para la conservación y preservación de las obras de interés público y los elementos urbanísticos, arquitectónicos, históricos, culturales, recreativos, artísticos y arqueológicos. (Art.2.2.3.1.5).

Por otra parte se ordena que algunos bienes de particulares pueden ser incorporados por los municipios y distritos en los planes de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desarrollen como elementos constitutivos del espacio público. Entre otros se mencionan “las áreas y elementos arquitectónicos espaciales y naturales de propiedad privada que por su localización y condiciones ambientales y paisajísticas” (...) “tales como cubiertas, fachadas, paramentos, pórticos, antejardines, cerramientos;”. Y sin que sea necesario incorporarlos como elementos del espacio público en los referidos actos, se dispuso que hacen parte del espacio público por ser “parte integral del perfil vial” (...) “, “los antejardines de propiedad privada.” (Art.2.2.3.1.5).

También se incluyeron, como elementos complementarios del espacio público, entre otros, la vegetación natural e intervenida y los componentes del amueblamiento y señalización urbana. (Art. 2.2.3.1.5).

Hacen parte del espacio público las zonas de cesión que entregan a los municipios y distritos los desarrolladores de proyectos urbanísticos. Las cesiones pueden ser obligatorias o gratuitas y entran a formar parte del espacio público. En el artículo 2.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015 se impone que se entiende por cesión obligatoria la “enajenación gratuita de tierras en favor de la entidad territorial correspondiente, que da en contraprestación a la autorización para urbanizar o parcelar.”.

En el artículo 2.2.6.1.4.5 del mismo Decreto, frente a las áreas de cesión, se ordenó que, sin “perjuicio de las normas nacionales que regulan la materia, los Planes de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen o complementen determinarán las especificaciones para la conformación y dotación de las cesiones gratuitas destinadas a vías, equipamientos colectivos y espacio público en general. Cuando las zonas de cesión presenten áreas inferiores a las mínimas exigidas, o cuando su ubicación sea inconveniente para el municipio o distrito, se podrán compensar en dinero o en otros inmuebles, en los términos que reglamente el Concejo municipal o distrital. Estas previsiones se consignarán en las respectivas licencias de urbanización o parcelación. (...)”.

- Destinación de los bienes de uso público. Los bienes de uso público se destinarán a la satisfacción de intereses urbanos colectivos. Esta destinación solamente podrá ser variada por decisión de los concejos municipales o distritales “a través de los planes de ordenamiento territorial o de los instrumentos que los desarrollen aprobados por la autoridad competente, siempre que sean sustituidos por otros de características y dimensiones equivalente o superiores. La sustitución debe efectuarse atendiendo criterios, entre otros, de calidad, accesibilidad y localización.” (arts.2.2.3.1.2 y 2.2.3.1.4).
- Funciones de las entidades responsables del espacio público. En el artículo 2.2.3.3.2 del Decreto 1077 de 2015 se impone que los “municipios y distritos podrán crear de acuerdo con su organización legal entidades responsables de la administración, desarrollo, mantenimiento y apoyo financiero del espacio público, que cumplirán entre otras las siguientes funciones:” (...) “1. Elaboración del inventario del espacio público.” (...) “2. Definición de políticas y estrategias del espacio público.” (...) “3. Articulación entre las distintas entidades cuya gestión involucra directa o indirectamente la planeación, diseño, construcción, mantenimiento, conservación, restitución, financiación y regulación del espacio público.” (...) “4. Elaboración y coordinación del sistema general de espacio público como parte del plan de ordenamiento territorial.” (...) “5. Diseño de los subsistemas, enlaces y elementos del espacio público.” (...) “6. Definición de escalas y criterios de intervención en el espacio público.” (...) “7. Desarrollo de mecanismos de participación y gestión.” (...) “8. Desarrollo de la normatización y estandarización de los elementos del espacio público.” (...) “Las corporaciones autónomas regionales y las autoridades ambientales de las entidades territoriales, establecidas por la Ley 99 de 1993, tendrán a su cargo la definición de las políticas ambientales, el manejo de los elementos naturales, las normas técnicas para la conservación, preservación y recuperación de los elementos naturales del espacio público.”.

- Administración, mantenimiento y el aprovechamiento económico del espacio público. En el artículo 2.2.3.3.3 del Decreto 1077 de 2015 se impone que los “municipios y distritos podrán contratar con entidades privadas la administración, mantenimiento y el aprovechamiento económico para el municipio o distrito del espacio público, sin que impida a la ciudadanía de su uso, goce, disfrute visual y libre tránsito.”.

Para el aprovechamiento económico del espacio público generado por parques, plazas y plazoletas, los municipios y distritos, adicional a la opción de autorización mediante acto administrativo, pueden celebrar contratos con entidades privadas siempre que su uso sea compatible. Se impuso también que en “que en ningún caso estos contratos generarán derechos reales para las entidades privadas y deberán dar estricto cumplimiento a la prevalencia del interés general sobre el particular. (2.2.3.3.4). Es importante tener en cuenta que, de conformidad con lo ordenado en el artículo 2.2.3.3.6 los “parques y zonas verdes que tengan el carácter de bienes de uso público no podrán ser encerrados en forma tal que priven a la ciudadanía de su uso, goce, disfrute visual y libre tránsito.” Y, se ordenó en la misma norma que para “el efecto de parques y zonas del nivel local o de barrio que tengan carácter de bienes de uso público la entidad competente de su manejo administrativo, podrá encargar a organizaciones particulares sin ánimo de lucro y que representen los intereses del barrio o localidad la administración, mantenimiento, dotación y siempre y cuando garanticen el acceso al mismo de la población, en especial la permanente de su área de influencia.”.

- En el artículo 2.2.3.3.7 del Decreto 1077 de 2015 se impuso que para la defensa de los elementos constitutivos del espacio público podrá incoarse acciones populares en los términos del artículo 1005 del Código Civil y la Ley 472 de 1998. Igualmente se ordenó que la “ocupación en forma permanente de los parques públicos, zonas verdes y demás bienes de uso público, el encerramiento sin la debida autorización de las autoridades municipales o distrital, la realización de intervenciones en áreas que formen parte del espacio público, sin la debida licencia o contraviniéndola y la ocupación temporal o permanente del espacio público con cualquier tipo de amoblamiento o instalaciones dará lugar a la imposición de las sanciones urbanísticas que señala el artículo 104 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 2 de la Ley 810 de 2003.”.Art.2.2.3.3.8).

En el Decreto compilatorio 1077 de 2015 del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio se establece en relación con la intervención y ocupación del espacio público:

Artículo 2.2.6.1.1.12.- Licencia de intervención y ocupación del espacio público. Es la autorización previa para ocupar o para intervenir bienes de uso público incluidos en el espacio público, de conformidad con las normas urbanísticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, en los instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás normatividad vigente.

Parágrafo 1°. Para intervenir y ocupar el espacio público, los municipios y distritos solamente podrán exigir las licencias, permisos y autorizaciones que se encuentren previstos de manera taxativa en la ley o autorizados por esta, los cuales se agruparán en una o varias de las modalidades de licencia de intervención u ocupación del espacio público previsto en el presente Capítulo.

Parágrafo 2°. Las entidades del nivel central o descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal y distrital, salvo las empresas industriales y comerciales del Estado, y las sociedades de economía mixta, no están obligadas a obtener licencias de intervención y ocupación del espacio público cuando en cumplimiento de sus funciones, ejecuten obras o actuaciones expresamente contempladas en los planes de desarrollo nacional, departamentales, municipales o distritales, en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen y complementen.

Artículo 2.2.6.1.1.13.- Modalidades de la licencia de intervención y ocupación del espacio público. Son modalidades de la licencia de intervención y ocupación del espacio público las siguientes:

1. Licencia de ocupación del espacio público para la localización de equipamiento. Es la autorización para ocupar una zona de cesión pública o de uso público con edificaciones destinadas al equipamiento comunal público. Requieren de la expedición de este tipo de licencias los desarrollos urbanísticos aprobados o legalizados por resoluciones expedidas por las oficinas de planeación municipales o distritales, o por dependencias o entidades que hagan sus veces, en los cuales no se haya autorizado el desarrollo de un equipamiento comunal específico. Los municipios y distritos determinarán el máximo porcentaje de las áreas públicas que pueden ser ocupadas con equipamientos. En cualquier caso, la construcción de toda edificación destinada al equipamiento comunal requerirá la respectiva licencia de construcción y sólo podrá localizarse sobre las áreas de cesión destinadas para este tipo de equipamientos, según lo determinen los actos administrativos respectivos.

2. Licencia de intervención del espacio público. Por medio de esta licencia se autoriza la intervención del espacio público para:

2.1 La construcción, rehabilitación, reparación, sustitución, modificación y/o ampliación de instalaciones y redes para la provisión de servicios públicos domiciliarios y de telecomunicaciones.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 26 de la Ley 142 de 1994 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, las autorizaciones deben obedecer a un estudio de factibilidad técnica, ambiental y de impacto urbano de las obras propuestas, así como de la coherencia de las obras con los Planes de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que los desarrollen o complementen.

Se exceptúa de la obligación de solicitar la licencia de que trata este literal, la realización de obras que deban adelantarse como consecuencia de averías, accidentes o emergencias cuando a demora en su reparación pudiera ocasionar daños en bienes o personas. Quien efectúe los trabajos en tales condiciones deberá dejar el lugar en el estado en que se hallaba antes de que sucedieran las situaciones de avería, accidente o emergencia, y de los trabajos se rendirá un informe a la entidad competente para que realice la inspección correspondiente. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a las sanciones establecidas en la ley.

Los particulares que soliciten licencia de intervención del espacio público en ésta modalidad deberán acompañar a la solicitud la autorización para adelantar el trámite, emitida por la empresa prestadora del servicio público correspondiente.

2.2 La utilización del espacio aéreo o del subsuelo para generar elementos de enlace urbano entre inmuebles privados, o entre inmuebles privados y elementos del espacio público, tales como: puentes peatonales o pasos subterráneos.

La autorización deberá obedecer a un estudio de factibilidad técnica e impacto urbano, así como de la coherencia de las obras propuestas con el Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen o complementen.

2.3 La dotación de amoblamiento urbano y la instalación de expresiones artísticas o arborización.

Los municipios y distritos establecerán qué tipo de amoblamiento sobre el espacio público requiere de la licencia de intervención y ocupación del espacio público, así como los procedimientos y condiciones para su expedición.

2.4 Construcción y rehabilitación de andenes, parques, plazas, alamedas, separadores, ciclorrutas, orejas de puentes vehiculares, vías peatonales, escaleras y rampas.

3. Licencia de intervención y ocupación temporal de playas marítimas y terrenos de bajamar. Es la autorización otorgada por la autoridad municipal o distrital competente, por la Gobernación del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, o por la autoridad designada para tal efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen o complementen, para ocupar o intervenir temporalmente las playas y zonas de bajamar, sin perjuicio de las concesiones, permisos o autorizaciones cuyo otorgamiento le corresponda a la Dirección General Marítima - Dimar- o al Instituto Nacional de Concesiones -INCO-.

Esta autorización podrá concederse siempre y cuando se garantice el libre tránsito a la ciudadanía y no se vulnere la utilización de las zonas de playas marítimas y terrenos de bajamar al uso común.

En el caso de las licencias para la ocupación de playas con fines turísticos, culturales, y artísticos o recreativos en los distritos de Barranquilla, Santa Marta o Cartagena, se requerirá concepto técnico favorable emanado de la Dimar, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 768 de 2002 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 177 del Decreto Ley 2324 de 1984 y 43 de la Ley 1ª de 1991, ninguna autoridad concederá permiso para la construcción de vivienda en las playas marítimas y terrenos de bajamar.

ARTÍCULO 2.2.6.1.1.14. Derechos sobre el espacio público. Las licencias de intervención y ocupación del espacio público sólo confieren a sus titulares el derecho sobre la ocupación o intervención sobre bienes de uso público. A partir de la expedición de la licencia, la autoridad competente podrá revocarla en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO 2.2.6.1.1.15. Responsabilidad del titular de la licencia. Modificado por el art. 5, Decreto Nacional 1203 de 2017. El titular de la licencia o del permiso será el responsable de todas las obligaciones urbanísticas y arquitectónicas adquiridas con ocasión de su expedición y extracontractualmente por los perjuicios que se causaren a terceros en desarrollo de la misma.

ARTÍCULO 2.2.6.1.1.15. (Adicionado art. 2, Decreto 1470 de 2024.). Entrega material de espacio público en proyectos de obra pública. En los proyectos de obra pública que generen espacio público en suelo urbano, rural y/o de expansión urbana, las entidades encargadas de la ejecución de los proyectos deberán elaborar un plano definitivo de obra pública, que contenga como mínimo la identificación del polígono de espacio público intervenido y/o resultante, con la respectiva relación de mojoneros y áreas.

Con base en este plano se realizará la entrega material e incorporación al inventario del espacio público del municipio o distrito, de las zonas de cesión o áreas destinadas y/o generadas para espacio público o equipamientos que se hayan determinado en los planes de ordenamiento territorial, planes parciales, el Plan de Gestión del Hábitat, la legalización urbanística y demás instrumentos que desarrollen y complementen los planes de ordenamiento territorial respectivos.

En la Ley 142 de 1994, mediante la cual se estableció el régimen de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía pública fija básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural; se ordena frente al uso del espacio público para la prestación de estos servicios:

**ARTÍCULO 26. PERMISOS MUNICIPALES.** En cada municipio, quienes prestan servicios públicos estarán sujetos a las normas generales sobre la planeación urbana, la circulación y el tránsito, el uso del espacio público, y la seguridad y tranquilidad ciudadanas; y las autoridades pueden exigirles garantías adecuadas a los riesgos que creen.

Los municipios deben permitir la instalación permanente de redes destinadas a las actividades de empresas de servicios públicos, o a la provisión de los mismos bienes y servicios que estas proporcionan, en la parte subterránea de las vías, puentes, ejidos, andenes y otros bienes de uso público. Las empresas serán, en todo caso, responsables por todos los daños y perjuicios que causen por la deficiente construcción u operación de sus redes.

Las autoridades municipales en ningún caso podrán negar o condicionar a las empresas de servicios públicos las licencias o permisos para cuya expedición fueren competentes conforme a la ley, por razones que hayan debido ser consideradas por otras autoridades competentes para el otorgamiento de permisos, licencias o concesiones, ni para favorecer monopolios o limitar la competencia.”.

Para el caso del Sector de las Tecnologías de la información se ha expedido la siguiente normativa:

Ley 1341 de 2009, artículo 5.

Las entidades del orden nacional y territorial y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC. Las entidades del orden nacional y territorial promoverán, coordinarán y ejecutarán planes, programas y proyectos tendientes a garantizar el acceso y uso de la población, las empresas y las entidades públicas a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Para tal efecto, dichas autoridades incentivarán el desarrollo de infraestructura, contenidos y aplicaciones, así como la ubicación estratégica de terminales y equipos que permitan realmente a los ciudadanos acceder a las aplicaciones tecnológicas que benefician a los ciudadanos, en especial a los vulnerables y de zonas marginadas del país.

Parágrafo 1°. Las entidades de orden nacional y territorial incrementarán los servicios prestados a los ciudadanos a través del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El Gobierno reglamentará las condiciones en que se garantizará el acceso a la información en línea, de manera abierta, ininterrumpida y actualizada, para adelantar trámites frente a entidades públicas, inclusive en el desarrollo de procesos de contratación y el ejercicio del derecho al voto.



Ley 1753 de 2015, artículo 193, modificado por el artículo 309 de la Ley 1955 de 2019.

**ACCESO A LAS TIC Y DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA.** Con el propósito de garantizar el ejercicio y goce efectivo de los derechos constitucionales a la comunicación, la vida en situaciones de emergencia, la educación, la salud, la seguridad personal, y, el acceso a la información, al conocimiento, la ciencia y a la cultura, así como el de contribuir a la masificación del Gobierno en Línea, de conformidad con la Ley 1341 de 2009, es deber de la Nación asegurar la prestación continua, oportuna y de calidad de los servicios públicos de comunicaciones para lo cual velará por el despliegue de la infraestructura de redes de telecomunicaciones en las entidades territoriales.

Para este efecto, las autoridades de todos los órdenes territoriales identificarán los obstáculos que restrinjan, limiten o impidan el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones necesaria para el ejercicio y goce de los derechos constitucionales y procederá a adoptar las medidas y acciones que considere idóneas para removerlos.

**PARÁGRAFO 1o.** (Parágrafo modificado, artículo 309 Ley 1955 de 2019). Los alcaldes podrán promover las acciones necesarias para implementar la modificación de los planes de ordenamiento territorial y demás normas distritales o municipales que contengan barreras al despliegue de infraestructura para la prestación de servicios de telecomunicaciones. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones priorizará a aquellas entidades territoriales que hayan levantado tales barreras, incluyéndolas en el listado de potenciales candidatos a ser beneficiados con las obligaciones de hacer que el Ministerio puede imponer a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles, como mecanismo de ampliación de cobertura de servicios de telecomunicaciones. Para constatar la inexistencia y remoción de las barreras en mención, el alcalde deberá solicitar a la Comisión de Regulación de Comunicaciones o a quien haga sus veces que, en ejercicio de las facultades que le confiere el presente artículo, constate si las barreras ya fueron levantadas. Una vez la Comisión de Regulación de Comunicaciones acredite que la respectiva entidad territorial no presenta barreras al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, el Ministerio de Tecnologías de la Información incluirá al municipio en el listado antes mencionado. (...).

Ley 2108 de 2021, artículo 1 frente al servicio de internet se impuso:

**OBJETO.** Esta ley tiene por objeto establecer dentro de los servicios públicos de telecomunicaciones, el acceso a Internet como uno de carácter esencial, con el fin de propender por la universalidad para garantizar y asegurar la prestación del servicio de manera eficiente, continua y permanente, permitiendo la conectividad de todos los habitantes del territorio nacional, en especial de la población que, en razón a su condición social o étnica se encuentre en situación de vulnerabilidad o en zonas rurales y apartadas.”.

Ley 2294 de 2023, artículo 147 mediante la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, se modificaron los incisos primero y segundo del artículo 193 de la Ley 1753 de 2015, en los siguientes términos:

Acceso a las TIC y despliegue de infraestructura. Con el propósito de garantizar el ejercicio y goce efectivo de los derechos constitucionales a la comunicación, la vida en situaciones de emergencia, la educación, la salud, la seguridad personal, y el acceso a la información, al conocimiento, la ciencia y a la cultura, así como el de contribuir a la masificación del Gobierno Digital, de conformidad con la Ley 1341 de 2009, es deber de la Nación asegurar la prestación continua, oportuna y de calidad de los servicios públicos de comunicaciones, incluido el servicio público de acceso a Internet declarado como servicio público esencial, para lo cual, velará por el despliegue de la infraestructura de redes de telecomunicaciones en las entidades territoriales.

Para tales efectos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el apoyo técnico de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, y con observancia del principio de autonomía territorial, y con previa socialización a las entidades territoriales, reglamentará un procedimiento único para el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones en el territorio nacional, la cual será de obligatorio cumplimiento para las entidades territoriales, con el propósito de garantizar el acceso de la población a los servicios públicos prestados sobre las redes e infraestructuras de telecomunicaciones. Dicha reglamentación deberá incluir los requisitos únicos, instancias, y tiempos del procedimiento. En adición, las autoridades de todos los órdenes territoriales identificarán los obstáculos que restrinjan, limiten o impidan el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones necesaria para el ejercicio y goce de los derechos constitucionales y procederá a adoptar las medidas y acciones que considere idóneas para removerlos.

También en el artículo 148 de la misma ley se ordenó frente a la utilización de la infraestructura de las empresas de energía eléctrica y de telecomunicaciones:

UTILIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS EMPRESAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES, POR PARTE DE LOS PROVEEDORES DE REDES A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (PRST). La remuneración a reconocer por parte de los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST) por la utilización de los elementos pertenecientes a la infraestructura de las empresas que prestan el servicio de energía eléctrica o de telecomunicaciones, susceptible de ser compartida, en el despliegue de redes o la prestación de servicios de telecomunicaciones, no podrá ser superior al valor mensual por punto de apoyo en el elemento respectivo definido en el artículo 4.11.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

PARÁGRAFO. A partir de la publicación de la presente ley la Comisión de Regulación de Comunicaciones en el término de seis meses definirá un indicador que será el techo máximo para el incremento de la remuneración, el cual deberá considerar el criterio de costos eficientes, la representatividad de la canasta de insumos involucrados en la compartición de infraestructura a la que se refiere la presente disposición, la capacidad de pago de los usuarios, así como la promoción del despliegue de redes y servicios de telecomunicaciones y la marginalidad del uso de la infraestructura.

En el numeral 4 del artículo 1 de la Ley 388 de 1997 se impone que una de las finalidades de dicha norma es la de “promover la armoniosa concurrencia de la nación, las entidades territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de planificación, en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que prescriben al Estado el ordenamiento del territorio, para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes”.

Para ello, se establece en el artículo 5 que “El ordenamiento del territorio municipal comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los municipios, en ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales”.

Mediante la **Ley 2416 de 2024**, se declaró. “la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones como servicio de utilidad pública e interés social en busca de facilitar el estudio, tendido, construcción y operación de redes y así avanzar en la mejora de la calidad del servicio, así como la ampliación de cobertura a territorios que no tienen acceso.”.

Así mismo, adicionó el numeral 12 al artículo 2 de la Ley 1341 de 2009, que estableció como principio, “la promoción de la conectividad digital a través de la inversión en el despliegue eficiente, sostenible y ordenado de redes de infraestructura de telecomunicaciones y de su uso compartido, siempre que sea técnicamente viable.”.

Mediante **Decreto 1031 del 2024** se, en el cual se adicionó el título 30 a la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015 -Decreto Único Reglamentario del Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- y en él se estableció el procedimiento único para el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones en el territorio nacional, el cual aplica a las entidades territoriales, proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y proveedores de infraestructura de telecomunicaciones.

Mediante el **Acuerdo 18 de 1999** se creó la Defensoría del Espacio Público como un Departamento Administrativo, cuya misión es “*contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en Santa Fe de Bogotá por medio de una eficaz defensa del Espacio Público, de una óptima administración del patrimonio inmobiliario de la ciudad y de la construcción de una nueva cultura del Espacio Público que garantice su uso y disfrute común y estimule la participación comunitaria*”.

#### IV. **COMPETENCIA**

El concejo de Bogotá es competente para dictar el presente acuerdo, conforme lo establece el numeral 1 y 8 del artículo 12 del Decreto-Ley 1421 de 1993, las cuales señalan:

“1.- Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

(...)

8.- Determinar la estructura general de la Administración Central, las funciones básicas de sus entidades y adoptar las escalas de remuneración de las distintas categorías de empleos.”

#### V. **IMPACTO FISCAL**

De conformidad con la Ley 819 de 2003, se considera que el presente proyecto de acuerdo no genera impacto fiscal que afecte las finanzas del Distrito Capital, toda vez que no genera erogaciones presupuestales adicionales a las ya establecidas en el marco de las funciones de las entidades distritales competentes.

Por el contrario, su implementación contribuye a optimizar los ingresos del Distrito, especialmente aquellos derivados del aprovechamiento económico del espacio público utilizado por las estaciones radioeléctricas, en los términos del Decreto Distrital 315 de 2024.

La actualización y georreferenciación del inventario de estaciones radioeléctricas permitirá:

- Fortalecer la trazabilidad de las autorizaciones otorgadas desde 1995 hasta la fecha.
- Apoyar la fiscalización por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda.
- Identificar operadores que estén usando el espacio público sin autorización formal

Por lo tanto, el presente proyecto busca facilitar la recuperación de ingresos por uso del espacio público, hoy dispersos o no cobrados por falta de trazabilidad institucional.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta a consideración de esta honorable Corporación, el presente proyecto de acuerdo.

Cordialmente,

**SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA**

Concejal de Bogotá

Partido Liberal Colombiano

**PROYECTO DE ACUERDO No 969 DE 2025****PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA UN LITERAL AL ARTÍCULO 4 DEL ACUERDO 018 DE 1999 PARA FORTALECER LAS FUNCIONES DEL DADEP EN MATERIA DE INVENTARIO Y GEORREFERENCIACIÓN DE ESTACIONES RADIOELÉCTRICAS EN EL ESPACIO PÚBLICO”**

El Concejo de Bogotá, en uso de las facultades constitucionales y legales en especial las conferidas en los numerales 1 y 8 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993,

**ACUERDA**

ARTÍCULO 1.- Adiciónese el literal b.1 al artículo 4 del Acuerdo 018 de 1999 “Por el cual se crea la Defensoría del Espacio Público”, así:

**Artículo 4º.- Funciones frente al Espacio Público.** Corresponde a la Defensoría del Espacio Público ejercer, entre otras, las siguientes funciones:

- a. Administrar los bienes que hacen parte del espacio público distrital.
- b. Formular las políticas, planes y programas distritales relacionados con la defensa, inspección, vigilancia, regulación y control del espacio público.
  - b1.** Realizar el inventario, actualización, rastreo y georreferenciación de las infraestructuras de telecomunicaciones, incluidas las estaciones radioeléctricas instaladas en el espacio público del Distrito Capital, con el fin de suministrar información técnica a las entidades competentes para su regulación, autorización, control y gestión del aprovechamiento económico, en concordancia con lo establecido en el Decreto Distrital 481 de 2024, el Decreto 315 de 2024 y el Decreto 555 de 2021 (POT).
- c. Asesorar a las autoridades locales en el ejercicio de funciones relacionadas con el espacio público, así como en la difusión y aplicación de las normas correspondientes.
- d. Actuar como centro de reflexión y acopio de experiencia sobre la protección, recuperación y administración del espacio público y preparar proyectos de Ley, Acuerdos o Decretos sobre la materia.
- e. Instaurar las acciones judiciales y administrativas necesarias para el cumplimiento de las funciones asignadas al Departamento.

- f. Organizar en coordinación con las autoridades competentes actividades tendientes a evitar que se ubiquen en el espacio público construcciones que afecten la seguridad, la salubridad de los transeúntes o impidan su disfrute.
- g. Promover en coordinación con las autoridades competentes un espacio público adecuado para todos.
- h. Coordinar y promover con las autoridades distritales y locales actividades que promuevan el buen uso del espacio público y prevengan su deterioro.
- i. Promover en coordinación con otras entidades del Distrito, la creación de incentivos para quienes contribuyan de manera especial, a mantener, mejorar y ampliar el espacio público de la ciudad.
- j. Organizar y adelantar campañas cívicas y educativas para defender, recuperar, proteger y controlar el espacio público.
- k. La Defensoría del Espacio Público asumirá las funciones y objetivos que le fueron conferidos al Taller Profesional del Espacio Público mediante el Decreto 324 de 1992. El Taller Profesional del Espacio Público, mantendrá las mismas funciones que le confiere el Decreto 1087 de 1997.
- l. Identificación de espacios en la ciudad que permitan la ubicación de vendedores en proceso de reubicación en zonas estratégicas que le permitan adelantar sus actividades.

**Parágrafo primero.** - Para la formulación de las políticas, planes y programas de qué trata el literal b) se debe buscar la conciliación proporcional y armónica del derecho al espacio público con el derecho al trabajo.

**Parágrafo segundo.-** El Alcalde Mayor del Distrito Capital ajustará la reglamentación sobre el uso y aprovechamiento del espacio público en concordancia con las funciones asignadas en el presente artículo, promoviendo la articulación entre entidades competentes, incluyendo al DADEP, la Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaría Distrital de Hábitat y la Secretaría Distrital de Hacienda, con el fin de fortalecer los procesos de autorización, control y aprovechamiento económico de la infraestructura instalada en el espacio público, a partir de la información técnica consolidada en los inventarios distritales.

ARTÍCULO 2.- Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

AUTOR:

**SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA**

Concejal de Bogotá

Partido Liberal Colombiano

## **PROYECTO DE ACUERDO No 970 DE 2025**

### **PRIMER DEBATE**

#### **PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE AL PALACIO DEL COLESTEROL COMO ESPACIO GASTRONÓMICO DE INTERÉS CULTURAL, SOCIAL Y TURÍSTICO DEL DISTRITO CAPITAL.**

#### **EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

En 1938 se construyó en Bogotá el máximo escenario de la capital para la realización de eventos deportivos: El Campin. Este estadio empezó a tener uso constante a finales de la década del 40 cuando se inauguró el fútbol profesional colombiano. En 1962 unos comerciantes arrendaron unos predios cercanos al Campin a la Alcaldía. Así fue como nació el Palacio del Colesterol.

Todo este proceso se dio para solucionar algo que, al Alcalde de la época, Jorge Gaitán Cortés le pareció problemático, que las ventas cerca al Campin estuvieran sueltas así que facilitó este predio para hacer una reagrupación. El lugar fue construido por los abuelos y padres de quienes hoy en día luchan porque no los saquen. El Palacio del Colesterol abría sus puertas los días de partido, que antes solo eran los domingos. Fritanga, gallina, cocho, chicharrón, morcilla, longaniza, etc. son los productos que se vendían hasta las 10 de la noche durante estos días.

La gastronomía que hace parte de los usos, costumbres y prácticas que son activos del patrimonio inmaterial, son integradoras ya que permiten que confluyan distintas propuestas que recogen la gastronomía del altiplano que coexisten con las culturas ancestrales y prehispánicas, representativas porque fortalecen el patrimonio a través del reconocimiento de técnicas y recetas culinarias, sabores tradicionales populares que convergen hoy en día en el estadio el campin y que permiten un crecimiento económico para los distintos sectores y poblaciones que allí habitan, trabajan, estudian, visitan y transitan, y esta internalizadas en el arraigo del lugar, haciéndose parte de la comunidad quienes revitalizan la esencia de la gastronomía del sector.



## I. OBJETO DEL PROYECTO

El presente Proyecto de Acuerdo tiene por objeto reconocer y declarar el Palacio del Colesterol como espacio gastronómico de interés cultural, social y turístico del Distrito Capital, y establecer las directrices para su recuperación, preservación, protección y reactivación económica como parte del patrimonio inmaterial de Bogotá.

## II. CONSIDERACIONES Y JUSTIFICACIÓN

### Importancia para la ciudad

Las tradiciones construyen hábitos y estos representan una forma de vivir. El plan de ir a ver fútbol se complementaba con muchas más cosas. Llevar la radio, ir con amigos, llegar antes a escuchar historias mágicas, tomar una cerveza y comer algo en el Palacio del Colesterol. Esto viéndolo desde la ventana, con solo ser un asistente a este lugar. De las familias que actualmente trabajan en el Palacio de Colesterol hay algunas que están presentes desde la época en que se vendía alrededor del estadio. Lo que ejemplifica lo que ha sido el proceso de apropiación de este espacio y su importancia en las personas que viven de esta economía.

El estadio El Campín es, sin duda, un epicentro del deporte y la cultura popular bogotana. Sin embargo, la experiencia de asistir al estadio, de vivir el fútbol en toda su dimensión social, no está completa sin un espacio que ha sido históricamente parte integral de esa vivencia: el Palacio del Colesterol. Este emblemático lugar, ubicado justo detrás del estadio, ha sido durante décadas el punto de encuentro de miles de hinchas de todos los equipos, una plazoleta de comidas que va mucho más allá de la simple oferta gastronómica.

Desde 1962, el Palacio del Colesterol ha alimentado no solo estómagos, sino también memorias, tradiciones y afectos. Allí, entre cazuelas humeantes de cuchuco con espinazo, longaniza, chicharrón y morcillas, se han tejido historias, se han consolidado amistades, se han aliviado penas futboleras y se ha celebrado la pasión por el juego. Esta plazoleta es un testimonio vivo del espíritu popular que ha hecho del fútbol en Bogotá una manifestación cultural tan poderosa como entrañable.

No obstante, desde marzo de 2020, con el inicio de la pandemia por COVID-19, el Palacio del Colesterol cerró sus puertas.

Con la reapertura del Palacio del Colesterol y su reactivación económica después de la pandemia. Es, ante todo, un acto de reconocimiento al patrimonio inmaterial de la ciudad, un esfuerzo por preservar un espacio profundamente arraigado en la memoria de generaciones de bogotanos. Es también una medida para recuperar el tejido social, apoyar la economía popular y devolverle a la ciudad un rincón donde se mezcla el sabor, la pasión y la identidad.

Por ello, este proyecto de acuerdo busca que el Distrito priorice el fomento de este citado sector, en virtud de la memoria del palacio del colesterol como espacio gastronómico de interés turístico y cultural en ciudad de Bogotá”.

Asimismo, se busca garantizar el desarrollo digno y sostenible de la actividad comercial popular que históricamente se ha ejercido en este espacio, reconociendo su papel como lugar emblemático en la experiencia cultural del fútbol, en la memoria colectiva de la ciudad y en el fortalecimiento del tejido social y económico de la zona circundante al Estadio Nemesio Camacho El Campín.

### **III. MARCO JURÍDICO**

#### **DE ORDEN NACIONAL**

DECRETO 1421 de 1993. "Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa fé de Bogotá".

ARTÍCULO. - 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

2. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

13. Regular la preservación y defensa del patrimonio cultural.

Ley 397 de 1997: Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias.

Artículo 1°. De los principios fundamentales y definiciones de esta Ley.

"1. Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias.

3. El Estado impulsará y estimulará los procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultural de la Nación colombiana.

4. En ningún caso el Estado ejercerá censura sobre la forma y el contenido ideológico y artístico de las realizaciones y proyectos culturales.

5. Es obligación del Estado y de las personas valorar, proteger y difundir el Patrimonio Cultural de la Nación.
8. El desarrollo económico y social deberá articularse estrechamente con el desarrollo cultural, científico y tecnológico. El Plan Nacional de Desarrollo tendrá en cuenta el Plan Nacional de Cultura que formule el Gobierno. Los recursos públicos invertidos en actividades culturales tendrán, para todos los efectos legales, el carácter de gasto público social.
10. El Estado garantizará la libre investigación y fomentará el talento investigativo dentro de los parámetros de calidad, rigor y coherencia académica.
11. El Estado fomentará la creación, ampliación y adecuación de infraestructura artística y cultural y garantizará el acceso de todos los colombianos a la misma.
12. El Estado promoverá la interacción de la cultura nacional con la cultura universal.

“Las funciones y los servicios del Estado en relación con la cultura se cumplirán en conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, teniendo en cuenta que el objetivo primordial de la política estatal sobre la materia son la preservación del Patrimonio Cultural de la Nación y el apoyo y el estímulo a las personas, comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en los ámbitos locales, regionales y nacional”. (Cursiva fuera de texto).

#### Artículo 17. Del fomento.

“El Estado a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, fomentará las artes en todas sus expresiones y las demás manifestaciones simbólicas expresivas, como elementos del diálogo, el intercambio, la participación y como expresión libre y primordial del pensamiento del ser humano que construye en la convivencia pacífica”. (Cursiva fuera de texto).

#### Artículo 27. El creador.

“Se entiende por creador cualquier persona o grupo de personas generadoras de bienes y productos culturales a partir de la imaginación, la sensibilidad y la creatividad.

Las expresiones creadoras, como expresión libre del pensamiento humano, generan identidad, sentido de pertenencia y enriquecen la diversidad cultural del país”. (Cursiva fuera de texto).

Ley 1185 de 2008. Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 – Ley General de Cultura– y se dictan otras disposiciones. (Ley de Patrimonio cultural de la Nación).

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 4° de la Ley 397 de 1997 el cual quedará, así:

"Artículo 4°. Integración del patrimonio cultural de la Nación. El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico. Ver el Decreto Nacional 763 de 2009, Ver la Resolución del Min. Cultura 330 de 2010, Ver la Resolución del Min. Cultura 983 de 2010.

Ley 1493 de 2011 "Por la cual se toman medidas para formalizar el sector del espectáculo público de las artes escénicas, se otorgan competencias de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades de gestión colectiva y se dictan otras disposiciones".

## DE ORDEN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO 1°. Atinente a los principios fundamentales, que determina:

"Colombia es un Estado social de derecho, con autonomía de sus entidades territoriales, fundada en el respeto de la dignidad humana, y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general". (Adecuaciones y cursiva fuera de texto).

ARTÍCULO 2°. Referente a los fines del Estado:

"Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general, y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; ...

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. (Adecuaciones y cursiva fuera de texto).

ARTICULO 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.

ARTÍCULO 8°. Riquezas culturales: Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. (Cursivas fuera de texto).

ARTICULO 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.

ARTÍCULO 70. Derecho a la cultura:

“El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación”. (Cursivas fuera de texto).

ARTÍCULO 333. Protección a la actividad económica:

“La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación”. (Adecuaciones y cursiva fuera de texto).

**NORMATIVIDAD DISTRITAL****IV. COMPETENCIA DEL CONCEJO**

El Decreto Ley 1421 expresa en el artículo 12, numeral 1, lo siguiente:

“Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.(...)

**V. IMPACTO FISCAL**

De conformidad con lo anterior y en cumplimiento del Artículo 7° de la Ley 819 de 2003, aclaramos que la presente iniciativa no genera un impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez que no se incrementará el Presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación, ya que las acciones deben estar enmarcadas en los proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo Distrital.

Cordialmente,

---

**JOSE DEL CARMEN CUESTA NOVOA**  
Concejal de Bogotá

**PROYECTO DE ACUERDO No 970 DE 2025****PRIMER DEBATE****PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE AL PALACIO DEL COLESTEROL COMO ESPACIO GASTRONÓMICO DE INTERÉS CULTURAL, SOCIAL Y TURÍSTICO DEL DISTRITO CAPITAL.**

El Concejo de Bogotá D.C.

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993,

**ACUERDA:**

**Artículo 1°.** Reconózcase al Palacio del Colesterol, ubicado en las inmediaciones del Estadio Nemesio Camacho El Campín, como un espacio de interés cultural, social y turístico del Distrito Capital, por su valor histórico, simbólico, gastronómico y patrimonial en la construcción de la identidad bogotana y el fortalecimiento de la economía popular.

.

**ARTICULO 2.** Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

**PUBLIQUESE Y CUMPLASE**

## **PROYECTO DE ACUERDO No 971 DE 2025**

### **PRIMER DEBATE**

#### ***"POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS PARA ATRAER LA INVERSIÓN, GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESARROLLO URBANO EQUITATIVO EN BOGOTÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"***

#### **1. OBJETO DEL PROYECTO**

Este proyecto de acuerdo tiene como propósito establecer lineamientos para la implementación de incentivos tributarios orientados a atraer inversión, dinamizar el crecimiento económico y promover la generación de empleo. Para ello, se contemplan: exenciones en el impuesto predial para los propietarios que aporten sus inmuebles a proyectos de vivienda en áreas de renovación urbana y decidan permanecer en el mismo proyecto, exenciones en el impuesto predial para la operación de proyectos de arrendamiento especializado que contribuyan a la formalización del mercado, y, descuentos en el impuesto de delineación urbana aplicables a proyectos de vivienda social, con el fin de potenciar su oferta en las zonas centrales de la ciudad.

#### **2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

A pesar de su papel como motor económico, la construcción de edificaciones, sus actividades especializadas y las actividades inmobiliarias han venido perdiendo participación en la economía de Bogotá. Por ejemplo, en 2005 el valor agregado de la construcción de edificaciones representaba el 5,9% del total de la economía, mientras que en 2024 se redujo al 3,9%. En el caso de las actividades inmobiliarias, pasaron del 17,7% al 12,7%, y las actividades especializadas disminuyeron del 10% al 5% en el mismo periodo.

El sector de la construcción tiene fuertes encadenamientos productivos hacia atrás, es decir, impulsa a otros sectores de la economía al demandar insumos de minería y canteras, ingeniería y arquitectura, manufacturas, materiales de construcción, transporte, logística y maquinaria. En promedio, cada peso invertido en construcción multiplica 2,2 veces su efecto en la economía.

También genera encadenamientos hacia adelante, en sectores como los servicios inmobiliarios, el comercio y otros servicios, aunque en menor medida. Por esta razón se le reconoce como un sector jalonador de la economía. De hecho, se estima que por cada 10 empleos creados en construcción se generan adicionalmente 3 en industria, 3 en comercio, 2 en transporte y 1 en minería y canteras.

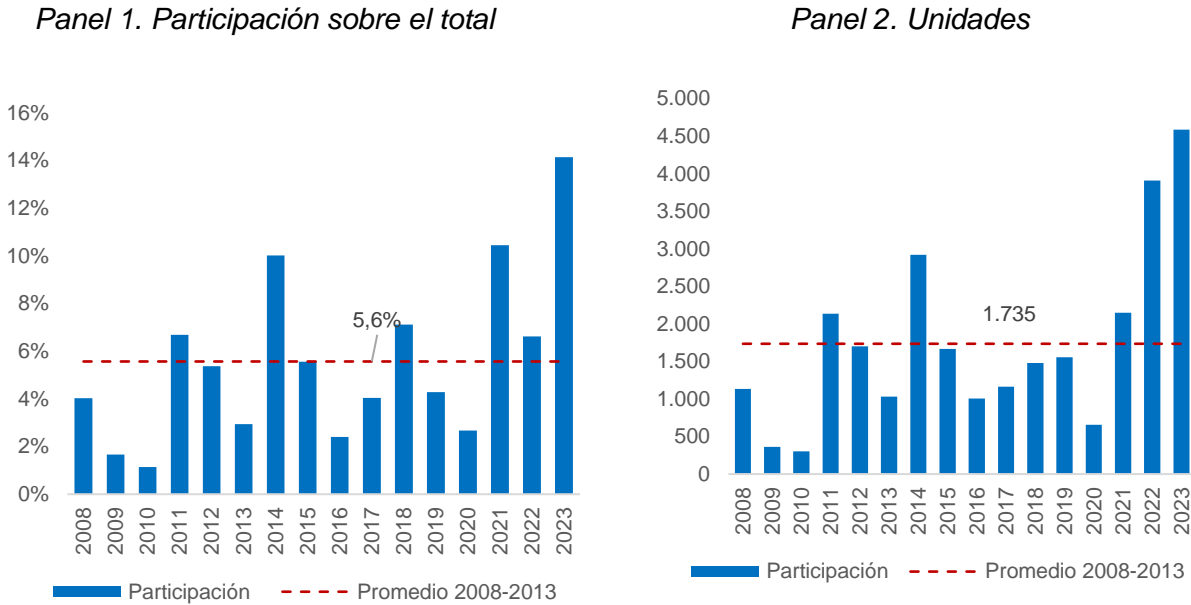


2.1. IMPULSAR LA INVERSIÓN, EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EL EMPLEO, APARTIR DE PROYECTOS DE RENOVACIÓN URBANA

2.1.1. DIAGNÓSTICO

El tratamiento de renovación urbana, según el Plan de Ordenamiento Territorial vigente en Bogotá (Decreto 555 de 2021), busca transformar áreas consolidadas de la ciudad con estructuras subutilizadas para maximizar su potencial de desarrollo, así como reducir desigualdades mediante el acceso a vivienda asequible, servicios sociales y empleo, (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2021, págs. 267-271), no obstante, su implementación efectiva enfrenta múltiples desafíos. Por un lado, si bien, el POT 555 apostó por la renovación de la ciudad al multiplicar por 3.5 el porcentaje de suelo urbano destinado a este tratamiento (pasando del 6.1% en el POT 190 al 21%), también elevó las cargas urbanísticas desde un 20% en el POT 190 hasta un 60% en proyectos con mayor edificabilidad (Secretaría Distrital de Planeación, 2024) impidiendo en muchos casos el cierre financiero de estos. Por otro lado, uno de los desafíos estructurales de la renovación urbana es la gestión predial (Jaramillo & Montoya, 2017), toda vez que no existen incentivos suficientes para que los propietarios aporten sus predios y participen en estos proyectos. Como resultado, entre 2008 y 2023, como media solo el 5,6% de las licencias de vivienda nueva en Bogotá—equivalente a un promedio de 1.735 unidades por año (Gráfico 1)—se han destinado a la renovación urbana, lo que evidencia el bajo dinamismo y el carácter estructuralmente limitado de este tratamiento en la ciudad (Secretaría Distrital de Planeación, 2024).

Gráfico 1. Viviendas nuevas licenciadas en tratamiento de renovación urbana en Bogotá (2008-2023)



Fuente: Elaboración propia con base en la Secretaría Distrital de Planeación

Estas problemáticas impiden el uso racional del suelo que se hace en proyectos de renovación urbana, la construcción de edificaciones sostenibles (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015), la expansión de parques, zonas verdes y equipamientos, y el aumento de la oferta de vivienda formal que ayuda a aliviar la presión sobre el costo de vida en la ciudad. Además, restringen el aumento del recaudo de impuestos como la delimitación urbana y el de industria y comercio, afectan la generación de empleo—donde cada vivienda social crea 1.57 empleos directos, cada vivienda No VIS genera 2.78, y la construcción de vivienda en general produce 2.17 empleos indirectos (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2020, págs. 9-11)—y frenan el crecimiento económico, pues la inversión en edificaciones moviliza 34 sectores productivos, multiplicando cada peso invertido por 2.15 en la economía (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2020, pág. 9).

La dificultad para ejecutar proyectos de renovación urbana en la ciudad pone en riesgo las metas del Plan del Hábitat y Servicios Públicos, que proyecta la construcción de 394.804 viviendas en este tratamiento entre 2023 y 2035 (Secretaría Distrital del Hábitat, 2023, pág. 131), ya que para alcanzarla sería necesario iniciar 32.900 viviendas por año, es decir 65.800 en 2023-2024, sin embargo, entre 2023 y el primer semestre de 2024 solo se han licenciado 4.827 (Secretaría Distrital de Planeación, 2024), evidenciando un grave rezago en la implementación de este modelo de ordenamiento urbano.

Así mismo, es importante mencionar que uno de los desafíos de la renovación urbana es la gentrificación. Para mitigar sus efectos, el Decreto 563 de 2023, que reglamentó la protección de moradores y actividades productivas en el POT 555, estableció como beneficiarios a propietarios, poseedores, usufructuarios, arrendatarios y titulares de actividades productivas con permanencia acreditada en el territorio. Este decreto exigió la elaboración de un Plan de Gestión Social para mitigar impactos económicos como la pérdida temporal de vivienda o trabajo, afectación de ingresos y reducción de oferta de servicios sociales, y contempló alternativas de participación para propietarios, así como el derecho preferencial para moradores y titulares de actividades productivas (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2023), dándole así a la ciudad un marco legal para enfrentar la gentrificación.

### 2.1.2. PROPUESTA

Teniendo en cuenta lo anterior y con el objetivo de fortalecer la autonomía financiera de la ciudad, optimizar el recaudo e impulsar el crecimiento económico, la generación de empleo a partir de la detonación de la construcción en proyectos de renovación urbana y Proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (PRUMS), se propone otorgar un descuento en el impuesto predial equivalente al 100% durante los primeros cinco años, con decrecimiento progresivo en los siguientes cinco años de 80%, 60%, 40%, 20% y 10%, a los propietarios que aporten sus inmuebles como suelo para el desarrollo de proyectos de vivienda en áreas de Renovación Urbana delimitadas en el Decreto 555 de 2021 o para Proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (PRUMS). El objetivo es impulsar la gestión predial y facilitar la gestión de moradores (No gentrificación). El descuento se causará respecto de las unidades de vivienda resultantes de propiedad de los aportantes y por un periodo de 10 años a partir de la generación de las matrículas inmobiliarias, incluyendo sucesiones, y su crecimiento anual será conforme a los incrementos establecidos en las normativas vigentes.

El ámbito de aplicación de esta medida, comprende las 6.905,8 hectáreas del tratamiento de Renovación Urbana delimitadas en el Decreto 555.

### 2.1.3. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO

#### 2.1.3.1. PARÁMETROS CONSIDERADOS EN LA ESTIMACIÓN

Con el fin de cuantificar los impactos en materia de recaudo de esta medida, se llevó a cabo una modelación que contempló los siguientes parámetros (Tabla 1)

**Tabla 1. Parámetros considerados para la estimación**

Elemento	Parámetro	Justificación y fuente
Participación vivienda de interés social en el total del mercado	76%	Participación estimada de viviendas sociales a 2035. Fuente: Plan del Hábitat y Servicios Públicos
Participación viviendas No VIS en el total del mercado	24%	Participación estimada de viviendas No VIS a 2035. Fuente: Plan del Hábitat y Servicios Públicos
Valor VIS (SMMLV)	175	Precio tope de la VIS en renovación urbana. Artículo 239 de la Ley 2294 de 2023
Valor No VIS (SMMLV)	500	Precio estimado de vivienda No VIS
Crecimiento precio de las viviendas	3.6%-3%	Los valores de las viviendas evolucionan según la inflación mediana esperada hasta 2026. A partir de 2027, se adopta como referencia una inflación del 3%, correspondiente al valor medio del rango meta de inflación. Fuente: Encuesta Mensual de Expectativas Económicas del Banco de la República de Colombia.
Tarifa	2,6%	Sobre el presupuesto inicial de la obra, pagado al declarar el anticipo, Fuente: Acuerdo 352 de 2008
Incidencia de materiales y equipos y mano de obra en el valor comercial	55,4%	Participación de materiales, equipo y mano de obra en la estructura de costos de un proyecto de vivienda. Fuente: DNP
Viviendas VIS estrato mayor igual a 4	21%	Porcentaje promedio de viviendas licenciadas en Bogotá de estrato igual o mayor a 4 en periodo 2022-2024. Se utiliza para estimar el número de VIS que contribuyen con el impuesto de delineación. Fuente: DANE
Tarifa	11,04 por mil	Correspondiente al grupo 103 de la actividad industrial Fuente: Secretaría Distrital de Hacienda
Incidencia de materiales y equipos en el valor comercial	38.8%	Este factor se utiliza para determinar el pago del impuesto de ICA realizado por proveedores. Fuente: DNP
Tarifa	11,04 por mil	Correspondiente al grupo 204 de la actividad comercial (Secretaría Distrital de Hacienda, 2025).
Tarifa predial residenciales	6,5-10,1 por mil	Acuerdo 648 de 2008
Promedio del valor de la razón de avalúo catastral/Avalúo comercial	70%	El valor derivado de este porcentaje se adopta como base gravable del impuesto predial Fuente: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.
Valoración predial	4,6%	Crecimiento del Índice de Valoración Inmobiliaria Urbana y Rural (IVIUR) para el grupo residencial urbano en el año 2024. Se asume constante en años siguientes. Se utiliza para evolucionar el valor de la base gravable del impuesto

Intensidad de mano de obra directa por cada VIS construida	1.57	Número de personas ocupadas de forma directa por cada VIS construida Fuente: Minvivienda
Intensidad de mano de obra directa por cada No VIS construida	2.78	Número de personas ocupadas de forma directa por cada No VIS construida Fuente: Minvivienda
Intensidad de mano de obra indirecta	2.17	Número de personas ocupadas de forma indirecta por cada vivienda construida Fuente: Minvivienda
Porcentaje de viviendas destinadas a los moradores actuales.	10%	Se toma como referencia la incidencia del valor del suelo, sin urbanismo en el proyecto. Fuente: DNP. Considerando que el POT actual establece acciones de protección a los moradores. Por ello, el propósito es que que todos los propietarios que aportaron predios residirán en el nuevo proyecto una vez finalizado.
Porcentaje de viviendas destinadas a la comercialización.	90%	Corresponde al porcentaje de viviendas destinadas a la comercialización.
Porcentaje de descuento para propietarios actuales/moradores	90%	Corresponde al descuento otorgado a los propietarios que aportaron el suelo. Por lo tanto, se aplica al 20% de las unidades del proyecto.

Adicionalmente, considerando el ciclo constructivo de los proyectos y la generación de impuestos en cada fase, se identifican los siguientes momentos clave:

- **t1:** Se genera el impuesto de delimitación urbana al obtener la licencia de construcción e iniciar la obra.
- **t2:** Se causa el impuesto de ICA por la compra de materiales utilizados en la construcción.
- **t3:** Al escriturar las unidades, se genera nuevamente el impuesto de ICA por la venta de los inmuebles.
- **t4:** Los nuevos propietarios asumen el pago del impuesto predial.

Así mismo, se consideraron 3 escenarios de ocurrencia, para estimar el número unidades de vivienda a construir en tratamiento de renovación urbana (Tabla 2):

**Tabla 2. Escenarios considerados en la estimación**

Escenarios	Metodología de cálculo
Inercia	Representa la inercia del mercado, es decir, un escenario sin incentivos. Se estima con base en el comportamiento histórico de las viviendas licenciadas bajo el tratamiento de renovación urbana, utilizando datos de la Secretaría Distrital de Planeación (2008-2023). Se utilizan los datos de licencias como proxy de las iniciaciones, toda vez que según estudios de la SDH, las licencias de construcción se ejecutan en el mismo año, evidenciando una correlación con las iniciaciones con un rezago de dos períodos (Secretaría Distrital del Hábitat, 2019, pág. 9) o una alta probabilidad de ejecución en el trimestre de referencia para licencias aprobadas en los seis meses previos (Secretaría Distrital del Hábitat, 2020)
Medio (Mayor probabilidad de ocurrencia)	Considera el aumento en las unidades de vivienda que se daría si se aprovecha la disponibilidad actual del suelo bajo tratamiento de renovación urbana. Se calcula multiplicando los valores anuales del Escenario 1 por un factor de 3.5, que corresponde al incremento porcentual del suelo destinado a renovación urbana, pasando del 6% en el POT 190 de 2004 al 21% en el POT 555 de 2021.

Potencial	Representa el potencial de iniciación de viviendas nuevas en tratamiento de renovación, según lo estimado en el Plan del Hábitat y Servicios Públicos de Bogotá. Se calcula tomando las estimaciones del techo global de iniciaciones de vivienda del Plan del Hábitat y aplicando un factor del 50%, correspondiente al porcentaje de viviendas proyectadas en tratamiento de renovación urbana.
-----------	---

### 2.1.3.2. RESULTADOS

El costo tributario de la medida corresponde al total de impuestos prediales que el distrito deja de percibir debido al descuento otorgado en las unidades de vivienda generadas durante los 10 años del beneficio. Por su parte, los beneficios incluyen los ingresos por el impuesto de delineación urbana, el ICA de materiales y el ICA de venta generados por la construcción de estas viviendas. También se consideran el impuesto predial descontado que pagan estas unidades durante los primeros 10 años de la medida y el impuesto predial completo que comienzan a pagar una vez finaliza el beneficio. En este contexto, considerando el escenario de ocurrencia más probable con la implementación de la medida, se proyecta el inicio de 138.048 viviendas bajo el tratamiento de renovación urbana en la próxima década. Estas unidades generarían un flujo de ingresos tributarios de \$5.307.788 millones hasta el final de la medida, momento en el que dejará de aplicarse a las viviendas iniciadas en el año 10, mientras que los costos ascienden a \$371.464 millones, representando un 7% de los beneficios (Ver Tabla 3)

**Tabla 3. Análisis de costos y beneficios fiscales-Escenario medio. Cifras en millones de pesos corrientes**

Año t	Total viviendas	Viviendas adicionales	Costo predial	Beneficios				
				Delineación Urbana	ICA materiales	ICA venta	Predial descuento	Total
1	11.485	7.855	\$ 0	\$ 24.852	\$ 13.052	\$ 0	\$ 0	\$ 37.903
2	12.001	8.208	\$ 0	\$ 26.904	\$ 14.130	\$ 33.639	\$ 0	\$ 74.673
3	12.516	8.561	\$ 2.062	\$ 28.902	\$ 15.179	\$ 36.417	\$ 14.892	\$ 95.391
4	13.032	8.913	\$ 4.389	\$ 30.995	\$ 16.278	\$ 39.121	\$ 31.700	\$ 118.094
5	13.547	9.266	\$ 7.005	\$ 33.188	\$ 17.430	\$ 41.954	\$ 50.592	\$ 143.164
6	14.063	9.618	\$ 9.916	\$ 35.484	\$ 18.636	\$ 44.922	\$ 71.616	\$ 170.659
7	14.578	9.971	\$ 13.247	\$ 37.888	\$ 19.899	\$ 48.031	\$ 95.670	\$ 201.488
8	15.094	10.324	\$ 16.929	\$ 40.405	\$ 21.220	\$ 51.285	\$ 122.267	\$ 235.178
9	15.609	10.676	\$ 20.990	\$ 43.038	\$ 22.603	\$ 54.692	\$ 151.592	\$ 271.925
10	16.125	11.029	\$ 25.499	\$ 45.794	\$ 24.050	\$ 58.256	\$ 184.161	\$ 312.261
11			\$ 30.533	\$ 0	\$ 0	\$ 61.986	\$ 220.513	\$ 282.499
12			\$ 36.095				\$ 260.687	\$ 260.687
13			\$ 34.523				\$ 274.988	\$ 274.988
14			\$ 32.611				\$ 290.138	\$ 290.138
15			\$ 30.326				\$ 306.188	\$ 306.188
16			\$ 27.662				\$ 323.172	\$ 323.172
17			\$ 24.427				\$ 341.257	\$ 341.257

18			\$ 20.732				\$ 360.396	\$ 360.396
19			\$ 16.541				\$ 380.650	\$ 380.650
20			\$ 11.745				\$ 402.128	\$ 402.128
21			\$ 6.233				\$ 424.950	\$ 424.950
<b>Total</b>	<b>138.048</b>	<b>94.421</b>	<b>\$ 371.464</b>	<b>\$ 347.450</b>	<b>\$ 182.478</b>	<b>\$ 470.303</b>	<b>\$ 4.307.557</b>	<b>\$ 5.307.788</b>

Fuente: Elaboración propia

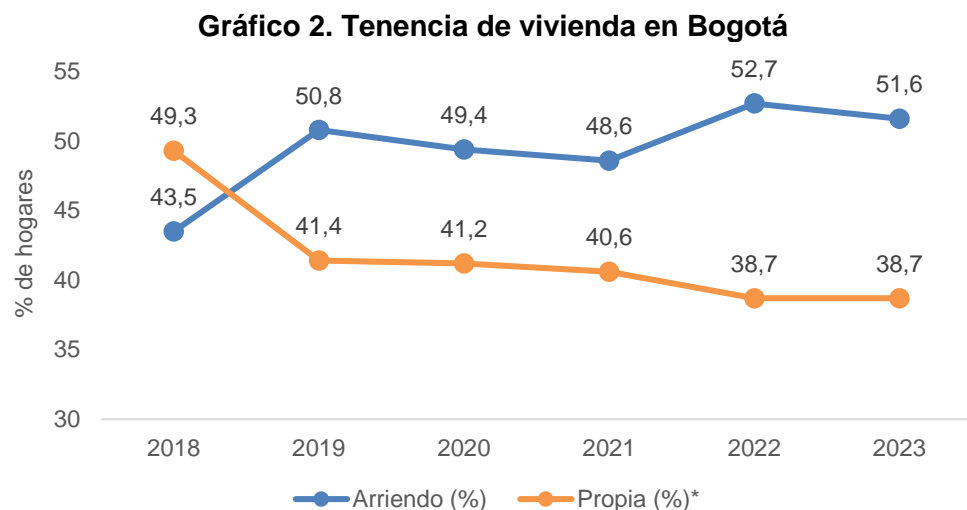
#### 2.1.4. BENEFICIOS ADICIONALES

- i. En términos de actividad económica, y en línea con la Nueva Agenda Urbana que reconoce los vínculos entre la buena urbanización y la creación de empleo, el volumen de iniciaciones de vivienda proyectado permitirá la generación de lo que generaría 256.825 empleos directos y 299.565 empleos indirectos, así como una inversión de \$60,32 billones y una demanda de insumos por \$30,16 billones.
- ii. La renovación urbana y los PRUMS, optimiza el uso de las 6.612,7 hectáreas de aplicación de la medida, promoviendo así el desarrollo sostenible y la recuperación de áreas deterioradas, lo que se alinea con las prioridades de la Nueva Agenda Urbana que propende por evitar la expansión descontrolada y la marginación (ONU-Hábitat, 2016, pág. 45).
- iii. Genera un ahorro en las finanzas del Distrito, ya que la provisión de infraestructura en la periferia puede ser hasta 18 veces más costoso que en zonas con equipamiento existente, tal como se ha evidenciado en ciudades latinoamericanas como Santiago de Chile (ONU-Hábitat, 2016, pág. 50).
- iv. La generación de vivienda formal en zonas de renovación urbana impulsa la creación de parques y zonas verdes, y a la reducción de distancias, contribuyendo a la reducción de la contaminación del aire.
- v. También promueve la construcción de vivienda No VIS y otros usos con criterios de sostenibilidad (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015)
- vi. El aumento en la oferta de vivienda ayuda a estabilizar los precios y reducir el costo de vida (Molloy, Nathanson, & Paciorek, 2022).
- vii. La propuesta contribuye a mitigar la gentrificación, ya que el descuento en el impuesto predial actúa como un incentivo para que los residentes permanezcan en el territorio una vez ejecutado el proyecto. Esta medida se alinea con el Decreto 563 de 2023, que reglamenta la protección a moradores y actividades productivas en el Distrito Capital. Dicho decreto establece como beneficiarios a propietarios, poseedores, usufructuarios, arrendatarios y titulares de actividades productivas que habiten o desarrollen actividades en el área intervenida y acrediten su permanencia. Para ello, se contempla una estrategia que incluye el Plan de Gestión Social (Art. 17) y obligaciones específicas para los desarrolladores, relacionadas con la participación de los propietarios y el derecho preferencial de otros moradores y titulares de actividades productivas (Art. 18)

## 2.2. INVERSIÓN INMOBILIARIA Y OPORTUNIDADES FISCALES PARA BOGOTÁ: DESARROLLO DEL MERCADO DE PROYECTOS MULTIFAMILIARES EN RENTA ESPECIALIZADA.

### 2.2.1. DIAGNÓSTICO

Colombia es el país latinoamericano con mayor porcentaje de hogares viviendo en arriendo. En Bogotá la modalidad de arrendamiento es predominante en la tenencia de la vivienda; en 2023 se registraron 1,4 millones de hogares bajo esta modalidad (51,6% del total). En 11 de las 19 localidades la tasa de arrendamiento es superior al 50%.



Fuente: Elaboración Camacol ByC con base en DANE.

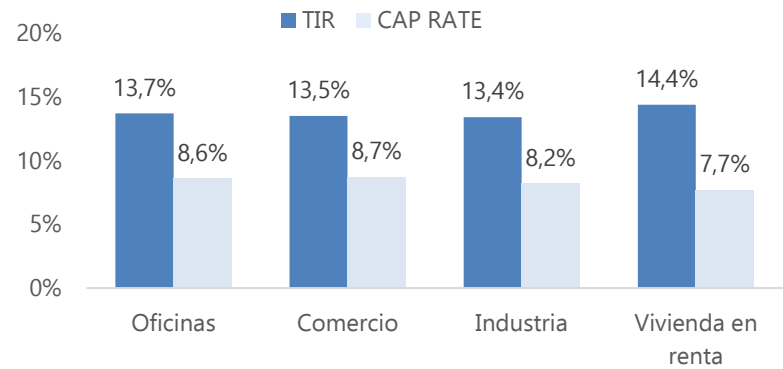
El mercado de arriendos en Colombia movilizó alrededor de \$46 billones en 2023, de los cuales más de \$14 billones correspondieron a Bogotá. Sin embargo, la gran mayoría de estas transacciones ocurren entre personas, lo que lo convierte en un mercado altamente informal. A diferencia de economías más desarrolladas, donde una parte significativa de la oferta de unidades residenciales es gestionada integralmente por empresas propietarias y operadoras profesionales, mientras que en Colombia el involucramiento empresarial se limita principalmente a la intermediación. Esto refleja una estructura de mercado menos organizada y profesionalizada.

A nivel mundial, la vivienda en renta tiene la mayor participación dentro del portafolio de inversión inmobiliaria, alcanzando una cifra de USD 2,9 trillones solo en Estados Unidos. Ciudades comparables en América Latina han avanzado de manera significativa en el desarrollo de este tipo de activo aun cuando registran tasas de arrendamiento menores a las que presentan las ciudades capitales en Colombia. Ciudad de México y Santiago de Chile, hoy cuentan con miles de unidades de renta especializada y un volumen de proyectos en curso que duplicará el tamaño del mercado en 5 años.

Bajo lo anteriormente descrito, Colombia cuenta con una ventaja competitiva para detonar este mercado, y son los Fondos de Capital Privado (FCP), los Fondos de Inversión Colectiva Inmobiliarios (FICI) y las titularizadoras inmobiliarias que administran activos cuyo valor supera los \$35 billones. Dentro de los cerca de 30 gestores profesionales de estos vehículos hay un creciente interés por ampliar la frontera de inversión en el mercado residencial bajo este modelo.

No obstante, esta inversión no se ha materializado pues existe una brecha en costos de financiación y rentabilidad de los proyectos multifamiliares en renta frente a otros segmentos del mercado inmobiliario como oficinas, destinos comerciales y espacio industriales (Gráfico 3). En la actualidad en la ciudad solo hay 1 proyecto de renta especializada en operación con 130 unidades residenciales.

**Gráfico 3. Comparación de TIR y Cap rates en productos activos inmobiliarios**



Fuente: Logan Valuation.

El modelo de vivienda en renta especializado es un modelo de inversión en inmuebles cuyas principales características son: único propietario (puede ser una entidad o un vehículo de inversión), destinado en su totalidad a la renta y operado profesionalmente. Así se ve una comparación con el modelo de arriendos que existe en la ciudad y en el país:

**Tabla 4. Diferencias entre el mercado actual de arriendo y el arrendamiento especializado**

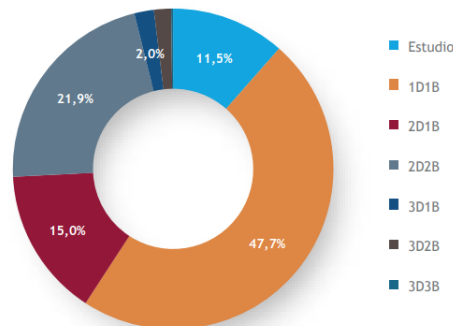
Mercado actual de arriendo	Arrendamiento especializado
Edificios sin operación profesional – deterioro en el tiempo	Edificios operados por compañías especializadas
Negocio entre personas – informalidad	Negocio con una empresa especializada en arrendamientos – formalidad
Nueva oferta depende del mercado de venta - ciclos de vivienda en venta	Nueva oferta depende del mercado de arriendos – anticíclico
Propiedad atomizada – personas	Propiedad única con dueño institucional – fondos, fideicomisos

Fuente: Domus Capital

Es importante señalar que este modelo no hace parte de los segmentos de vivienda turística, ni del segmento de coliving y por tanto no entra a competir con la industria hotelera ni con los modelos recientes de rentas cortas. Por el contrario, es un modelo orientado a arrendamientos de larga estancia para atender nichos puntuales de mercado, tales como; vivienda asistida para adultos mayores, vivienda estudiantil, vivienda multifamiliar para familias con diversas composiciones, entre otras.

De acuerdo con el informe “Mercado de Renta Residencial Multifamily” desarrollado por BDO el mercado Chileno al cierre de 2024 contaba con un stock de 46.773 unidades en la modalidad de arrendamiento especializado, las cuales presentan variedad de tipologías respecto a la composición de dormitorios y baños. Esta distribución responde a las tendencias demográficas, a las necesidades y preferencias de los hogares.



**Gráfico 4. Distribución de unidades por tipología en el mercado multifamily en Chile**

Fuente: BDO.

A nivel local, el portafolio de proyectos que tiene uno de los gestores inmobiliarios multifamiliares en renta tiene la siguiente composición: 25% tipo loft que van desde los 34 m<sup>2</sup> a 38 m<sup>2</sup>; 59% de 1 dormitorio desde los 45 m<sup>2</sup> a 70 m<sup>2</sup>; y, 16% de dos dormitorios desde los 72 m<sup>2</sup> a los 86 m<sup>2</sup>.

Basados en la experiencia internacional, existen tres tipos de incentivos que permiten detonar el crecimiento del mercado de vivienda en renta especializada en Bogotá: predial, deuda y cargas urbanísticas. Para efectos del presente documento la propuesta se basa en el impuesto predial teniendo en cuenta que es uno de los rubros con mayor incidencia en los costos de operación de un activo inmobiliario, en el caso de vivienda multifamiliar en renta especializada este puede ascender entre un 20% a 30% de dichos costos.

### 2.2.2. PROPUESTA

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone que, para promover el desarrollo de proyectos de arrendamiento especializado:

**Descuento del impuesto predial equivalente al 90% durante los primeros 5 años de operación para los proyectos de arrendamiento especializado, con decrecimiento progresivo en los siguientes 5 años del 70%, 50%, 30%, 20% y 10%. La postulación se realizará en un periodo de 5 años.**

Esta medida genera un incentivo muy importante en el desarrollo de este tipo de proyectos, impulsando una nueva línea de desarrollo inmobiliario, que potencialice la inversión y el empleo en Bogotá, sin generar una erogación para la ciudad ni una disminución al actual recaudo tributario.

Para generar un marco razonable y exigible en el cual estos beneficios que otorgaría la ciudad sean correctamente direccionados y cumplan su objetivo, se propone que los proyectos y los inversionistas que los viabilicen cumplan con los siguientes requisitos: 1) no podrá vender unidades individuales del proyecto durante el período de vigencia del beneficio, permitiéndose únicamente vender la propiedad como un bloque. 2) El operador deberá contar con la matrícula de arrendadores otorgada por la Secretaría Distrital del Hábitat. 3) Los proyectos deberán tener al menos 50 unidades residenciales y el 100% de las mismas debe mantenerse bajo un esquema de propiedad única para renta. 4) Los proyectos licenciados bajo esta modalidad, solo podrán aplicar al descuento cuando acrediten se fase de operación. 5) Las edificaciones sujetas del beneficio deberán contar con una certificación o sello o reconocimiento de construcción sostenible de los existentes en el mercado (p.e. LEED, BREAM, Bogotá Construcción Sostenible, entre otros).

2.2.3. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO

2.1.3.1. PARÁMETROS CONSIDERADOS EN LA ESTIMACIÓN

Durante la etapa de construcción, el uso de materiales y servicios genera un flujo significativo de recursos fiscales (Delineación urbana e Impuesto de Industria y Comercio (ICA)), mientras que en la operación de los proyectos se activa una cadena de tributación continua a través de actividades relacionadas con el arrendamiento formal, la administración y el mantenimiento de las unidades. Las soluciones habitacionales de arriendo especializado aportan a la economía local mediante el pago de tributos adicionales, como el ICA.

Con el fin de realizar una modelación sobre el impacto del beneficio propuesto se tienen en cuenta los siguientes parámetros y supuestos:

Tabla 5. Parámetros de la modelación

Parámetros			
Número unidades	30,000		
Tarifa ICA arrendamientos	9,66 por mil		
Tarifa ICA materiales	11,1 por mil		
Tarifa delineación urbana	2,6%		
Tarifa Predial residenciales	6,6 - 7,6 por mil		
Tarifa Predial multifamiliar	9,5 por mil		
Incremento arrendamientos	4%		
Valoración predial	6.0%		
Canon de arrendamiento y servicios conexos*	1.3%	Supuestos	
*Se incluyen servicios que presta el operador profesional frente al mantenimiento de unidades privadas y acceso a ciertas zonas comunes		Incidencia materiales en valor comercial	55%
		Incidencia suelo en valor comercial	20%
		Incidencia materiales MO y equipo en costos	67%

Fuente: Camacol Bogotá y Cundinamarca

2.1.3.2. RESULTADOS

La tabla 2 muestra la modelación del flujo de recaudo por tipo de impuesto con y sin el beneficio. El desarrollo de 30 mil viviendas en la modalidad de multifamiliares en renta especializada en Bogotá en los próximos 5 años generaría un flujo de ingresos tributarios para el Distrito de \$1,72 billones durante su construcción y operación hasta el año 2039.

Tabla 6. Análisis de costos y beneficios fiscales (millones de pesos)

Año	Unidades	Costos	Beneficios				Total
		Predial	Delineación Urbana	ICA materiales	ICA arrendamiento	Predial	
2025							
2026	6.000	\$ 23.085	\$ 47.034	\$ 16.335	\$ 0	\$ 2.565	\$ 65.934
2027	6.000	\$ 48.017	\$ 48.915	\$ 16.988	\$ 4.069	\$ 5.335	\$ 75.308
2028	6.000	\$ 74.906	\$ 50.872	\$ 17.668	\$ 8.463	\$ 8.323	\$ 85.326
2029	6.000	\$ 103.870	\$ 52.907	\$ 18.375	\$ 13.202	\$ 11.541	\$ 96.025
2030	6.000	\$ 135.031	\$ 55.023	\$ 19.110	\$ 18.307	\$ 15.003	\$ 107.444
2031		\$ 134.191			\$ 23.800	\$ 21.845	\$ 45.645
2032		\$ 126.576			\$ 24.752	\$ 35.701	\$ 60.453
2033		\$ 111.387			\$ 25.742	\$ 57.381	\$ 83.123
2034		\$ 91.270			\$ 26.771	\$ 84.249	\$ 111.020
2035		\$ 65.714			\$ 27.842	\$ 116.825	\$ 144.668
2036		\$ 41.765			\$ 28.956	\$ 148.076	\$ 177.032
2037		\$ 23.692			\$ 30.114	\$ 173.743	\$ 203.857
2038		\$ 12.320			\$ 31.319	\$ 193.012	\$ 224.331
2039		\$ 4.271			\$ 32.571	\$ 209.275	\$ 241.846
Total		\$ 996.095	\$ 254.751	\$ 88.476	\$ 295.907	\$ 1.082.876	\$ 1.722.010

Fuente: Estimaciones Camacol Bogotá y Cundinamarca

Este modelo impulsa la generación de empleo formal tanto en la fase de construcción como en la operación posterior de los proyectos. Durante la construcción, se activan cadenas productivas que incluyen la fabricación de materiales, el transporte y los servicios especializados. Además, en la operación, se crean empleos formales relacionados con la administración, la seguridad, el mantenimiento y otros servicios complementarios.

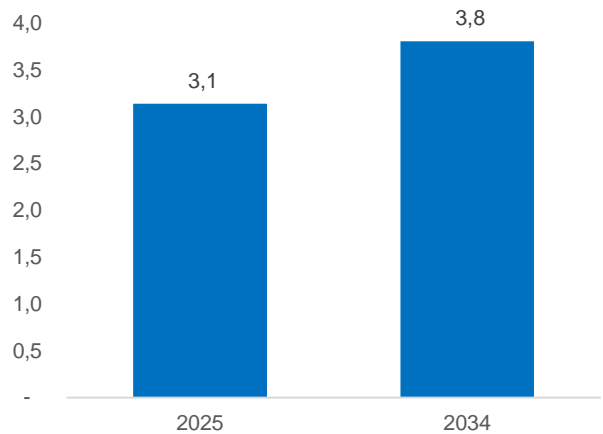
De acuerdo con las estimaciones la producción de 30.000 viviendas con vocación de arriendo especializado generaría inversiones por un valor de \$13,2 billones en la ciudad, de los cuales \$7,3 billones corresponden a la demanda de insumos de 34 subsectores encadenados. Además, se dinamiza la creación de 94 mil empleos anuales directos e indirectos para la ciudad.

2.3. SUPERACIÓN DE INEQUIDADES TERRITORIALES A PARTIR DE LA PROMOCIÓN DE LA OFERTA DE VIVIENDA SOCIAL FORMAL

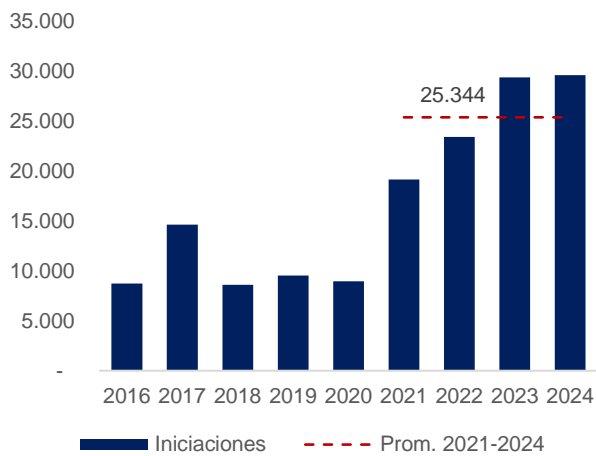
2.3.1. DIAGNÓSTICO

Las necesidades de vivienda urbana en Bogotá seguirán en ascenso. Entre 2025 y 2034, la ciudad pasará de contar con 3.1 millones de hogares urbanos a 3.8 millones, lo que implica una creación promedio de 75.000 al año (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2023). A esto se suma, que para 2023, un total de 20.000 hogares se encontraban en déficit cuantitativo, es decir, necesitaban una vivienda nueva, mientras que 311.000 estaban en condición de déficit cuantitativo por lo que requerían mejoras en sus viviendas (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2023). Sin embargo, de estos hogares en déficit cualitativo, 276.000 viven en hacinamiento mitigable, una condición difícil de resolver en zonas urbanas mediante simples mejoras habitacionales. El problema, se complejiza si se tiene en cuenta que 77% de los hogares gana menos de cuatro salarios mínimos (Secretaría Distrital del Hábitat, 2024), lo que significa que, de mantenerse esta distribución, tres de cada cuatro de los nuevos hogares necesitarán vivienda social. A pesar de esto, la oferta de vivienda social es insuficiente, entre 2021 y 2024, solo se han construido en promedio 25.344 viviendas sociales al año (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2025) una cifra insuficiente para cubrir la demanda (Gráfico 5)

**Gráfico 5. Formación de hogares y producción de vivienda social**  
*Panel 1. Número de hogares en Bogotá 2025 -2034 (Cifras en miles)*



*Panel 2. Viviendas de interés social iniciadas 2016-2024*



Fuente: Elaboración propia con base en la Secretaría Distrital de

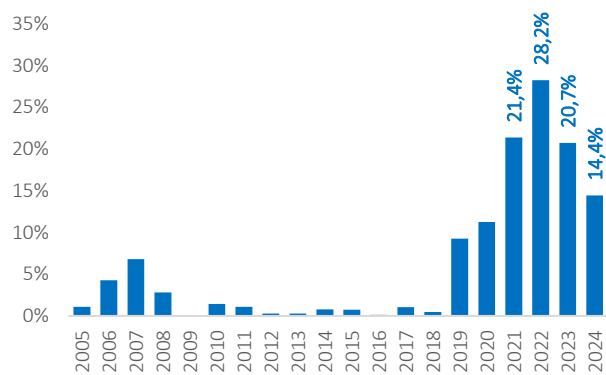
Planeación

Uno de los principales obstáculos para la generación de vivienda en el país tiene que ver con los altos costos de construcción (OECD, 2024, pág. 9), en los que influyen los impuestos asociados, como el de delineación urbana aplicable actualmente en Bogotá a la vivienda social nueva en estratos superiores a 4 (Concejo de Bogotá D.C., 2008). Además, aunque el Plan de Ordenamiento Territorial vigente obliga a incluir vivienda de interés social y prioritario en los suelos de renovación y consolidación, donde se prevé desarrollar el 85% de las viviendas de la ciudad (Secretaría Distrital del Hábitat, 2023), permite compensar esta obligación con un pago en dinero (Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., 2021) para construirlas en otro lugar. Esto dificulta la oferta de vivienda social en zonas bien ubicadas, ya que parte del suelo de los tratamientos urbanos donde debería desarrollarse pertenece a estratos superiores a 4: en renovación urbana (16%) y consolidación (25%) (Tabla 7), y limita la tendencia reciente del mercado en donde la vivienda social ubicada en estratos mayores al 4 representa entre 2021-2024 el 21% del total del segmento VIS en la ciudad (Gráfico 6)

Tabla 7. Proyección viviendas iniciadas por tratamiento y porcentaje de área estratos mayores a 4

Tratamiento Urbanístico	Unidades	% área estratos mayores a 4
Renovación	394.804	16%
Consolidación	233.348	25%
Desarrollo	97.747	7%
Mejoramiento	51.991	0%
Conservación	4.004	28%
Total	781.899	

Gráfico 6.Participación de viviendas de interés social de estratos mayores a 4 licenciadas sobre el total VIS 2005-2024



Fuente: Elaboración propia con base en la Secretaría Distrital del Hábitat, IDECA y DANE

Como resultado, hay una alta propensión a la vivienda social siga relegándose a zonas periféricas o de estratos bajos, profundizando así la segregación socioeconómica. En este sentido, es clave definir incentivos para la vivienda inclusiva que atraigan a los desarrolladores privados, como lo sugieren estudios recientes para las áreas de influencia de la futura primera línea del metro de Bogotá (Vergel, et.al, 2025), un proyecto clave para detonar la renovación urbana en la ciudad.

2.3.2. PROPUESTA

Extender la exención del impuesto de delineación urbana a todos los proyectos de vivienda de interés social y prioritario, sin importar el estrato en el que se construyan, por un período de 10 años. Las viviendas de interés social y prioritario que se construyan en estratos superiores a 4 podrán acceder a un descuento en la tarifa del impuesto de delineación urbana del 65% siempre y cuando acredite la incorporación de criterios de sostenibilidad en concordancia con el Decreto 582 de 2023. Así mismo, deberán contar con el área mínima establecida en el plan de ordenamiento territorial. Esto, permitirá aumentar la generación oferta de vivienda de interés social y prioritario en áreas centrales de la ciudad, y promoverá el desarrollo en sitio, en lugar de la compensación. Además, contribuirá al crecimiento económico, la generación de empleo y el acceso a vivienda formal.

### 2.3.3. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO

#### 2.3.3.1. PARÁMETROS CONSIDERADOS EN LA ESTIMACIÓN

Con el fin de cuantificar los impactos en materia de recaudo de esta medida, se llevó a cabo una modelación que contempló los siguientes parámetros (Tabla 8) **Tabla 8. Parámetros considerados para la estimación**

Elemento	Parámetro	Justificación y fuente
Participación vivienda de interés social en el total del mercado	76%	Participación estimada de viviendas sociales a 2035. Fuente: Plan del Hábitat y Servicios Públicos
Viviendas VIS estrato mayor igual a 4	21%	Porcentaje promedio de viviendas licenciadas en Bogotá de estrato igual o mayor a 4 en periodo 2022-2024. Se utiliza para estimar el número de VIS que contribuyen con el impuesto de delineación. Fuente: DANE
Valor VIS (SMMLV)	150	Precio tope de VIS en Bogotá. Artículo 239 de la Ley 2294 de 2023
Crecimiento precio de las viviendas	3.6%-3%	Los valores de las viviendas evolucionan según la inflación mediana esperada hasta 2026. A partir de 2027, se adopta como referencia una inflación del 3%, correspondiente al valor medio del rango meta de inflación. Fuente: Encuesta Mensual de Expectativas Económicas del Banco de la República de Colombia.
Tarifa	2,6%	Sobre el presupuesto inicial de la obra, pagado al declarar el anticipo, Fuente: Acuerdo 352 de 2008
Incidencia de materiales y equipos y mano de obra en el valor comercial	55,4%	Participación de materiales, equipo y mano de obra en la estructura de costos de un proyecto de vivienda. Fuente: DNP
Tarifa	11,04 por mil	Correspondiente al grupo 103 de la actividad industrial Fuente: Secretaría Distrital de Hacienda
Incidencia de materiales y equipos en el valor comercial	38.8%	Este factor se utiliza para determinar el pago del impuesto de ICA realizado por proveedores. Fuente: DNP
Tarifa	11,04 por mil	Correspondiente al grupo 204 de la actividad comercial (Secretaría Distrital de Hacienda,2025).
Tarifa predial residenciales	6,5-10,1 por mil	Acuerdo 648 de 2008
Promedio del valor de la razón de avalúo catastral/Avalúo comercial	70%	El valor derivado de este porcentaje se adopta como base gravable del impuesto predial Fuente: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.
Valoración predial	4,6%	Crecimiento del Índice de Valoración Inmobiliaria Urbana y Rural (IVIUR) para el grupo residencial urbano en el año 2024. Se asume constante en años siguientes. Se utiliza para evolucionar el valor de la base gravable del impuesto
Intensidad de mano de obra directa por cada VIS construida	1.57	Número de personas ocupadas de forma directa por cada VIS construida Fuente: Minvivienda
Intensidad de mano de obra directa por cada No VIS construida	2.78	Número de personas ocupadas de forma directa por cada No VIS construida Fuente: Minvivienda
Intensidad de mano de obra indirecta	2.17	Número de personas ocupadas de forma indirecta por cada vivienda construida Fuente: Minvivienda

Considerando el ciclo constructivo de los proyectos y la generación de impuestos en cada fase, se identifican los siguientes momentos clave:

- **t1:** Se genera el impuesto de delineación urbana al obtener la licencia de construcción e iniciar la obra.
- **t2:** Se causa el impuesto de ICA por la compra de materiales utilizados en la construcción.
- **t3:** Al escriturar las unidades, se genera nuevamente el impuesto de ICA por la venta de los inmuebles.
- **t4:** Los nuevos propietarios asumen el pago del impuesto predial.

El número de unidades de vivienda de interés social adicionales construir en estratos superiores a 4 se estimó con base en cuatro escenarios de referencia. Como contrafactual, se consideró el aumento en las unidades de vivienda de interés social licenciadas en estratos 1 a 3 tras la implementación del Decreto 89 de 2008, que estableció la exención del impuesto de delineación urbana para vivienda de interés social en estos estratos durante 10 años (2009-2019) (Tabla 9):

**Tabla 9. Escenarios considerados en la estimación**

Escenarios	Metodología de cálculo
Escenario 1 (Promedio)	Se estima un aumento del 20,5% en el número de viviendas licenciadas en estratos superiores a 4. Para este incremento se tomó como referencia el aumento promedio de las unidades licenciadas para vivienda de interés social en estratos 1 a 3 durante los diez años de la medida (2009-2018)
Escenario 2	Se estima un aumento del 24,4% en el número de viviendas licenciadas en estratos superiores a 4. Para este incremento se tomó como referencia el aumento promedio de las unidades licenciadas para vivienda de interés social en estratos 1 a 3 durante los siete primeros años de la medida 2009-2015.
Escenario 3	Se estima un aumento del 29% en el número de viviendas licenciadas en estratos superiores a 4. Para este incremento se tomó como referencia el aumento promedio de las unidades licenciadas para vivienda de interés social en estratos 1 a 3 durante los cinco primeros años de la medida 2009-2013.
Escenario 4	Se estima un aumento del 34,5% en el número de viviendas licenciadas en estratos superiores a 4. Para este incremento se tomó como referencia el aumento promedio de las unidades licenciadas para vivienda de interés social en estratos 1 a 3 durante los dos primeros años de la medida 2009-2010.

### 2.3.3.2. RESULTADOS

El costo tributario de la medida corresponde al total de impuestos de delineación urbana que el distrito dejaría de percibir debido al descuento otorgado en las unidades de vivienda social de estratos mayores a 4 generadas durante los 10 años del beneficio. Por su parte, los beneficios incluyen los ingresos por el ICA de materiales y el ICA de venta generados por la construcción de estas viviendas, y el impuesto predial. En este contexto, considerando el escenario de ocurrencia más probable con la implementación de la medida, se proyecta el inicio de 9.006 viviendas sociales de estrato mayor o igual a 4 en la próxima década. Estas unidades generarían un flujo de ingresos tributarios de \$263.384 millones hasta el final de la medida, momento en el que dejará de aplicarse a las viviendas iniciadas en el año 10 (Ver Tabla 10)

**Tabla 10. Análisis de costos y beneficios fiscales-Escenario promedio. Cifras en millones de pesos corrientes**

t	Unids. Totales	Unids. Adicionales	Costo	Beneficio				Total
			Delineación urbana	Delineación urbana	ICA materiales	ICA venta	Predial completo	
1	9,141	1,556	19,060	10,263	1,975	-	-	12,238
2	8,108	1,380	17,516	9,432	1,815	3,950	-	15,197
3	7,515	1,279	16,722	9,004	1,733	3,630	1,577	15,944
4	7,991	1,360	18,315	9,862	1,898	3,465	3,098	18,323
5	8,433	1,436	19,908	10,720	2,064	3,795	4,645	21,224
6	9,119	1,553	22,173	11,939	2,299	4,128	6,397	24,763
7	11,610	1,977	29,077	15,657	3,014	4,598	8,415	31,684
8	12,978	2,209	33,478	18,027	3,469	6,029	10,721	38,246
9	12,307	2,095	32,700	17,608	3,389	6,938	13,732	41,667
10	11,367	1,935	31,108	16,751	3,224	6,778	17,346	44,098
Total	98,569	16,780	240,058	129,262	24,880	43,312	65,930	263,384

Fuente: Elaboración propia

El descuento del 65% asegura que el Distrito no vea comprometido el recaudo, como ocurriría con un beneficio mayor, y al mismo tiempo maximiza el incentivo para que la vivienda social se construya en sitio, en lugar de ser compensada en dinero (Tabla 11).

**Tabla 11. Análisis de costos y beneficios fiscales-Calibración de descuentos. Cifras en millones de pesos corrientes**

Descuento	Tarifa	Costos	Beneficio					Balance
		Delineación urbana	Delineación urbana	ICA materiales	ICA venta	Predial completo	Total	
0%	2,6%	369.321		24.883	43.318	65.947	134.148	-235.173
65%	0,91%	240.059	129.262	24.883	43.318	65.947	263.411	23.352
50%	1,30%	184.660	184.660	24.883	43.318	65.947	318.809	134.148
25%	1,95%	92.330	276.991	24.883	43.318	65.947	411.139	318.809

### 2.3.4. BENEFICIOS ADICIONALES

En términos de actividad económica, el volumen de iniciaciones de vivienda proyectado permitirá la generación de 154.753 empleos directos y 213.895 empleos indirectos, así como una inversión de \$25,6 billones y una demanda de insumos por \$12,8 billones. Además, la construcción de vivienda social impulsa la creación de parques y zonas verdes, contribuyendo a la reducción de la contaminación del aire. Asimismo, al ubicarse en zonas centrales de la ciudad, ayuda a disminuir la segregación socioeconómica, ya que amplía la oferta de vivienda para los hogares de menores ingresos, estabiliza los precios y reduce el costo de vida. (Molloy, Nathanson, & Paciorenk, 2022).



## 5. ANÁLISIS JURÍDICO DE LA INICIATIVA

De acuerdo con el Ordenamiento Jurídico Colombiano, este proyecto se sustenta jurídicamente en la siguiente normatividad:

### 5.1 De orden internacional:

- Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS:

ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico: Con este proyecto de acuerdo se busca dinamizar la economía, proteger actividades comerciales y productivas, y promover la generación de nuevos empleos.

- 8.3: Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen actividades productivas, creación de puestos de trabajo decentes y fomento de Mipymes.

ODS 10: Reducción de las Desigualdades:

- 10.2: Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas.
- 10.3: Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados.
- 10.4: Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.

ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles:

- 11.3: De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativa, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas:

- 16.6: "Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas"
- 16.7: "Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades."

- **Hábitat III (Nueva Agenda Urbana ONU):** Se fomenta la renovación urbana y la densificación sostenible como medio para combatir la expansión urbana descontrolada y promover la inclusión social.

El proyecto de acuerdo encuentra armonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos en el marco de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Objetivos que se materializan en la dinamización del sector de la construcción y la formalización del mercado de arrendamiento.

De igual forma, responde a los lineamientos de la Nueva Agenda Urbana de ONU-Hábitat, en lo relativo a la implementación de proyectos de renovación urbana sostenible, con mecanismos que eviten fenómenos como la gentrificación, garantizando el derecho de los moradores a permanecer en su territorio.

## 5.2 Del orden Constitucional:

Desde la Constitución Política de Colombia, el Proyecto de Acuerdo encuentra respaldo en los siguientes artículos:

**Artículo 1.** *Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.*

**Artículo 2:** *Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.*

*Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.*

**Artículo 51:** *Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.*

**Artículo 82:** *Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.*

*Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común.*

**Artículo 287.** *Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos:*

- 1. Gobernarse por autoridades propias.*
- 2. Ejercer las competencias que les correspondan.*
- 3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.*
- 4. Participar en las rentas nacionales.*

**ARTÍCULO 317.** *Solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Lo anterior no obsta para que otras entidades impongan contribución de valorización. La ley destinará un porcentaje de estos tributos, que no podrá exceder del promedio de las sobretasas existentes, a las entidades encargadas del manejo y conservación del ambiente y de los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción. (...)*

**Artículo 333.** *La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.*

*La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.*

*La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.*

*El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.*

*La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación”*

**Artículo 338:** *En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.”*

### **5.3 Del orden legal:**

En el ordenamiento jurídico nacional, la propuesta encuentra soporte en la regulación del ordenamiento territorial y faculta a las entidades territoriales para implementar instrumentos de gestión del suelo y programas de renovación urbana, incluyendo incentivos que faciliten su viabilidad. Además, habilita a los entes territoriales para crear exenciones y descuentos en tributos locales, siempre que se preserve el equilibrio fiscal. Igualmente, se establecen lineamientos para fomentar esquemas de arrendamiento especializado y vivienda en alquiler, lo que fortalece la pertinencia jurídica del incentivo propuesto en el proyecto de acuerdo actual

- **LEY 788 DE 2002.** *"Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones."* Establece que las entidades territoriales pueden disminuir las sanciones y simplificar procedimientos tributarios.

**ARTÍCULO 59.** *Procedimiento tributario territorial. Los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos por ellos administrados. Así mismo aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de la aplicación de los procedimientos anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de los impuestos.*

- **LEY 1386 DE 2010.** *"Por la cual se prohíbe que las entidades territoriales deleguen, a cualquier título, la administración de los diferentes tributos a particulares y se dictan otras disposiciones."*

**ARTÍCULO 1o.** **PROHIBICIÓN DE ENTREGAR A TERCEROS LA ADMINISTRACIÓN DE TRIBUTOS.** *No se podrá celebrar contrato o convenio alguno, en donde las entidades territoriales, o sus entidades descentralizadas, deleguen en terceros la administración, fiscalización, liquidación, cobro coactivo, discusión, devoluciones, e imposición de sanciones de los tributos por ellos administrados. La recepción de las declaraciones así como el recaudo de impuestos y demás pagos originados en obligaciones tributarias podrá realizarse a través de las entidades autorizadas en los términos del Estatuto Tributario Nacional, sin perjuicio de la utilización de medios de pago no bancarizados.*

*Las entidades territoriales que a la fecha de expedición de esta ley hayan suscrito algún contrato en estas materias, deberán revisar de manera detallada la suscripción del mismo, de tal forma que si se presenta algún vicio que implique nulidad, se adelanten las acciones legales que correspondan para dar por terminados los contratos, prevaleciendo de esta forma el interés general y la vigilancia del orden jurídico. Igualmente deberán poner en conocimiento de las autoridades competentes y a los organismos de control cualquier irregularidad que en la suscripción de los mismos o en su ejecución se hubiese causado y en ningún caso podrá ser renovado.*

*Las entidades de control correspondientes a la fecha de expedición de esta ley, deberán de oficio revisar los contratos de esta naturaleza que se hayan suscrito por las entidades territoriales.*

*La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República deberán de oficio revisar los contratos de esta naturaleza que se hayan suscrito por las entidades territoriales.*

- **LEY 388 DE 1997:** “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”. Ley de desarrollo territorial

**ARTÍCULO 1.- Objetivos.** *La presente Ley tiene por objetivos:*

*1. Armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9 de 1989 con las nuevas normas establecidas en la Constitución Política, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas y la Ley por la que se crea el Sistema Nacional Ambiental.*

*2. El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes.*

*3. Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa del espacio público, así como por la protección del medio ambiente y la prevención de desastres.*

*4. Promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de planificación, en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que prescriben al Estado el ordenamiento del territorio, para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.*

*5. Facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales, en las cuales confluyan en forma coordinada la iniciativa, la organización y la gestión municipales con la política urbana nacional, así como con los esfuerzos y recursos de las entidades encargadas del desarrollo de dicha política.*

- **LEY 2079 DE 2021:** Por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de Vivienda y Hábitat

**ARTÍCULO 1. Objeto de la Ley.** *La presente ley tiene por objeto reconocer la política pública de hábitat y vivienda como una política de Estado que diseñe y adopte normas destinadas a complementar el marco normativo dentro del cual se formula y ejecuta la política habitacional urbana y rural en el país, con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una vivienda y hábitat dignos para todos los colombianos.*

*La política pública de hábitat y vivienda, a través del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, diseñará los instrumentos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros que se consideren necesarios para la asesoría e implementación de programas y proyectos habitacionales que contemplen de manera integral la producción de vivienda en las modalidades de adquisición, de vivienda, construcción de vivienda de interés social y prioritaria, mejoramiento de vivienda y entornos rurales dignos, orientados a la generación de la oferta requerida para satisfacer los requerimientos del país.*

#### **5.4 Del orden Distrital**

- **Acuerdo 927 de 2024 - Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Camina Segura"**

**12.4. Programa 19. Desarrollo empresarial, productividad y empleo.** *El programa parte de la necesidad que tiene Bogotá de posicionarse como un destino atractivo para la inversión extranjera, la creación y potencialización de empresas innovadoras, la realización de grandes eventos, realizar aprovechamiento económico racional del espacio público y la atracción de turistas. Para ello, este programa fortalecerá el tejido empresarial de Bogotá mediante estrategias que promuevan mejoras en la productividad de las empresas a través de la innovación, la participación en mercados internacionales y el posicionamiento de la ciudad como destino de inversión extranjera directa y epicentro de eventos de ciudad con alcance internacional.*

*Adicionalmente, se desarrollarán acciones mediante las cuales emprendimientos de la economía social, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas podrán recibir asistencia técnica y financiera para su fortalecimiento, con el fin de que se potencialicen sectores económicos en los que viene creciendo la ciudad. Tal es el caso de los servicios, el comercio y las industrias, agro, culturales y creativas, el deporte y el turismo.*

### **CAPÍTULO V - OBJETIVO ESTRATÉGICO “BOGOTÁ CONFÍA EN SU GOBIERNO”**

**Artículo 16. Programas del Objetivo Estratégico “Bogotá Confía en su Gobierno”.** *Adóptense los siguientes programas del objetivo “Bogotá confía en su Gobierno”:*

**16.2. Programa 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable.** *Con la implementación de este programa se dotará a las entidades distritales de conocimientos, habilidades y actitudes para asegurar valor público, de tal manera que se sintonicen las instituciones del Distrito Capital con las necesidades de las personas y hogares, al igual que con las de barrios y veredas de Bogotá. Además, que entreguen resultados, y cumplan de esta manera con los compromisos adquiridos ante la ciudadanía. Para ello, Bogotá identificará el conjunto de capacidades institucionales clave para ejecutar las políticas de gestión y desempeño. Se analizarán cualitativamente las brechas entre las capacidades institucionales existentes y las requeridas para atender los retos de ciudad, además de ajustar el Índice de Gestión Pública Distrital, con el fin de medir la relación entre gestión pública y generación de valor público, de tal manera que se tengan cifras sobre capacidades de cada entidad para producir resultados. (...)*

**Artículo 164. Incentivos para la provisión de vivienda formal y la reactivación económica.** La administración distrital deberá generar incentivos tributarios, urbanísticos y/o de construcción sostenible para favorecer la generación de vivienda, la sostenibilidad de las intervenciones que se realicen en el espacio público, los equipamientos, y la mejora; reemplazo o dotación de redes nuevas de servicios públicos en todos los tratamientos urbanísticos y, en general, para promover la reactivación económica del Distrito.

**Parágrafo.** Las reglamentaciones que se expidan para reactivar e incentivar la construcción deberán cumplir con los principios de claridad, equilibrio y proporcionalidad en la imposición de las cargas, facilidad y sencillez para su trámite, compromiso de las autoridades para agilizar las gestiones a su cargo, y en todo caso deberán estar orientadas a generar estímulos e incentivos tales como los tributarios, urbanísticos y/o de construcción sostenible.

**Artículo 166. Proyectos de arrendamiento especializado.** Se entiende por proyectos de arrendamiento especializado, aquellas edificaciones con destino habitacional construidas y destinadas exclusivamente al arrendamiento, las cuales son operadas por personas jurídicas especializadas en dicha actividad. Los inmuebles que hagan parte de proyectos de arrendamiento especializado, podrán estar o no sometidos al régimen de propiedad horizontal.

**Parágrafo.** La Administración Distrital podrá generar incentivos urbanísticos y/o de construcción sostenible para promover los proyectos de los que trata este artículo, implementando en todo caso, programas y estrategias orientadas a facilitar el acceso a financiamiento tanto a desarrolladores como a propietarios de este tipo de edificaciones.

**Artículo 230. Comisión de expertos para el estudio de incentivos tributarios.** La Secretaría Distrital de Hacienda durante el año 2025 revisará los tributos vigentes en el Distrito Capital, con el fin de presentar ante el Concejo Distrital una propuesta que optimice el recaudo de los ingresos de la ciudad con criterios de progresividad y competitividad, mejorando el servicio a los contribuyentes y garantizando el adecuado cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

En esta revisión, se contemplarán aquellos incentivos que favorezcan la generación de empleo, el crecimiento económico de la ciudad, así como, la formalización y la inclusión financiera.

El Gobierno Distrital, a través de la Secretaría de Hacienda, podrá conformar una comisión de expertos ad honorem que presente propuestas y escenarios para fortalecer el estudio que se realice, para lo cual reglamentará su funcionamiento. (subrayado fuera del texto)

- **Decreto Distrital 807 de 1993** “Por el cual se armonizan el procedimiento y la administración de los tributos distritales con el Estatuto Tributario Nacional y se dictan otras disposiciones”
- **Decreto Distrital 352 de 2002.** “Por el cual se compila y actualiza la normativa sustantiva tributaria vigente, incluyendo las modificaciones generadas por la aplicación de nuevas normas nacionales que se deban aplicar a los tributos del Distrito Capital, y las generadas por acuerdos del orden distrital”

**Artículo 1. Deber ciudadano y obligación tributaria.**

Es deber de la persona y del ciudadano contribuir a los gastos e inversiones de la Capital, dentro de los conceptos de justicia y equidad.

Los contribuyentes deben cumplir con la obligación tributaria que surge a favor del Distrito Capital de Bogotá, cuando en calidad de sujetos pasivos del impuesto, realizan el hecho generador del mismo.

**Artículo 4. Imposición de tributos.**

*En tiempos de paz, solamente el congreso, las asambleas departamentales y los concejos municipales podrán imponer contribuciones fiscales y parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.*

*Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley, establecer, reformar o eliminar tributos, impuestos y sobretasas; ordenar exenciones tributarias y establecer sistemas de retención y anticipos con el fin de garantizar el efectivo recaudo de aquellos.*

**Artículo 5. Administración de los tributos.**

*Sin perjuicio de las normas especiales y lo dispuesto en el artículo 98 de este decreto, le corresponde a la administración tributaria distrital, la gestión, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro de los tributos distritales.*

- **Decreto 555 de 2021.** “Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.”

**Artículo 301. Tratamiento de renovación urbana.** *Orienta y regula la transformación o recuperación de sectores de ciudad, con el fin de potenciar su ocupación, o detener y revertir los procesos de deterioro físico y ambiental, promover el aprovechamiento intensivo de la infraestructura pública existente, e impulsar la densificación racional de áreas para vivienda y otras actividades, promoviendo su uso eficiente y sostenible.*

*Este tratamiento se concreta en el presente Plan mediante la modalidad de revitalización, la cual promueve una mayor edificabilidad y la generación de nuevos elementos arquitectónicos y naturales de los bienes de propiedad privada, en sectores de ciudad en consideración a las condiciones de soporte urbanístico en términos de vías, servicios públicos y espacio público y a las condiciones de estratégicas de localización respecto del modelo de ocupación del territorio.*

*La modalidad de revitalización busca promover la permanencia de los moradores y unidades productivas en los sectores objeto de renovación urbana, previendo mecanismos e incentivos para integrarlos a los proyectos y que mantengan o mejoren sus condiciones originales de vivienda o espacios productivos en el nuevo proyecto.*

*En esta modalidad se permite el desarrollo de uno o varios predios mediante la obtención de las respectivas licencias urbanísticas o través de Plan Parcial. (Subrayado fuera del texto)*

El Subcapítulo 3 del Capítulo 5 del citado Decreto regula la protección a moradores y de actividades productivas. En ese sentido, el artículo 377 señala que:

**Artículo 377. Incentivo para la vinculación de moradores y de actividades productivas en el marco de instrumentos de planeación.** *Son incentivos para la vinculación de moradores y de actividades productivas a proyectos de revitalización urbana en el marco de instrumentos de planeación:*

*1. Los proyectos de renovación urbana que se desarrollen en suelo clasificado como estratos 1, 2 y 3, o su equivalente, en los que se vincule como mínimo el 70% de los moradores no estarán obligados a cumplir con la obligación de destinar suelo o construcción para vivienda de interés social, de acuerdo con las condiciones definidas para el respectivo tratamiento urbanístico.*

2. Las viviendas de reemplazo que reciban los moradores conservarán el estrato socioeconómico que tenían antes de la adopción del plan parcial o proyecto, siempre y cuando correspondan a estratos 1, 2, 3 y 4.

La Secretaría Distrital de Planeación reglamentará este incentivo. Hasta tanto se dará aplicación a las disposiciones del Decreto Distrital 448 de 2014.

3. Con la finalidad de promover y facilitar la vinculación de propietarios originales al desarrollo acciones y actuaciones de renovación urbana, el impuesto predial de los predios que se aporten por estos a los fideicomisos o patrimonios autónomos constituidos para su ejecución, tendrá un límite de crecimiento equivalente al 100% de la variación del índice de precios al consumidor – IPC causado durante el año anterior al del aporte del suelo, a partir del año siguiente al de la fecha de su aporte y por el término máximo de cinco (5) años.

**Parágrafo.** Los incentivos a los que se refiere este artículo se otorgarán siempre y cuando i) los propietarios concurren a la solicitud de la respectiva licencia urbanística o ii) se certifique su vinculación al respectivo fideicomiso o mecanismo jurídico definido para el desarrollo del proyecto o iii) cuando se desarrolle a través de proyectos asociativos liderados por la Secretaría Distrital del Hábitat.

- **Decreto Distrital 352 de 2002.** Por medio del cual se reglamenta la protección a moradores y actividades productivas en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.

**Artículo 1. Objeto.** El presente decreto tiene por objeto reglamentar las disposiciones asociadas a la protección a moradores y actividades productivas, conforme a lo definido en el Decreto Distrital 555 de 2021, en el marco de la Política de Revitalización Urbana y Protección a Moradores y Actividades Productivas, con relación a los procedimientos, roles y responsabilidades para su cumplimiento; mecanismos de participación de la administración distrital; condiciones para el ejercicio del derecho preferencial y áreas para la aplicación obligatoria de las disposiciones de protección a moradores y actividades productivas; así como las condiciones para la adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria y expropiación.

## 6. COMPETENCIA

De conformidad con las disposiciones que facultan al Concejo de Bogotá para desarrollar su función normativa, se encuentra que esta Corporación cuenta con la competencia para debatir, estudiar y aprobar normas sobre la materia que trata este Proyecto de Acuerdo.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 - Estatuto Orgánico de Bogotá, que establece de manera específica las atribuciones del Concejo Distrital:

**“ARTÍCULO 12. Atribuciones.** Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

(...)



12. Promover y estimular la industria de la construcción, particularmente la de vivienda; fijar los procedimientos que permitan verificar su sometimiento a las normas vigentes sobre uso del suelo; y disponer las sanciones correspondientes. Igualmente expedir las reglamentaciones que le autorice la ley para la vigilancia y control de las actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a vivienda.  
(...)

25. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes.

En el mismo sentido, el Acuerdo 741 de 2019 - Reglamento Interno Concejo de Bogotá D.C., establece:

**ARTÍCULO 1.- NATURALEZA.** El Concejo de Bogotá, D.C., es una Corporación Político - Administrativa de Elección Popular y ejerce sus atribuciones como Suprema Autoridad del Distrito Capital, de conformidad con la Constitución y la ley.  
(...)

**ARTÍCULO 3.- ATRIBUCIONES.** El Concejo de Bogotá, D.C., ejerce las atribuciones, funciones y competencias de conformidad con lo establecido en la Constitución Política, el Estatuto Orgánico para Bogotá, D.C., las leyes especiales, así como las conferidas a las Asambleas Departamentales en lo que fuere compatible con su régimen especial. En ausencia de las normas anteriores, se somete a las disposiciones constitucionales y legales vigentes para los municipios.

Teniendo en cuenta las normas antes señaladas se encuentra que el Concejo es competente para el estudio, debate y votación de este proyecto de Acuerdo

## 7. IMPACTO FISCAL

En observancia de la Ley 819 de 2003, "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones", específicamente lo dispuesto en su artículo 7º que establece:

**"Artículo 7º.** Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo".

Se concluye que esta propuesta normativa no genera un impacto fiscal adicional, considerando que esta iniciativa no modifica lo establecido en el Plan Operativo Anual de Inversiones, el presupuesto asignado, y se encuentra enmarcado en las disposiciones distritales vigentes, entre estas el Plan Distrital de Desarrollo y Plan de Ordenamiento Territorial. Por lo anterior, la ejecución de esta iniciativa no requiere recursos adicionales a los ya aprobados.

En tal sentido, se solicita el pronunciamiento técnico de la Secretaría Distrital de Hacienda durante el trámite legislativo de esta propuesta, a fin de obtener la evaluación del impacto económico correspondiente y el concepto de factibilidad fiscal pertinente, así como el informe y estudio realizado por la Comisión de Expertos Tributarios conformada en virtud del artículo 230 del Acuerdo 927 de 2024 *“Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”*, considerando que esta materia se encuentra dentro del ámbito de competencias del Alcalde Mayor de Bogotá D.C.

Adicional a esto, según la Sentencia C-911 de 2007 de la Corte Constitucional, en donde manifiesta que el impacto fiscal de las normas no puede convertirse en impedimento para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa.

*Al respecto, “Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la actividad legislativa del Congreso de la República conducirán a concederle una forma de poder de veto al Ministro de Hacienda sobre las iniciativas de ley en el Parlamento. (...), es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda.”*

Cordialmente,

**SANDRA FORERO RAMÍREZ**

Concejal de Bogotá D.C.

Partido Centro Democrático

**PROYECTO DE ACUERDO No 971 DE 2025****PRIMER DEBATE****ARTICULADO PROPUESTO**

***"POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS PARA ATRAER LA INVERSIÓN, GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESARROLLO URBANO EQUITATIVO EN BOGOTÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"***

**EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.**

En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 1 del artículo 313 de la Constitución Política de Colombia y el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993.

**ACUERDA:**

**Artículo 1. Objeto:** Formular lineamientos para la implementación de incentivos tributarios orientados a atraer inversión, dinamizar el crecimiento económico y promover la generación de empleo.

**Artículo 2. Incentivos tributarios para la renovación urbana:** Los propietarios que aporten sus inmuebles para el desarrollo de proyectos de vivienda en áreas localizadas en el tratamiento de Renovación Urbana o para Proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (PRUMS) establecidos en el Decreto Distrital 555 de 2021, desde la publicación del presente acuerdo y hasta el 31 de diciembre de 2030, podrán acceder a una exención en el impuesto predial unificado respecto de las unidades de vivienda resultantes que les sean reconocidas como contraprestación por los inmuebles aportados. También podrán ser beneficiarios de la presente exención el cónyuge o herederos del aportante en ausencia de éste.

Los proyectos de vivienda en tratamiento de Renovación Urbana o Proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (PRUMS) a que hace referencia el inciso anterior deberán estar certificados en construcción sostenible de acuerdo con consagrado en las disposiciones de la política de ecourbanismo y construcción sostenible, y deberá ser acreditada por el desarrollador del proyecto.

El porcentaje de la exención en el impuesto predial unificado de la que trata el inciso primero será el siguiente:

Año						
	1 – 5	6	7	8	9	10
Predial	100%	80%	60%	40%	20%	10%

Esta exención solo podrá ser aplicada en el impuesto de los contribuyentes, a partir del año gravable siguiente a la existencia jurídica de los inmuebles reconocidos como contraprestación por los aportados para el desarrollo del nuevo proyecto de vivienda, y el cumplimiento de la certificación de construcción sostenible

**Parágrafo 1.** Para los efectos de este artículo se entenderá que el predio ha sido aportado a un proyecto de vivienda en áreas localizadas en el tratamiento de Renovación Urbana o Proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (PRUMS) localizados en el tratamiento de renovación urbana o en su tratamiento original, siempre que se haya perfeccionado la transferencia de dominio a favor del desarrollador del respectivo proyecto o del vehículo fiduciario destinado para tal fin.

**Parágrafo 2.** El Gobierno Distrital reglamentará los demás requisitos formales que se deben acreditar para acceder a esta exención.

**Parágrafo 3.** Esta exención tendrá una vigencia de diez (10) años, a partir del año gravable siguiente a la existencia jurídica del nuevo inmueble.

**Artículo 3. Exención en el impuesto predial en proyectos de arrendamiento especializado.** Los contribuyentes que, a partir de la publicación del presente acuerdo y hasta el 31 de diciembre de 2030, obtengan licencia de construcción debidamente ejecutoriada en la modalidad de obra nueva para uso residencial, cuya destinación sea el desarrollo y operación de proyectos de arrendamiento especializado -en los términos del artículo 166 del Acuerdo Distrital 927 de 2024- tendrán una exención en el impuesto predial siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

- 1. Ser titular de una licencia de construcción de uso residencial, con posterioridad a la expedición del presente acuerdo.
- 2. El inmueble de uso residencial con destino al arrendamiento especializado deberá contar con un mínimo de cincuenta (50) unidades, lo cual se verificará conforme las unidades de vivienda aprobadas en la respectiva licencia de construcción.
- 3. La titularidad del derecho de dominio del inmueble deberá estar en cabeza de un único propietario.
- 4. El inmueble deberá destinarse al arrendamiento de las unidades construidas.
- 5. El operador deberá contar con la matrícula de arrendadores de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 820 de 2003 en concordancia con la Resolución 927 de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Hábitat.
- 6. El propietario del inmueble deberá contar con certificación de construcción sostenible de acuerdo con lo consagrado en las disposiciones de la política de ecourbanismo y construcción sostenible
- 7. El propietario deberá presentar y pagar la declaración del impuesto predial unificado en los plazos señalados por la Administración Distrital.

El porcentaje de la exención en el impuesto predial unificado será el siguiente:

Exención						
Año	1 – 5	6	7	8	9	10
Predial	90%	70%	50%	30%	20%	10%

La exención en el impuesto predial unificado iniciará en el año gravable siguiente a la generación de la obligación tributaria por concepto de impuesto predial de la edificación y una vez se acredite por parte del propietario la certificación de construcción sostenible de que trata el numeral 6 del presente artículo.

**Parágrafo.** La Administración Distrital reglamentará el procedimiento que deben seguir los interesados en la exención contemplada en este artículo

**Artículo 4.** Modifíquese el literal a) del artículo 9 del Acuerdo Distrital 352 de 2008 y adiciónese dos párrafos al mismo artículo, los cuales quedarán así:

**“ARTÍCULO 9. Exenciones.** Estarán exentas del pago del impuesto de delineación urbana hasta el año 2019, las siguientes obras:

a) En la modalidad de obra nueva, las obras correspondientes a los programas y soluciones de vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP) con sus correspondientes áreas comunes construidas en los estratos 1, 2 y 3.

(...)

**Parágrafo 1.** Las unidades VIS de estratos 4, 5 y 6 podrán acceder a una exención del 65% del impuesto a cargo de delineación urbana, siempre que se acredite cualquiera de las certificaciones de construcción sostenible consagradas en las disposiciones de la política de ecourbanismo y construcción sostenible.

**Parágrafo 2.** Las viviendas deberán contar con el área mínima de 36 m2 de área construida de conformidad con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente y las normas que lo reglamenten. En el caso de los proyectos inmobiliarios de vivienda que cuenten con licencias urbanísticas expedidas bajo normas anteriores al Decreto Distrital 555 de 2021, se aplicará el régimen de transición contemplado en el artículo 594 del mismo decreto.

**Artículo 6. Vigencia:** El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

**PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

## **PROYECTO DE ACUERDO No 972 DE 2025**

### **PRIMER DEBATE**

#### **“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS PARA EL EQUILIBRIO ENTRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA MANIFESTACIÓN PÚBLICA Y PACÍFICA, Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS USUARIOS DEL SITP DE BOGOTÁ Y LA ESTABILIZACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”**

#### **1. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO:**

Este Proyecto de Acuerdo tiene por objeto compilar, mediante principios y lineamientos, las normas vigentes y la jurisprudencia pertinente, sobre el equilibrio que debe existir entre el ejercicio del derecho fundamental a la manifestación pública y pacífica, y el orden público y el ejercicio de los derechos fundamentales de los demás ciudadanos, los cuales se materializan con la adecuada prestación del servicio público esencial del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá.

#### **2. SUSTENTO JURÍDICO**

##### **1.1 NORMAS NACIONALES**

##### **1.1.1. Constitución Política:**

- **Artículo 1:**

Establece que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada y participativa, fundada en el respeto de la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad, y en la prevalencia del interés general. Este precepto fundamenta la obligación estatal de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos y libertades ciudadanas, entre ellos, la vida, la libre circulación, la salud, la educación, el trabajo y la manifestación pública y pacífica.

- **Artículo 2:**

Dispone que los fines esenciales del Estado son servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los derechos, y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

También establece que las autoridades están instituidas para proteger a las personas en su vida, derechos y libertades.

- **Artículo 11:**

El derecho a la vida es inviolable.

- **Artículo 13:**

Reconoce el derecho fundamental a la igualdad y ordena al Estado adoptar medidas a favor de los grupos discriminados o en situación de debilidad manifiesta. Este principio exige que las actuaciones de las autoridades durante las manifestaciones pacíficas integren un enfoque diferencial y de derechos humanos, garantizando la protección especial de personas y colectivos vulnerables.

- **Artículo 20:**

Garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, así como el derecho a informar y recibir información veraz e imparcial. Este artículo ampara la libertad de expresión, la libertad de prensa y la participación informada durante las manifestaciones pacíficas, mediante la protección de las autoridades estatales.

- **Artículo 24:**

Establece el derecho que tiene todo colombiano a circular libremente por el territorio nacional, con las limitaciones que disponga la ley.

- **Artículo 25:**

Dispone que el trabajo es un derecho y una obligación social, y goza de la especial protección del Estado.

- **Artículo 37:**

Reconoce el derecho de los ciudadanos a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, y sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.

- **Artículo 49:**

Establece que la atención en salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado, y se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.

- **Artículo 67:**

Reconoce que la educación es un derecho y un servicio público que tiene una función social.

- **Artículo 93:**

Dispone que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en estados de excepción prevalecen en el orden interno. Este artículo da origen al bloque de constitucionalidad, por medio del cual los principios y normas internacionales sobre derechos humanos adquieren rango constitucional y aplicación directa en Colombia. De acuerdo con este mandato, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado colombiano, hacen parte del bloque de constitucionalidad y, por tanto, tienen fuerza vinculante para todas las autoridades públicas.

- Declaración Universal de los Derechos Humanos:

Mediante los artículo 19 y 20 que reconocen el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de reunión y asociación respectivamente, la protesta pacífica adquiere protección y reconocimiento como un derecho humano.

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos

Ratificado mediante la Ley 74 de 1968, contiene en sus artículos 19 y 21 los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, e incluye que las restricciones a este último deben estar previstas en la ley y ser necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral pública o los derechos y libertades de los demás.

- Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica

Ratificada mediante la Ley 16 de 1972, establece en sus artículos 13, 15 y 16 los derechos a la libertad de expresión, reunión y libertad de asociación, y este último también dispone que las limitaciones al derecho de reunión deben estar previstas en la ley y atender a razones democráticas, de interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden público, o para proteger la salud, la moral pública, o los derechos o libertades de los demás.

- **Artículo 218:**

Establece que la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas. Este artículo establece el marco constitucional para la actuación policial dentro de los límites del respeto a los derechos humanos.

- **Artículo 315:**

El numeral 2 señala que el alcalde debe conservar el orden público conforme a la ley y que es la primera autoridad de policía del municipio y, por lo tanto, la Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde. Por su parte, el numeral 3 dispone que el alcalde tiene como atribución asegurar la prestación de los servicios a su cargo.

- **Artículo 365:**

Establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social de Estado, y que aquel tiene el deber de asegurar su prestación eficiente a todos sus habitantes. También dispone que los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley.

### **1.1.2. Leyes**

- **Ley 105 de 1992 – Disposiciones básicas sobre el transporte**

El artículo 3° establece que el transporte público está encaminado a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios. También dispone que la operación del transporte público es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad.

- **Decreto Ley 1421 de 1993 – Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá**

El artículo 35 de esta norma dispone que el alcalde mayor es la primera autoridad de policía en la ciudad y, por lo tanto, dictará, de conformidad con la ley y el Código de Policía del Distrito, los reglamentos, impartirá las órdenes, adoptará las medidas y utilizará los medios de policía necesarios para garantizar la seguridad ciudadana y la protección de los derechos y libertades públicas.



- **Ley 336 de 1996 – Estatuto General de Transporte**

El artículo 4° dispone que el transporte gozará de especial protección estatal y como servicio público continuará bajo la dirección, regulación y control del Estado. Por su parte, el artículo 5° establece que la operación de las empresas de transporte público constituye un servicio público esencial que implica la prelación del interés general sobre el particular, especialmente, respecto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios. Además, el artículo 56 dispone que el modo de transporte terrestre automotor es un servicio público esencial.

- **Ley 599 de 2000 – Código Penal**

El Título XII del Código Penal (Delitos contra la seguridad pública) tipifica dos delitos relevantes: el artículo 353 sanciona la perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial cuando, por cualquier medio ilícito, se imposibilite la circulación o se dañe nave, aeronave o vehículo destinados a dicho servicio; y el artículo 353A castiga la obstrucción de vías públicas que afecten el orden público cuando, por medios ilícitos, se incite, dirija, constriña o proporcione medios para obstaculizar vías o infraestructura de transporte, atentando contra la vida, la salud pública, la seguridad alimentaria, el ambiente o el derecho al trabajo. Estos tipos protegen la seguridad pública y excluyen las manifestaciones públicas y pacíficas.

- **Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana**

El artículo 1° dispone que esta norma tiene por objeto establecer las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio nacional, mediante la regulación del ejercicio del poder, la función y la actividad de Policía, con carácter preventivo y en concordancia con la Constitución Política y el ordenamiento jurídico vigente. Asimismo, el artículo 2° fija los objetivos específicos del código, entre los que se destacan la promoción de comportamientos que favorezcan la convivencia en el espacio público, el respeto por la dignidad humana y el ejercicio responsable de los derechos y deberes ciudadanos, así como la definición de competencias, medidas y procedimientos de Policía. De esta manera, la Ley 1801 de 2016 constituye el marco jurídico que orienta la actuación de las autoridades para garantizar la convivencia pacífica, el uso adecuado del espacio público y la protección de los derechos, entre ellos la libre circulación, la salud, la educación y el trabajo, incluso durante el desarrollo de manifestaciones públicas y pacíficas.

Por su parte, el artículo 22 establece que la utilización de la fuerza legítima corresponde de manera exclusiva, en el marco de esta norma, a los miembros uniformados de la Policía Nacional, salvo en aquellos casos en los que de manera excepcional se requiera la asistencia militar. Igualmente, el artículo 166 dispone que el uso de la fuerza es el medio material, necesario, proporcional y racional, empleado por el personal uniformado de la Policía Nacional, como último recurso físico para proteger la vida e integridad física de las personas incluida la de ellos mismos, sin mandamiento previo y escrito, para prevenir, impedir o superar la amenaza o perturbación de la convivencia y la seguridad pública, de conformidad con la ley.

Adicionalmente, el artículo 146 establece los comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte público masivo, colectivo e individual de pasajeros, estableciendo dentro de ellos la prohibición de obstaculizar o impedir la movilidad o el flujo de usuarios en dichos sistemas. Esta disposición reconoce el carácter esencial del servicio público de transporte y la obligación de las autoridades de prevenir, controlar y sancionar las conductas que impidan su adecuado funcionamiento. En ese sentido, la norma refuerza el deber estatal de garantizar que las manifestaciones se desarrollen sin anular el acceso al servicio de transporte público y la movilidad de la ciudadanía, asegurando la continuidad del servicio y la protección de los derechos fundamentales de los usuarios. De este modo, La Ley 1801 complementa el marco normativo que impone a las entidades territoriales y de policía la responsabilidad de salvaguardar la prestación de los servicios públicos esenciales durante manifestaciones pacíficas y alteraciones al orden público.

### **1.1.3. Decretos del orden nacional**

- **Decreto Nacional 003 de 2021 – Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica Ciudadana**

Establece en su artículo 2° la primacía del diálogo y la mediación como principios rectores de la actuación de las autoridades administrativas y de policía en el marco de las manifestaciones públicas. En virtud de esta disposición, todas las autoridades del orden nacional y territorial están en la obligación de privilegiar el diálogo como mecanismo permanente de gestión, incluso cuando los medios pacíficos de intervención se consideren agotados y se proceda al uso de la fuerza. Este enfoque busca garantizar que la gestión institucional de las protestas se oriente a la prevención del conflicto, la protección de los derechos humanos y la preservación de la convivencia ciudadana, fortaleciendo la confianza entre la ciudadanía y las instituciones y asegurando condiciones de respeto y seguridad para todas las personas, participantes o no, en las movilizaciones.

Por su parte, el artículo 3° define los principios que deben regir la actuación de las autoridades de policía durante las manifestaciones públicas, entre los cuales se destacan el respeto y garantía de derechos, la dignidad humana, la legalidad, la necesidad, la proporcionalidad, la prevención, la diferenciación y la no estigmatización. En especial, se dispone que el uso de la fuerza debe ser excepcional, diferenciado y dirigido exclusivamente a contener actos de violencia que pongan en riesgo los derechos fundamentales o el orden público, priorizando siempre la protección de la vida y la integridad de las personas. En este marco, el Decreto 003 de 2021 refuerza el deber de las autoridades de promover un manejo preventivo y proporcional de las manifestaciones, que asegure simultáneamente el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y la continuidad de los servicios públicos esenciales, como el transporte público, en armonía con los principios de convivencia, legalidad y respeto por la dignidad humana.

### **1.1.4. Resoluciones del orden nacional**

- **Resolución 2903 de 2017 de la Policía Nacional – Por la cual se expide el Reglamento para el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales, por la Policía Nacional**

Esta norma tiene como propósito determinar los criterios y las normas que orientan el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales, por parte de la Policía Nacional. Vale resaltar que esta resolución aplica a todo el personal uniformado de la Policía Nacional, como titular del uso de la fuerza en materia de convivencia y seguridad. Adicionalmente, establece que el uso de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales, se dará única y exclusivamente en los siguientes eventos: (i) cuando: (a) exista un riesgo razonable e inminente para la integridad física del policía o de terceras personas, o (b) genere amenaza para la convivencia, en especial al componente de seguridad; y (ii) bajo estricta observancia de los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y racionalidad, procurando advertir a los infractores sobre la intención de emplear dichos elementos, a menos que esa advertencia implique poner en peligro la vida e integridad del policía o de terceras personas.

- **Resolución 1190 de 2018 del Ministerio del Interior – Por la cual se adopta el “Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación, inclusive de quienes no participan en la protesta pacífica”**

Esta norma busca orientar la actuación de las entidades del Estado en el reconocimiento de la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de derechos fundamentales, tales como la reunión, la manifestación pública y pacífica, la libertad de expresión, de conciencia, de asociación, de oposición y de participación, incluyendo la protección de quienes no participan en las movilizaciones. El protocolo establece directrices de articulación institucional para garantizar que las manifestaciones se desarrollen en condiciones de respeto, seguridad y convivencia, promoviendo la prevención de conflictos y la mediación como herramientas principales de gestión democrática del espacio público.

Por su parte, el artículo 2° precisa que el protocolo no modifica normas de rango superior ni constituye una nueva regulación, sino que compila y armoniza las disposiciones vigentes y la jurisprudencia aplicable, respetando el marco de competencias y autonomía de las entidades del orden nacional y territorial. Así, la resolución consolida un marco metodológico para la actuación coordinada del Estado frente a la protesta pacífica, asegurando la protección integral de los derechos ciudadanos y la continuidad de los servicios públicos esenciales, como el transporte, en armonía con los principios de convivencia, legalidad y respeto por la dignidad humana.

- **Resolución 02271 de 2022 de la Policía Nacional – Por la cual se define la estructura orgánica de la Jefatura Nacional del Servicio de Policía, se determinan las funciones de sus dependencias internas y se dictan otras disposiciones**

Esta norma establece la estructura de la Jefatura Nacional del Servicio de Policía, en la cual se incluye a la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), encargada de la mediación, gestión y acompañamiento en el desarrollo de las manifestaciones públicas y sociales. En su artículo 38, ordena a la Jefatura Nacional del Servicio de Policía reglamentar la UNDMO.

- **Resolución 1091 de 2023 de la Policía Nacional – Por la cual se expide el Manual para la Atención a la Reunión y Manifestación Pública y Pacífica y Control de Disturbios, de la Policía Nacional de Colombia**

Esta norma expide el “Manual para la Atención a la Reunión y Manifestación Pública y Pacífica y Control de Disturbios”, y reglamenta la actuación de la UNDMO. Así, la resolución regula la intervención policial con el fin de proteger el ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública y pacífica, y establece los lineamientos de actuación ante hechos violentos, infracciones flagrantes a la ley o situaciones que representen un peligro inminente para la vida e integridad de los manifestantes, del personal policial o de terceros. Esta norma consolida el papel de la UNDMO como una unidad especializada en la gestión preventiva del conflicto, priorizando el diálogo y la mediación como ejes centrales de la respuesta institucional.

Asimismo, la resolución reafirma que toda intervención policial debe desarrollarse dentro del marco de la Constitución Política, los estándares internacionales de derechos humanos y la normatividad vigente, garantizando la proporcionalidad, legalidad y respeto por la dignidad humana. Con ello, la Policía Nacional busca fortalecer su enfoque de actuación basado en el diálogo y la contención pacífica, asegurando la preservación del orden público, la convivencia y la continuidad de la prestación de los servicios públicos esenciales, como el transporte, durante el desarrollo de manifestaciones sociales.

## **1.2 NORMAS DISTRITALES**

- **Acuerdo 927 de 2024 - Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”**

El Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027 (PDD 2024-2027) establece en su artículo 8° el Programa 1. Diálogo social y cultura ciudadana para la convivencia pacífica y la recuperación de la confianza del Objetivo Estratégico “Bogotá avanza en seguridad”. Concretamente, este programa se enfoca en el fomento de una cultura ciudadana que recupere la confianza, trabajando en el fortalecimiento del diálogo para la resolución pacífica de conflictos. Resalta de manera prioritaria los esfuerzos institucionales en identificar conflictividades e interviniendo factores de riesgo, reconociendo el derecho fundamental de la ciudadanía a la protesta social y asegurando la garantía de los derechos y del bienestar integral de la población.

Así, desde la gobernanza se propone una estrategia que desarrolle: (i) acciones de cultura del diálogo bajo el principio de corresponsabilidad; (ii) actividades que transformen situaciones de alto riesgo de conflictividad en el espacio público, garantizando la armonía de derechos; y (iii) mesas de diálogo y/o pactos que aseguren un gobierno abierto a la ciudadanía. Estas herramientas se deben materializar mediante la generación de condiciones que fortalezcan la apropiación de la ciudad y de lo público, la protección del interés común y el aumento de la confianza ciudadana en los entornos públicos y privados, incluyendo los lugares de culto.

Además, la puesta en funcionamiento de este programa profundizará la ejecución de acciones de prevención y materialización del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y se requerirá la implementación de un comando de inspectores territoriales que atenderán prioritariamente las necesidades más urgentes de la ciudad, con cumplimiento de las garantías constitucionales y demás disposiciones derivadas.

Adicionalmente, en el artículo 8 del PDD 2024-2027 se incluye el Programa 6. Movilidad segura e inclusiva, en el cual se dispone que la Administración Distrital implementará un plan interinstitucional de seguridad integral para el SITP que, en articulación regional, distrital y local con la MEBOG, priorizará la prevención, disuasión y respuesta oportuna frente a delitos, violencias y conflictos de convivencia en portales, estaciones y vehículos, Para ello fortalecerá el Centro de Gestión de Tránsito con sistemas inteligentes de monitoreo, interoperará la red de video del Sistema con el C4, desplegará el programa “TransMilenio Zona Segura” con enfoque poblacional, diferencial y de género, y desarrollará operativos de control y acompañamiento policial apoyados en tecnología. De manera complementaria, adoptará medidas para reducir la evasión mediante herramientas de seguimiento, acciones pedagógicas y la intervención coordinada de las entidades competentes respecto de la venta informal al interior del Sistema; garantizará señalización clara y accesible (incluida señalización universal) para favorecer la comunicación y el uso seguro e incluyente de la infraestructura; y promoverá campañas de cultura ciudadana orientadas a comportamientos de cuidado y respeto entre usuarios y personal operativo, con el fin de disminuir los factores de riesgo que afectan la seguridad y la convivencia en el transporte público

- **Decreto Distrital 053 de 2023 – Por medio del cual se establece y adopta el «Protocolo Distrital para la garantía y protección de los derechos a la reunión, manifestación pública y la protesta social pacífica» y se deroga el Decreto Distrital 563 de 2015**

Esta norma en su artículo 1° establece y adopta el “Protocolo Distrital para la garantía y protección de los derechos a la reunión, manifestación pública y la protesta social pacífica”, en el marco del reconocimiento, protección y garantía del ejercicio del derecho a la reunión y manifestación pública y pacífica, así como sus derechos involucrados. Esto con el fin de superar toda forma de estigmatización y contribuir al mantenimiento de la convivencia ciudadana.

En su artículo 2°, fija los principios que deben regir dicha actuación, entre los que se encuentran los de absoluta necesidad en el uso de la fuerza, coordinación, diálogo, diferenciación, finalidad legítima en el uso de la fuerza, focalización, igualdad y no discriminación, dignidad humana, legalidad, no estigmatización, precaución, prevención, proporcionalidad en el uso de la fuerza, reconocimiento, garantía y protección de defensores de derechos humanos y comisiones de verificación, responsabilidad y supremacía del poder civil. Estos principios orientan el comportamiento de las autoridades administrativas y de policía, asegurando que cualquier intervención estatal durante las manifestaciones se realice con sujeción a la Constitución, al respeto por los derechos fundamentales y a la obligación de proteger tanto a quienes ejercen la protesta como a quienes no participan en ella.

De igual forma, el artículo 3° incorpora los enfoques de respeto y garantía de derechos, preventivo, diferencial, de género, territorial y de respeto, los cuales buscan orientar las acciones estatales desde una perspectiva incluyente y de derechos humanos, teniendo en cuenta las características particulares de los territorios, los grupos poblacionales y las condiciones de vulnerabilidad. Estos enfoques refuerzan la obligación del Estado de adoptar medidas diferenciadas que aseguren la protección efectiva de todos los actores sociales involucrados en las movilizaciones, así como de garantizar que el ejercicio del derecho a la manifestación pública y pacífica se desarrolle en condiciones de seguridad, dignidad y respeto por la vida. En conjunto, los artículos 2° y 3° constituyen el marco de actuación institucional que armoniza el derecho a la manifestación pública y pacífica con la preservación del orden público y la continuidad en la prestación de los servicios públicos esenciales, como el transporte público.

De manera específica, el artículo 10 regula el funcionamiento del Puesto de Mando Unificado (PMU) como una instancia temporal político-administrativa de coordinación interinstitucional, encargada de articular, supervisar y adoptar las acciones necesarias para garantizar los derechos tanto de quienes participan en manifestaciones pacíficas como de quienes no lo hacen. Esta instancia debe permanecer activa antes, durante y después de las jornadas de movilización, hasta la finalización de los acontecimientos, asegurando una respuesta integral de las autoridades distritales. El PMU está conformado por representantes de las secretarías distritales de Gobierno, Movilidad, Salud, Integración Social, Seguridad, Mujer y Desarrollo Económico, así como del IDIGER, el Cuerpo Oficial de Bomberos, TransMilenio S.A. y la Policía Metropolitana de Bogotá, junto con delegados de la sociedad civil y organismos de control. Su carácter participativo y de comunicación permanente —con actores sociales, gremios productivos y terceros potencialmente afectados— permite monitorear las afectaciones a la movilidad y adoptar decisiones en tiempo real para garantizar la continuidad del servicio público de transporte y la seguridad de la ciudadanía.

Ahora bien, en el numeral 2 del Protocolo Distrital para la garantía y protección de los derechos a la reunión, manifestación pública y la protesta social pacífica, se establecen como objetivos, los siguientes: (i) proteger el ejercicio del derecho fundamental a la protesta pacífica y los derechos que de él derivan, con el fin de construir y fortalecer la interlocución, corresponsabilidad y coordinación entre las autoridades distritales, la Policía Nacional y la sociedad civil; (ii) garantizar el derecho a la vida y a la integridad física, en el marco del ejercicio del derecho a la manifestación pública y pacífica; (iii) ofrecer herramientas para facilitar a las autoridades distritales y a la Policía Nacional, el cumplimiento de los fines esenciales del Estado Social de Derecho, priorizando el respeto y la garantía a los derechos fundamentales de la ciudadanía y el mantenimiento de la convivencia ciudadana; (iv) entre otros.

Adicionalmente, en los literales e) y g) del numeral 23 del Protocolo Distrital que hace referencia a las actuaciones preliminares al desarrollo de las manifestaciones por parte de las autoridades político-administrativas y de policía, se dispone que el Puesto de Mando Unificado (PMU) atendiendo a sus funciones, deberá, entre otras: “e) En caso de que se requiera, coordinar las actuaciones administrativas necesarias para asegurar la ejecución de los planes de movilidad como cierre de vías, desvíos, suspensión parcial o total del servicio en estaciones y portales del Sistema Integrado de Transporte y, ciclovía; planes de evacuación, planes de gestión del riesgo y atención de desastres (plan de emergencia y contingencia por aglomeraciones), entre otros. Así mismo, deberá comunicar estos actos a las autoridades competentes para su implementación, así como a la ciudadanía. (...) g) Difundir en tiempo real la información relacionada con los puntos de concentración, cierre de vías, desvíos y planes de movilidad por medio de los canales oficiales de cada entidad participante en el PMU, con el fin de respetar y garantizar los derechos de todas las personas”.

Finalmente, frente a las acciones para la prevención de afectaciones a la movilidad, en el numeral 30 del Protocolo Distrital se establece lo siguiente: “[e]n lo referente al Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITP), con el objetivo de garantizar la prestación del servicio de transporte, así como la protección de usuarios, operadores, flota e infraestructura del Sistema TransMilenio, en sus acciones previas, concomitantes y posteriores, el presente protocolo se articula con la Estrategia Institucional de Respuesta a Emergencias de TRANSMILENIO S.A., la cual establece para el sistema los términos específicos de actuación según el Marco de Actuación de la Estrategia Distrital para la Respuesta a Emergencias”.

- **Decreto Distrital 537 de 2023 – Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Seguridad, Convivencia, Justicia y Construcción de Paz y Reconciliación 2023-2038 y se dictan otras disposiciones**

En el artículo 5° de esta norma se señala como objetivo general de la Política Pública Distrital de Seguridad, Convivencia, Justicia y Construcción de Paz y Reconciliación 2023-2038, **garantizar la seguridad y la protección efectiva de los derechos, las condiciones para la convivencia ciudadana, el acceso a la justicia, y la construcción de paz y reconciliación en El Distrito Capital.** A su vez, el artículo 6° establece como objetivos específicos de esa política pública, entre otros, los siguientes: (i) potenciar las capacidades institucionales para la protección de los derechos y libertades ciudadanas, la prevención de violencias, afectaciones a la vida y la promoción de la convivencia; e (ii) implementar acciones institucionales para el acceso a la justicia, la resolución de conflictos y el restablecimiento de derechos.

- **Resolución 860 de 2019 de Transmilenio S.A. – Por la cual se adopta el documento “T-DS- 017 Estrategia institucional de respuesta a emergencias del Sistema TransMilenio” de la Dirección Técnica de Seguridad**

En el artículo 1° de esta norma se adopta el protocolo sobre la Estrategia Institucional de Respuesta a Emergencias del Sistema Transmilenio. Concretamente, como objetivo general de dicha estrategia, se señala que es responder de forma eficaz y eficiente ante situaciones de emergencia y/o desastre que se presenten en la ciudad para las que sea activado TransMilenio, en las que se requiera la operación de desplazamientos terrestres para la movilización de afectados y la implementación del plan de desvíos, a través de la definición de procedimientos internos y la coordinación interinstitucional. Adicionalmente, como objetivos específicos de la estrategia, se resaltan, entre otras: (i) desarrollar la evaluación de daños, riesgos asociados y análisis de necesidades, mediante la identificación de la afectación de la infraestructura de TransMilenio y la identificación de nuevas condiciones de riesgo derivadas del evento, con el fin de dar continuidad al servicio misional; (ii) definir la estructura organizacional para soportar la prestación de los servicios y funciones de respuesta, así como la continuidad del servicio misional en caso de emergencia; y (iii) capacitar a funcionarios y contratistas para mejorar las habilidades que permitan optimizar la respuesta a emergencias, así como la prestación de los servicios y funciones a cargo.

### **1.3 JURISPRUDENCIA RELEVANTE**

#### **1.3.1 Corte Constitucional**

- **Sentencia C-450 de 1995**

La Corte Constitucional estudió una demanda de inconstitucionalidad contra: (i) los literales b) y h) del artículo 1° del Decreto Extraordinario 753 de 1956, el cual subrogó el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo sobre la prohibición de la huelga en los servicios públicos; y (ii) el literal a) del numeral 1 del artículo 34 del Decreto Ley 2351 de 1965, el cual subrogó el artículo 452 del Código Sustantivo del Trabajo sobre procedencia del arbitramento. Concretamente, frente al carácter esencial de los servicios públicos, la Corte afirmó que este se predica “cuando las actividades que lo conforman contribuyen de modo directo y concreto a la protección de bienes o a la satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales. Ello es así, en razón de la preeminencia que se reconoce a los derechos fundamentales de la persona y de las garantías dispuestas para su amparo, con el fin de asegurar su respeto y efectividad”.



Asimismo, la Corporación advirtió que “las actividades de las empresas de transporte por tierra, mar y aire, indudablemente son servicios públicos esenciales, porque están destinadas a asegurar la libertad de circulación (art. 24 C.P.), o pueden constituir medios necesarios para el ejercicio o la protección de otros derechos fundamentales (vida, salud, educación, trabajo, etc.)”. De este modo, la Corte aclaró que los servicios públicos esenciales hacen referencia a actividades que contribuyen de forma directa y concreta a la observancia, vigencia y efectividad de los derechos fundamentales. Por este motivo, las actividades que adelantan las empresas de transporte por tierra constituyen la prestación de un servicio público esencial, ya que están dirigidas a garantizar el derecho fundamental de libre circulación, y pueden ser un mecanismo idóneo para asegurar la ejecución o la protección de otros derechos fundamentales, como la vida, la salud, la educación y el trabajo.

- **Sentencia C-742 de 2012**

La Corte resolvió dos cargos contra la Ley 1453 de 2011 y declaró exequible (i) el artículo 44 (artículo 353A del Código Penal) que tipifica la obstrucción de vías públicas que afecten el orden público, y (ii) la expresión “imposibilite la circulación” del artículo 45 (artículo 353 del Código Penal) sobre perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial. Para el artículo 44, precisó que solo es punible incitar, dirigir, constreñir o proporcionar medios ilícitos con el propósito de obstaculizar vías o infraestructura de transporte y cuando ello atente en concreto contra la vida, la salud pública, la seguridad alimentaria, el ambiente o el derecho al trabajo; además, excluye las movilizaciones con aviso previo en el marco del artículo 37 de la Constitución Política, entendiendo “permiso” como aviso informativo, no autorización. Para el artículo 45, interpretó que “imposibilite la circulación” refiere a una perturbación superlativa del tráfico (no de un vehículo aislado) que hace imposible el servicio de transporte público y, por su ubicación sistemática, protege la seguridad pública.

La sentencia reafirma el principio de estricta legalidad penal: los tipos pueden contener términos generales, pero deben ser determinables mediante interpretación razonable, ofrecer previsibilidad y permitir la defensa. También delimita el alcance del derecho de reunión y manifestación: solo la protesta pacífica está amparada; el recurso a medios ilícitos y la violencia excluyen la conducta del paraguas constitucional. Al clarificar que “permiso” es igual a aviso previo y que la tipicidad exige lesión o puesta en peligro concreta de bienes jurídicos, el fallo evita la criminalización de la protesta legítima y, a la vez, habilita la reacción penal frente a bloqueos violentos que anulan la circulación y comprometen la seguridad pública, sin necesidad de acudir a un examen de proporcionalidad adicional dado el entendimiento correcto de los tipos.

- **Sentencia C-223 de 2017**

La Corte Constitucional, al analizar la reserva de ley estatutaria en relación con la regulación del derecho fundamental de reunión y manifestación pública y pacífica contenida en los artículos 47 a 75 de la Ley 1801 de 2016, determinó que dicha normatividad desarrolla de manera directa e integral los derechos fundamentales de reunión y manifestación pública y pacífica (artículo 37 de la Constitución Política), de libertad de expresión (artículo 20 de la Constitución Política) y de participación política (artículo 40 de la Constitución Política), así como otros derechos interdependientes. El Tribunal constató que el Título VI del Libro II del Código Nacional de Policía y Convivencia establece una regulación completa y estructural del ejercicio de estos derechos, al incluir definiciones, clasificaciones, condiciones de modo, tiempo y lugar, restricciones, sanciones y disposiciones sobre la intervención de la fuerza pública. Al versar sobre el núcleo esencial de los derechos involucrados e incorporar límites, excepciones y prohibiciones que afectan su estructura y principios, la Corte concluyó que el legislador ordinario excedió su competencia, pues la materia debía tramitarse mediante ley estatutaria. En consecuencia, declaró la inexequibilidad de los artículos 47 a 75 de la Ley 1801 de 2016, diferida hasta el 20 de junio de 2019, a fin de permitir su eventual sustitución conforme al procedimiento legislativo correspondiente.

Respecto del cargo específico contra el artículo 48 de la Ley 1801 de 2016, la Corte concluyó que la facultad otorgada a las autoridades municipales para reglamentar las condiciones y requisitos del ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública y pacífica vulnera la cláusula de reserva legal prevista en los numerales 1 y 2 del artículo 150 de la Constitución Política, que atribuyen al Congreso la competencia exclusiva para regular los derechos y deberes fundamentales, así como para expedir las leyes que los desarrollen. Si bien el artículo 37 de la Constitución consagra el derecho fundamental de reunión y manifestación pública y pacífica, la Corte precisó que su regulación integral no puede ser delegada a autoridades administrativas ni locales. En consecuencia, el Tribunal consideró que este cargo se encontraba comprendido dentro de la declaratoria de inexequibilidad del Título VI, al evidenciarse que la regulación en cuestión debía adoptarse mediante ley estatutaria, en tanto incide directamente en el núcleo esencial, los límites y las condiciones de ejercicio del derecho fundamental a la manifestación social.

- **Sentencia C-281 de 2017**

La Corte Constitucional examinó varias disposiciones de la Ley 1801 de 2016 en materia de reunión, manifestación y medidas policivas que restringen la libertad personal, bajo los ejes de legalidad estricta, razonabilidad y proporcionalidad. Declaró exequible el requisito de aviso previo de 48 horas (artículo 53) por cumplir una finalidad informativa y facilitar la protección del derecho; condicionó la facultad de disolución del mismo artículo a que las alteraciones a la convivencia sean graves e inminentes y que no exista medida menos gravosa; y avaló la prohibición de realizar reuniones en áreas del SINAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas) sin autorización ambiental (artículo 103.9). Respecto de la actuación estatal, condicionó el inciso 4º del artículo 56 para excluir la intervención de las Fuerzas Militares en operativos de control o contención, permitiéndola solo en operativos de garantía de realización cuando se justifique por sus funciones constitucionales.

Para la Corte, la cosa juzgada de la Sentencia C-223 de 2017 es relativa, debido a que la Corte restringió el ámbito de su análisis de constitucionalidad al aspecto de reserva de ley estatutaria. En este caso, los cargos contra los artículos 53, 55 y 56 tienen que ver con aspectos distintos a la reserva de ley estatutaria. Respecto de esos tres artículos, los demandantes sostienen que se desconoce materialmente el derecho de reunión y manifestación pública y pacífica.

La providencia fija un estándar robusto para el control de restricciones administrativas a derechos fundamentales, precisando que toda limitación al derecho de reunión y manifestación (artículo 37 de la Constitución Política) y a la libertad personal (artículo 28 de la Constitución Política) debe estar claramente prevista en la ley, superar juicios de razonabilidad (intermedio o estricto, según el caso) y orientarse exclusivamente a fines protectores, no sancionatorios ni de “orden público” en abstracto. En particular: (i) el aviso previo es instrumento informativo, no permiso; (ii) la disolución exige estrictos criterios de necesidad y gravedad; (iii) las limitaciones de tiempo, modo y lugar (p. ej., en áreas protegidas) son válidas cuando no versan sobre el contenido del mensaje y salvaguardan bienes constitucionales superiores; (iv) la seguridad ciudadana corresponde a la Policía (naturaleza civil), vedándose la sustitución por Fuerzas Militares salvo supuestos excepcionales de garantía; y (v) toda privación transitoria de libertad por “traslado” debe contar con causales precisas, procedimientos y controles posteriores, y condiciones materiales que aseguren su finalidad protectora. El fallo, así, consolida un marco garantista para la gestión de la protesta y el uso de medios policivos, con especial atención a grupos en situación de especial protección.

- **Sentencia C-009 de 2018**

En la Sentencia C-009 de 2018, la Corte Constitucional resolvió demandas contra los artículos 53 a 57 de la Ley 1801 de 2016 por cargos formales y materiales. Ordenó estarse a lo resuelto en la sentencia C-223 de 2017 únicamente respecto del vicio de reserva de ley estatutaria (cosa juzgada formal por ese aspecto, con efectos diferidos), y reconoció cosa juzgada relativa frente al inciso final del artículo 53 por la sentencia C-281 de 2017 (disolución solo ante alteración grave e inminente y si no hay medida menos gravosa). Sobre los cargos materiales aún no resueltos, declaró: (i) exequible la cláusula “cualquier otro fin legítimo” del artículo 53, bajo un entendimiento conforme que excluye como fines no legítimos la propaganda de guerra, la apología del odio/violencia/delito, la pornografía infantil, la instigación pública y directa a cometer delitos y lo que el Legislador prohíba expresamente; (ii) exequible el aviso previo a la primera autoridad (escrito o por correo electrónico) como requisito meramente informativo y de coordinación, no habilitante, aplicable cuando la reunión/manifestación en espacio público aglomera un número significativo de personas o genera disrupción relevante; y (iii) exequible la expresión “salvo circunstancias excepcionales o de fuerza mayor” del artículo 54, condicionada a que toda negativa al uso temporal de vías esté motivada específica y puntualmente.

La providencia sistematiza estándares para el control de restricciones administrativas a los derechos de reunión y manifestación (artículo 37 de la Constitución Política), como manifestaciones de la libertad de expresión (artículo 20 de la Constitución Política): solo están protegidas las reuniones y manifestaciones pacíficas y con fines lícitos; toda limitación debe estar prevista en ley clara y previsible; las medidas neutrales de tiempo, modo y lugar se someten a un juicio de proporcionalidad (intermedio), mientras que las restricciones que incidan en el contenido del discurso activan exigencias estrictas (legalidad precisa, fines imperiosos, necesidad, neutralidad y prohibición de censura previa). El fallo precisa que el aviso no puede operar como permiso ni como filtro sustantivo del mensaje; que las manifestaciones espontáneas no constituyen per se alteración de la convivencia; y que la decisión administrativa sobre uso de vías solo puede restringirse por razones excepcionales debidamente justificadas, bajo el deber estatal de facilitar el ejercicio del derecho y de proteger simultáneamente los derechos de terceros y el orden público democrático.

### **1.3.2 Corte Suprema de Justicia**

- **Sentencia SL20094-2017 de la Sala de Casación Laboral**

En esta sentencia el Alto Tribunal estudió, en segunda instancia, la legalidad de la huelga adelantada por la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC) en las instalaciones de Avianca S.A., y reiteró que la jurisprudencia constitucional y ordinaria ha establecido dos criterios para determinar cuándo un servicio público es esencial, de conformidad con el artículo 56 de la Constitución de 1991: (i) el criterio formal, el cual dispone que el legislador, de forma exclusiva y restrictiva, debe definir un servicio público como esencial a través de una ley de la República; y (ii) el criterio material, el cual establece que deben efectuarse ciertas circunstancias que permitan concluir que en cada caso en particular se trata, efectivamente, de una actividad esencial o vital para la sociedad. Es decir, que el criterio material se cumple cuando la suspensión de un respectivo servicio público afecta “la salud, la vida y la seguridad de la población, dependiendo de las particularidades propias de cada contexto y sin importar si su alteración es parcial o si se produce un daño efectivo sobre esos derechos”.

En este sentido, la Sala de Casación Laboral determinó que el transporte aéreo de pasajeros constituye un servicio público esencial porque cumple con el criterio formal y el criterio material, así: (i) el Congreso de la República, mediante el artículo 68 de la Ley 336 de 1996, definió el modo de transporte aéreo como un servicio público esencial; y, (ii) en este momento, la suspensión del servicio público de transporte aéreo de pasajeros constituye un riesgo cierto para la salud, la vida y la seguridad de los ciudadanos, en razón a la importancia que ha adquirido ese servicio en la satisfacción de las necesidades esenciales de las personas.

## 2. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DEL PROYECTO DE ACUERDO

Como se mencionó en el acápite anterior, el artículo 37 de la Constitución Política consagra los derechos fundamentales a la reunión y a la manifestación pública y pacífica. Específicamente, este último derecho ha sido catalogado por la Corte Constitucional, como un mecanismo democrático que permite expresar las inconformidades de grupos sociales que no han sido escuchados institucionalmente y/o por la opinión pública<sup>2</sup>. Así, la Corte también ha explicado que la manifestación pública y pacífica busca irrumpir la cotidianidad, pero su ejercicio no puede paralizar el desarrollo normal de las actividades en comunidad. Lo anterior, en razón a que el derecho a la manifestación pública y pacífica no anula los derechos fundamentales de los demás, a pesar de que momentáneamente sus efectos sí pueden limitar los derechos de quienes no participan en la manifestación<sup>3</sup>.

La Corte Constitucional también ha advertido que el ordenamiento jurídico no protege manifestaciones públicas que se realicen de forma violenta o cuando su objetivo sea cometer delitos<sup>4</sup>. Por este motivo, las autoridades deben permitir y proteger el desarrollo de las manifestaciones públicas y pacíficas, y a su vez garantizar los derechos fundamentales de los demás y el orden público y social. En este sentido, las entidades estatales deben conciliar, por un lado, el libre ejercicio del derecho a manifestarse pacíficamente y los derechos fundamentales de los demás y, por otro lado, el libre ejercicio del derecho a manifestarse pacíficamente y el orden público y social.

Esto cobra mayor relevancia, si se tiene en cuenta los efectos que tienen las manifestaciones pacíficas y violentas sobre la prestación de servicios públicos, como el transporte público masivo. En efecto, como lo dispone el artículo 365 de la Constitución Política, los servicios públicos son inherentes a la finalidad social de Estado, y que aquel tiene el deber de asegurar su prestación eficiente a todos sus habitantes. Lo anterior, debido a que la adecuada prestación de los servicios públicos constituye un mecanismo para proteger y garantizar la ejecución de los derechos fundamentales<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> Corte Constitucional. Sentencia C – 009 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

<sup>3</sup> Corte Constitucional. Sentencia C – 009 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

<sup>4</sup> Corte Constitucional. Sentencia C – 009 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

<sup>5</sup> Corte Constitucional. Sentencia SU – 1010 de 2018. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

Por eso, en el ámbito del sector transporte, el artículo 5º de la Ley 336 de 1996 (Estatuto General de Transporte) establece que la operación de las empresas de transporte público constituye un servicio público esencial que implica la prelación del interés general sobre el particular, especialmente, respecto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios. Igualmente, el artículo 56 de la Ley 336 de 1996 dispone que el modo de transporte terrestre automotor es un servicio público esencial. Además, la Corte Constitucional ha sostenido que las actividades de las empresas de transporte terrestre constituyen la prestación de un servicio público esencial, pues están dirigidas a garantizar el derecho fundamental a la libre circulación<sup>6</sup>, y pueden ser un mecanismo idóneo para asegurar otros derechos fundamentales, como la vida<sup>7</sup>, la salud<sup>8</sup>, la educación<sup>9</sup> y el trabajo<sup>10</sup>.

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se evidenciará que las autoridades distritales y nacionales, deben asegurar el ejercicio del derecho fundamental a la manifestación pública y pacífica, pero también los derechos fundamentales a la salud, la educación, el trabajo y la libre circulación de los demás ciudadanos, los cuales en muchas ocasiones se ven anulados por las graves afectaciones en la prestación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, como consecuencia de la obstrucción y paralización permanente que se presenta contra este servicio durante manifestaciones pacíficas, manifestaciones pacíficas que se tornan violentas o manifestaciones violentas.

Para tales efectos, se seguirá el siguiente orden: **(2.1.)** se demostrará que el SITP presta un servicio público esencial que garantiza los derechos fundamentales de los ciudadanos; **(2.2.)** se analizarán las manifestaciones pacíficas y violentas que se presentan en Bogotá, y sus efectos en la prestación del SITP; y **(2.3)** se evidenciará la necesidad de establecer mediante un acuerdo distrital, unos principios y lineamientos que compilen las normas vigentes y la jurisprudencia pertinente, sobre la armonía que debe existir entre el ejercicio del derecho fundamental a la manifestación pública y pacífica, y el orden público y el ejercicio de los derechos fundamentales de los demás ciudadanos que se materializan con la adecuada prestación del servicio público de transporte masivo.

<sup>6</sup> Constitución Política. Artículo 24: “Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia”.

<sup>7</sup> Constitución Política. Artículo 11: “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”.

<sup>8</sup> Constitución Política. Artículo 49: “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. (...)”.

Corte Constitucional. Sentencia SU – 124 de 2018: “(...) la Corte afirmó que la salud es un derecho fundamental autónomo e irrenunciable que protege múltiples ámbitos de la vida humana”.

<sup>9</sup> Constitución Política. Artículo 27: “El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra”.

Constitución Política. Artículo 67: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. (...)”.

<sup>10</sup> Constitución Política. Artículo 25: “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.

**2.1 El SITP presta un servicio público esencial que garantiza los derechos fundamentales de los ciudadanos**

De acuerdo con la Encuesta Bogotá Cómo Vamos (2024), el año pasado, el 39% de los habitantes de la capital se movilizaron en buses troncales del SITP, el 14.3% en buses zonales del SITP, el 11% en bicicleta y el 6.7% a pie. En otras palabras, esto significa que más de la mitad de los ciudadanos se movilizaron en transporte público masivo (53,3%) para sus actividades diarias, y el 71% de los ciudadanos en medios de transporte sostenible (esto es, transporte público, bicicleta y a pie).

Según Transmilenio<sup>11</sup>, a agosto de 2024, el SITP contaba con 114.4 km de vía troncal y más de 10 mil buses (2.192 buses troncales y 8.380 buses zonales), los buses zonales recorrían 2.330 km, y se hacían más de 4 millones de viajes al día (2.035.862 de viajes en troncales y 2.079.572 de viajes en zonales). Igualmente, el sistema tenía en su componente troncal 97 rutas troncales y 10 rutas duales, y en su componente zonal 274 rutas urbanas, 183 rutas de alimentación y 10 rutas especiales. También frente al servicio de cable, el sistema contaba con 163 cabinas, se hacían 24.372 viajes al día y se recorrían 3.5 km de vía. Asimismo, el sistema tenía 21 bici estaciones y 7.051 cupos de ciclo parqueados.

De tal forma, es claro que el SITP presta un servicio público esencial que garantiza los derechos fundamentales a la libre circulación, la salud, la educación y el trabajo de más del 50% de la población de Bogotá.

**2.2 Las manifestaciones pacíficas y violentas que se presentan en Bogotá, y sus efectos en la prestación del servicio del SITP**

Respecto a las manifestaciones públicas a nivel nacional, Bogotá es un caso especial. De acuerdo con cifras de este año de la Policía Nacional<sup>12</sup>, la participación de la capital en el total de manifestaciones públicas a nivel nacional refleja la magnitud del fenómeno y su peso dentro del contexto nacional. Entre 2019 y 2024, la proporción de manifestaciones ocurridas en Bogotá osciló entre 19,8% y 52,9%:

AÑO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MANIFESTACIONES PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL TOTAL	1278	2868	15975	4141	4000	5030	2441
BOGOTÁ	253	871	3308	2192	1310	1084	489
% PARTICIPACIÓN BOGOTÁ	19,8%	30,4%	20,7%	52,9%	32,8%	21,6%	20,0%

Tabla: elaboración propia

<sup>11</sup> Presentación de TransMilenio S.A. al debate de control político de la Proposición 749. Fecha: 16 agosto de 2024.

<sup>12</sup> Respuesta a petición del 8 de julio de 2025 que se cita en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley Estatutaria 021 de 2025 Cámara. Gaceta del Congreso No. 1211 del 25 de julio de 2025.

Como se mencionó anteriormente, las manifestaciones públicas buscan irrumpir la cotidianidad e incidir y generar impactos sobre el espacio público, lo cual incluye vías, parques, plazas, entre otras. Específicamente, respecto a la movilidad de la ciudad, la Secretaría Distrital de Gobierno estimó que 8 de cada 10 manifestaciones producen afectaciones a la movilidad por bloqueos de vías<sup>13</sup>.

Igualmente, con sustento en el Sistema Distrital de Monitoreo y Seguimiento<sup>14</sup>, esta entidad reportó 6.836 casos de manifestaciones públicas entre el 11 de marzo de 2021 y el 31 de mayo de 2025, de los cuales el 80% aproximadamente generó algún tipo de afectación sobre las vías, ya fuera de forma intencionada o como un efecto secundario al desarrollo de la manifestación. Además, en 216 casos de los 6.836 eventos de manifestaciones reportadas (esto es, 3,15%), los bloqueos de vías fueron realizados de manera intencionada por parte de los manifestantes.

Bajo esta misma línea, según información de TransMilenio<sup>15</sup>, a agosto de 2025 se registraron 751 protestas, contingencias y disturbios en diferentes puntos de la ciudad, especialmente en zonas aledañas a campus universitarios. Esta cifra supera en más de 300 eventos los registros de 2024, lo cual refleja una tendencia creciente de afectación al sistema. Asimismo, mientras al 12 de octubre de 2024 se registraron 527 eventos que impactaron al sistema, en el mismo periodo en 2025 se reportaron 890, es decir, 363 más<sup>16</sup>.

TransMilenio también alertó que, entre 2020 y abril de 2023, se registraron 786 casos de vandalismo contra la infraestructura del sistema, con pérdidas acumuladas cercanas a 17.000 millones de pesos<sup>17</sup>. El año 2021 fue el de mayor impacto económico, con 16.000 millones de pesos en daños, seguido de 2020 con 864 millones, 2022 con 723 millones y 2023 con 107 millones. Por su parte, en 2024, la entidad reportó 124 buses troncales y 135 buses de alimentación vandalizados, y que el costo de reparación de la flota fue de 514 millones entre 2023-2024<sup>18</sup>.

Según TransMilenio, entre enero de 2020 y junio de 2025, se identificaron 219 días afectados, con una pérdida estimada de 51,2 millones de validaciones y un ingreso no percibido de aproximadamente 105 mil millones de pesos, como consecuencia de las limitaciones en la prestación del servicio generadas por manifestaciones sociales<sup>19</sup>. También la entidad advirtió que, entre el 28 de julio de 2024 al 16 de junio de 2025, 10.598.427 usuarios se han visto afectados en el componente zonal del sistema por manifestaciones.

<sup>13</sup> Respuesta de la Secretaría Distrital de Gobierno del 20 de junio de 2025 a la Proposición No. 782 de 2025 del Concejo de Bogotá D.C.

<sup>14</sup> Ibidem.

<sup>15</sup> Información disponible en: <https://www.eltiempo.com/bogota/transmilenio-en-jaque-la-vulnerabilidad-del-sistema-masivo-se-evidencia-con-751-contingencias-en-2025-3486311>

<sup>16</sup> Información disponible en: <https://www.eltiempo.com/bogota/por-que-las-protestas-se-han-vuelto-sistematicas-en-bogota-van-casi-1-500-este-ano-muchas-terminan-en-disturbios-y-afectando-comercio-y-transporte-3500865>

<sup>17</sup> Información disponible en: <https://www.eltiempo.com/bogota/el-millonario-coste-del-vandalismo-en-el-transmilenio-de-bogota-quien-paga-por-estos-danos-3353888>

<sup>18</sup> Información disponible en: <https://www.eltiempo.com/bogota/el-millonario-coste-del-vandalismo-en-el-transmilenio-de-bogota-quien-paga-por-estos-danos-3353888>

<sup>19</sup> Respuesta de TransMilenio del 24 de junio de 2025 a la Proposición No. 782 de 2025 del Concejo de Bogotá D.C.



En este sentido, se evidencia que las manifestaciones públicas —ya sean pacíficas o violentas— tienen graves efectos sobre la adecuada prestación del SITP, lo cual tiene un efecto directo en el ejercicio de los derechos fundamentales a la libre circulación, la salud, la educación y el trabajo de más del 50% de la población de la ciudad. Además, estas cifras también demuestran que hay una grave afectación sobre la seguridad del sistema que pone en riesgo la seguridad de los usuarios, los manifestantes y los demás ciudadanos, como consecuencia de las manifestaciones pacíficas que se tornan violentas y las manifestaciones violentas que desestabilizan el orden público y social de la ciudad.

### **2.3 Necesidad de un acuerdo distrital que compile las normas y la jurisprudencia sobre el equilibrio que debe existir entre el ejercicio del derecho fundamental a la manifestación pública y pacífica, y el orden público y el ejercicio de los derechos fundamentales de los demás ciudadanos que se materializan con la adecuada prestación del SITP de Bogotá**

De acuerdo con lo expuesto en este acápite, se evidencia la necesidad de que las autoridades distritales y nacionales, aseguren el ejercicio del derecho fundamental a la manifestación pública y pacífica, pero también los derechos fundamentales a la salud, la educación, el trabajo y la libre circulación de los demás ciudadanos, los cuales en muchas ocasiones se ven anulados por las graves afectaciones en la prestación del SITP, como consecuencia de la obstrucción y paralización permanente que se presenta contra este servicio durante manifestaciones pacíficas y violentas. También se evidencia la necesidad de que estas entidades garanticen la seguridad del sistema que se afecta gravemente durante las manifestaciones violentas, que ponen en riesgo la seguridad de los manifestantes, los usuarios y los demás ciudadanos, y desestabilizan el orden público y social de la ciudad.

Por estas razones, es necesario expedir el Proyecto de Acuerdo que se propone en este escrito, el cual tiene por objeto compilar las normas vigentes y la jurisprudencia pertinente, sobre el equilibrio que debe existir entre el ejercicio del derecho fundamental a la manifestación pública y pacífica, y el orden público y el ejercicio de los derechos fundamentales de los demás ciudadanos, que se materializan con la adecuada prestación del servicio público esencial del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá.

## **3. RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)**

Este Proyecto de Acuerdo se alinea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, particularmente con los ODS 11, 16 y 8, al establecer lineamientos para garantizar la prestación continua, segura y accesible del servicio de transporte público masivo durante manifestaciones sociales.

En primer lugar, el proyecto contribuye directamente al ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles<sup>20</sup>, al fortalecer la capacidad institucional y operativa del Distrito para mantener la movilidad urbana en condiciones de seguridad y accesibilidad, incluso en contextos de emergencia o conflicto social (ONU, 2025). La continuidad del transporte público garantiza que la ciudadanía, especialmente quienes dependen de este servicio para acceder al trabajo, la educación o la salud, pueda ejercer su derecho a la movilidad en entornos urbanos resilientes y equitativos.

Asimismo, la iniciativa se articula con el ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas<sup>21</sup>, pues este objetivo promueve el fortalecimiento del ejercicio de derechos como la libertad de expresión y, por ende, los derechos de reunión y manifestación pública y pacífica. En todo caso, el acceso igualitario a la justicia, resolver disputas y garantizar que el ejercicio de estos derechos constitucionales no resulte en afectaciones desproporcionadas a derechos de igual rango constitucional, resulta relevante para la materialización del Estado Social de Derecho.

Esto, mediante la promoción de mecanismos de coordinación interinstitucional, gestión preventiva y protocolos de actuación que reduzcan los riesgos de confrontación y protejan tanto a los usuarios y trabajadores del SITP, como a las personas que ejercitan estos derechos fundamentales, pues el fortalecimiento del dialogo y el uso proporcional de la fuerza en el marco de las manifestaciones públicas, tiene como finalidad encontrar soluciones duraderas a los conflictos, menor arbitrariedad, abuso de poder y mayor capacidad para prestar servicios públicos para todos.

Por último, el Proyecto de Acuerdo se vincula con el ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico<sup>22</sup>, al buscar evitar la configuración de afectaciones económicas derivadas de la obstrucción y la paralización violenta del servicio público esencial de transporte masivo. La continuidad operativa, acompañada de medidas de seguridad y apoyo logístico, contribuye a la estabilidad laboral y a la reactivación económica en sectores que dependen de la movilidad urbana.

En conjunto, esta iniciativa promueve una ciudad más segura, accesible, resiliente, integrada e inclusiva, donde la movilización pública y pacífica se garantiza como un derecho esencial y un componente estratégico del bienestar ciudadano, incluso en escenarios de tensión social o emergencia.

---

<sup>20</sup> ONU. (2025). “Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles”. Información disponible en: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/>

<sup>21</sup> ONU. (2025). “Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas”. Información disponible en: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/>

<sup>22</sup> ONU. (2023). “Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos”. Información disponible en: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/>

#### 4. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

Este Concejo es competente para expedir la presente iniciativa de conformidad con lo establecido en la siguiente normatividad:

- **Constitución Política:** el artículo 313 establece como funciones a cargo de los concejos, entre otras, las siguientes: reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio (numeral 1); y las demás que la Constitución y la ley le asignen (numeral 10).
- **Decreto Ley 1421 de 1993** “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá”: el artículo 12 establece como atribuciones que le corresponden al Concejo de Bogotá, entre otras, las siguientes: dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito (numeral 1); dictar normas de tránsito y transporte (numeral 19); y cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes (numeral 25).

#### 5. ANÁLISIS DE IMPACTO FISCAL

La Ley 819 de 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones” en su artículo 7 establece:

ANÁLISIS DEL IMPACTO FISCAL DE LAS NORMAS. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cualquier tiempo durante el respectivo trámite en el Congreso de la República, deberá rendir su concepto frente a la consistencia de lo dispuesto en el inciso anterior. En ningún caso este concepto podrá ir en contravía del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este informe será publicado en la Gaceta del Congreso.

Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental, que planteen un gasto adicional o una reducción de ingresos, deberá contener la correspondiente fuente sustitutiva por disminución de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En las entidades territoriales, el trámite previsto en el inciso anterior será surtido ante la respectiva Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces.

Esta iniciativa **no tiene un impacto fiscal** por cuanto no implica la apropiación de recursos adicionales a los sectores y entidades responsables de su implementación.

Además, el Proyecto de Acuerdo se articula de manera directa con una meta de producto establecida en el Plan Distrital de Desarrollo 2024 – 2027, bajo el programa 1.06 “Movilidad segura e inclusiva”. En particular, la meta 46 establece “diseñar e implementar un plan interinstitucional para la seguridad integral del Sistema de Transporte Público en Bogotá”, orientado a mitigar los fenómenos que afectan la seguridad y convivencia en el SITP. Esta meta refuerza el compromiso distrital con una movilidad segura, articulada, resiliente e inclusiva, y constituye un punto de referencia clave para el presente Proyecto de Acuerdo, al compartir el propósito de garantizar la prestación adecuada del servicio público de transporte masivo, el ejercicio del derecho a la manifestación pública y pacífica y el ejercicio de los derechos fundamentales a la libre circulación, la salud, el trabajo y la educación de los usuarios del sistema,

## 6. PROYECTO DE ARTICULADO

**PROYECTO DE ACUERDO No 972 DE 2025****PRIMER DEBATE**

**“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS PARA EL EQUILIBRIO ENTRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA MANIFESTACIÓN PÚBLICA Y PACÍFICA, Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS USUARIOS DEL SITP DE BOGOTÁ Y LA ESTABILIZACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”**

**EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.**

En ejercicio de las facultades que le confiere los numerales 1 y 10 del artículo 313 de la Constitución Política de Colombia y los numerales 1, 19 y 25 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993

**ACUERDA:**

**Artículo 1. Objeto.** El presente acuerdo tiene por objeto compilar, mediante principios y lineamientos, las normas vigentes y la jurisprudencia pertinente, sobre el equilibrio que debe existir entre el ejercicio del derecho fundamental a la manifestación pública y pacífica, y el orden público y el ejercicio de los derechos fundamentales de los demás ciudadanos, los cuales se materializan a través de la adecuada prestación del servicio público esencial del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá.

**Parágrafo.** Para los efectos de este acuerdo, la obstrucción y la paralización violenta del servicio público esencial de transporte masivo del SITP de Bogotá, constituye una violación a los derechos fundamentales de los usuarios y deberá ser restablecido oportunamente por las entidades distritales. Las entidades nacionales propenderán por restablecer la prestación de este servicio de forma coordinada, articulada y oportuna con las entidades distritales.

**Artículo 2. Principios.** La implementación, seguimiento y evaluación de los lineamientos a que se refiere el artículo anterior, se regirán por los principios establecidos en el numeral V. del “Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación, inclusive de quienes no participan en la protesta pacífica” contenido en la Resolución 1190 del 2018 del Ministerio del Interior, en el artículo 2° del Decreto Distrital 053 de 2023, en las normas que hagan sus veces y por los siguientes principios:

**Acceso al transporte.** Durante las acciones previas, concomitantes y posteriores a las manifestaciones sociales, el usuario del SITP de Bogotá podrá transportarse mediante el medio y modo que escoja en buenas condiciones de acceso, comodidad, calidad y seguridad.

**Del carácter de servicio público esencial del transporte público masivo.** La operación del transporte público a través del SITP es un servicio público esencial bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesaria para su adecuada prestación en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad.

**Coordinación armónica.** Las entidades del orden nacional y distrital propenderán por actuar de forma coordinada y articulada para asegurar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, mediante el respeto al derecho fundamental a la manifestación pública y pacífica de quienes participen en esta y a los derechos fundamentales a la libre circulación, la salud, la educación, el trabajo y otros de los usuarios del SITP de Bogotá, así como a través de la adecuada prestación del servicio público de transporte masivo y del restablecimiento del orden público y social en la ciudad.

**Celeridad.** Las acciones derivadas de la aplicación de los lineamientos a los que hace referencia este acuerdo deberán realizarse en condiciones de oportunidad y pertinencia, con el fin de asegurar el ejercicio de los derechos fundamentales de quienes participan en las manifestaciones pacíficas y de los usuarios del SITP de Bogotá, y restablecer el orden público y social en la ciudad.

**Artículo 3. Lineamientos.** La Administración Distrital y las entidades del orden nacional propenderán por que las acciones que adelanten para conciliar el ejercicio del derecho fundamental a la manifestación pública y pacífica, y el ejercicio de los derechos fundamentales de los usuarios del SITP y el restablecimiento del orden público y social, se orienten por los siguientes lineamientos:

**Coordinación y articulación entre derechos fundamentales de los manifestantes y de los usuarios del SITP y el orden público y social.** Durante las acciones previas, concomitantes y posteriores a las manifestaciones sociales, las entidades del orden nacional y distrital deberán coordinar sus capacidades institucionales para garantizar el equilibrio que debe existir entre el ejercicio del derecho fundamental a la manifestación pública y pacífica, y el ejercicio de los de los derechos fundamentales de los usuarios del SITP y la estabilización del orden público y social.

**Coordinación y articulación para garantizar la prestación adecuada del servicio del SITP de Bogotá.**

Durante las acciones previas, concomitantes y posteriores a las manifestaciones sociales, las entidades del orden nacional y distrital deberán coordinar sus capacidades institucionales para garantizar la prestación adecuada y oportuna del servicio público esencial del transporte masivo del SITP de Bogotá.

**Artículo 4. Reglamentación.** La Administración Distrital reglamentará, en un término no superior a seis (6) meses, el Protocolo para la coordinación de las acciones que permitan el equilibrio entre el ejercicio del derecho fundamental a la manifestación pública y pacífica, y la estabilización del orden público y social, y el ejercicio de los derechos fundamentales de los demás ciudadanos que se materializan a través de la adecuada prestación del servicio público esencial del SITP de Bogotá.

**Artículo 5. Salvaguarda de reserva de ley.** Los principios y lineamientos que se adoptan mediante este acuerdo, no modifican norma alguna de rango superior ni constituyen una regulación que niegue, restrinja o menoscabe el núcleo esencial de los derechos fundamentales a la reunión y a la manifestación pública y pacífica, sino que compilan las normas vigentes y la jurisprudencia pertinente, respetando el marco de competencias y autonomía de las distintas entidades.

**Artículo 6. Vigencia.** El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

**PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Cordialmente,

**JUAN DAVID QUINTERO RUBIO**  
**Concejal de Bogotá D.C.**

**PROYECTO DE ACUERDO No 973 DE 2025****PRIMER DEBATE****PROYECTO DE ACUERDO No. 973 DE 2025****“POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS BAJO LOS CUALES SE PLANEARÁ Y EJECUTARÁ EL PROGRAMA DE CULTURA METRO DE BOGOTÁ”****EXPOSICIÓN DE MOTIVOS****I. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO**

El presente proyecto de acuerdo tiene como objeto establecer los lineamientos bajo los cuales la Empresa Metro de Bogotá planeará y ejecutará el programa de cultura ciudadana del Metro de Bogotá.

**II. MARCO JURÍDICO DE LA INICIATIVA**

El presente proyecto de acuerdo se regirá por el siguiente marco constitucional y legal:

<b>CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Artículo 1</b> de la Constitución Política: Establece a Colombia como un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana y la solidaridad.</li><li>• <b>Artículo 2:</b> Define como fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan.</li><li>• <b>Artículos 70 y 71:</b> Consagran el deber del Estado de promover y fomentar el acceso a la cultura y la libertad en la búsqueda del conocimiento y la expresión artística.</li><li>• <b>Artículos 79 y 80:</b> Garantizan el derecho a un ambiente sano y establecen la obligación del Estado de planificar el manejo de</li></ul>
--	---



	<p>los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Artículo 82:</b> Determina la protección del espacio público y su destinación al uso común, prevaleciendo sobre el interés particular.</li><li>• <b>Artículo 366:</b> Establece el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida como finalidades sociales del Estado.</li></ul>
<b>MARCO LEGAL NACIONAL EN MATERIA DE MOVILIDAD</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Ley 86 de 1989:</b> Establece las normas sobre sistemas de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros y los mecanismos para su financiación.</li><li>• <b>Ley 310 de 1996:</b> Por medio de la cual se modifica la Ley 86 de 1989, en lo que respecta a la cofinanciación de sus sistemas de transporte</li><li>• <b>Ley 336 de 1996</b> Por medio de la cual se adopta el estatuto nacional de transporte, definiendo los principios y la regulación del transporte público, incluyendo criterios de calidad y seguridad.</li><li>• <b>Ley 1083 de 2006:</b> Por medio de la cual se establecen algunas normas sobre la planeación urbana sostenible. Estableciendo normas sobre planeación urbana sostenible y promueve la implementación de modos alternativos de transporte.</li><li>• <b>Ley 1682 de 2013</b> Ley de infraestructura de transporte. Define el marco para el desarrollo de la infraestructura de transporte en Colombia.</li></ul>

<b>MARCO LEGAL NACIONAL EN MATERIA DE CULTURA CIUDADANA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Ley 397 de 1997</b> (Ley General de Cultura): Establece los lineamientos para el desarrollo cultural y el acceso de todos los colombianos a la cultura.</li><li>• <b>Ley 1185 de 2008</b>: Modifica la Ley General de Cultura, estableciendo mecanismos para la protección del patrimonio cultural material e inmaterial.</li><li>• <b>Ley 1801 de 2016</b>. Por el cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia: Establece normas de convivencia ciudadana que incluyen el uso adecuado del espacio público y el transporte.</li><li>• <b>Ley 2262 de 2022</b>. Por medio de la cual se establecen los parámetros generales para la creación de la política pública de cultura ciudadana en Colombia y se dictan otras disposiciones”</li></ul>
<b>MARCO LEGAL DISTRITAL</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Acuerdo 609 de 2015</b>: “<i>Por el cual se crea la red distrital de cultura ciudadana y democrática de Bogotá.</i>” Estableciendo los lineamientos de la política pública de cultura ciudadana para Bogotá, con énfasis en la convivencia, el respeto por el espacio público y la apropiación de lo público.</li></ul>

- **Acuerdo 642 de 2016:** “Por el cual se autoriza al Alcalde Mayor en representación del Distrito Capital para participar, conjuntamente con otras entidades descentralizadas del orden Distrital, en la constitución de la Empresa Metro de Bogotá S.A., se modifican parcialmente los Acuerdos Distritales [118](#) de 2003 y [257](#) de 2006, se autorizan compromisos presupuestales y se dictan otras disposiciones en relación con el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá”

- **Acuerdo 927 de 2024.** Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del distrito 2024-2027 “Bogotá camina segura”

**-8.5. Programa 5. Espacio público seguro e inclusivo.**

**-Artículo 188. Recuperación y aprovechamiento “bajo puentes”.** La Administración Distrital, la Secretaría de Gobierno, el DADEP, IDU y las alcaldías locales, en coordinación con las demás entidades correspondientes en el marco de sus competencias, implementarán intervenciones para la recuperación y aprovechamiento económico del espacio público debajo de los puentes vehiculares en el Distrito Capital, con el fin de

	transformarlos en espacios destinados a la cultura, la seguridad, la convivencia ciudadana y al comercio.
--	---

### III. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

- El Concejo de Bogotá es competente para presentar la iniciativa de conformidad con el artículo 313, numeral 1° de la **Constitución Política de Colombia**, a saber:

**Artículo 313.** *Corresponde a los concejos:*

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio.

- Igualmente, de acuerdo con el artículo 8 y el artículo 12; numerales 1° y 3° (Decreto Ley 1421 de 1993), el Concejo de Bogotá es competente para presentar, discutir y someter a votación la presente iniciativa.

**ARTÍCULO 8. Funciones Generales.** *El Concejo es la suprema autoridad del Distrito Capital. En materia administrativa sus atribuciones son de carácter normativo. También le corresponde vigilar y controlar la gestión que cumpla las autoridades distritales.*

**ARTÍCULO 12. Atribuciones.** *Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la constitución y la ley:*

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

### IV. IMPACTO FISCAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003, el presente Proyecto de Acuerdo tiene un impacto fiscal sobre los ingresos tributarios distritales, sin representar cargas sobre el gasto público. Sin embargo, es importante el pronunciamiento de la Secretaría Distrital de Hacienda previo a su discusión con el fin de conocer el respectivo concepto de viabilidad que debe emitir como entidad asesora del Concejo de Bogotá, según lo dispuesto en el artículo 11, literal F del Decreto Distrital 601 de 2014, presentando las fuentes de recursos y gastos para su implementación, en el caso de que este genere impacto fiscal. Sin embargo, se evoca el contenido de la Sentencia C-911 de 2007 de la Corte Constitucional, en donde manifiesta que el impacto fiscal de las normas no puede convertirse en impedimento para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa. Al respecto:

“Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la actividad legislativa del Congreso de la República conducirían a concederle una forma de poder de veto al Ministro de Hacienda sobre las iniciativas de ley en el Parlamento. (...), es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del ministro de Hacienda

Frente a lo anterior, es necesario adicionar que para la presente propuesta se halla sustento jurídico en el Plan de Desarrollo, Acuerdo 927 de 2024, programa 5. Espacio Público seguro e inclusivo. Relacionado a la recuperación del espacio público desde diferentes acciones interinstitucionales, como de cultura, desarrollo económico entre otro.

A lo que finalmente cabe adicionar, los artículos 131 y 132 de la misma norma, que hablan de las Fuentes de Financiación de la Empresa Metro de Bogotá S.A y el patrimonio de la entidad.

## **V. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO**

Es un hecho notorio que Bogotá se halla en un proceso de transición a un nuevo modelo de movilidad el cual es el Metro de Bogotá, proyecto de impacto Distrital que llevará a transformar la vida de los capitalinos en términos de movilidad, más cuando al analizar a esta ciudad en cifras, Bogotá tiene un promedio de viajes en transporte público de 79 minutos<sup>23</sup>, solo el 13,5%<sup>24</sup> de flotas del sistema integrado de transporte público son eléctricas, además de contar con un paulatino incremento en la demanda del servicio de transporte público del 4,63% por año. Lo anterior ha llevado a replantearse a esta ciudad no solo en términos de movilidad, sino a ver este hecho desde otras posiciones, tales como el urbanismo, la seguridad, la psicología social y/ la cultura ciudadana. Perspectivas que permiten construir ciudad desde otros ámbitos y que puntualmente, a través de este nuevo fenómeno permita crear una identidad común para los habitantes de esta ciudad que dé lugar a sentidos de pertenencia, apropiación, solución de conflictos de forma pacífica y vivir dentro de esta ciudad en una buena convivencia.

---

<sup>23</sup> Cifra del año 2023, tomada de: <https://observatorio.movilidadbogota.gov.co/>

<sup>24</sup> Tomado de: <https://observatorio.movilidadbogota.gov.co/movilidad-en-cifras>

Lo anterior como consecuencia de cifras tales como la encuesta de satisfacción de la ciudadanía de vivir en Bogotá, en donde todavía persisten estadísticas de insatisfacción y de un sentido de indiferencia que resultan un tanto preocupantes, ubicándose estas en un promedio del 51,15 %<sup>25</sup> en los últimos tres años, demostrando de esta manera un desinterés de la población habitante de esta ciudad por el bien común y en consecuencia por la misma ciudad en la que habita.

Ahora, en términos de analizar el comportamiento de los Bogotanos en reglas básicas de convivencia, al acudir a fuentes como la secretaria de la Seguridad (2025) se halla que frente a comparativos realizados con años anteriores en meses como febrero del 2025 versus febrero 2024, se halla un incremento en la presencia de riñas en 2.888 casos, es decir un 4,86%, contando con un total a hoy de 62.288<sup>26</sup>. A lo que se auna, que, si bien es cierto que se ha disminuido el porcentaje de casos de medidas correctivas por colados en el transporte público en un 50,46%<sup>27</sup>, aun sigue habiendo una cifra alta de casos sobre esta conducta, ascendiendo al mes de febrero de 2025 a 11.897<sup>28</sup>. Lo anterior ha demostrado todavía una ausencia de sentido de apropiación, pertenencia, cuidado por lo público y buena convivencia de esta ciudad que denota la necesidad de implementar estrategias de intervención psicosocial en la población bogotana que permitan una modificación de la conducta colectiva hacia la asimilación de estos valores en la población de esta ciudad.

Es de esta manera que al hallarnos frente a un avance del 50%<sup>29</sup> en esta obra de gran magnitud, nos hallamos como ciudad en la necesidad de buscar una forma de proteger esta nueva iniciativa desde incluso antes de su implementación, pues de acuerdo a la alcaldía mayor de Bogotá (2022), el uso del transporte público de esta ciudad a implicado la acometida de determinadas conductas, entre las cuales se hallan: 1) evasión del pasaje, 2) ventas ilegales de pasajes, 3) comprar el pasaje en sitios no autorizados, 4) la vandalización del medio de transporte, 4) bloquear las puertas y 5) las ventas informales.<sup>30</sup>

<sup>25</sup> Promedio que se pondero a partir de las cifras dadas por Bogotá como vamos:

<http://bogotacomovamos.org/wp-content/uploads/2024/12/Encuesta-de-Percepcion-Ciudadana-2024-presentacion.pdf>

<sup>26</sup> Tomado de: [https://scj.gov.co/sites/default/files/documentos\\_oaiee/boletines\\_bog\\_2025\\_02.pdf](https://scj.gov.co/sites/default/files/documentos_oaiee/boletines_bog_2025_02.pdf)

<sup>27</sup> Tomado de: [https://scj.gov.co/sites/default/files/documentos\\_oaiee/boletines\\_bog\\_2025\\_02.pdf](https://scj.gov.co/sites/default/files/documentos_oaiee/boletines_bog_2025_02.pdf)

<sup>28</sup> Tomado de: [https://scj.gov.co/sites/default/files/documentos\\_oaiee/boletines\\_bog\\_2025\\_02.pdf](https://scj.gov.co/sites/default/files/documentos_oaiee/boletines_bog_2025_02.pdf)

<sup>29</sup> Tomado de: <https://www.metrodebogota.gov.co/noticias/aqui-si-pasa-las-obras-del-metro-bogota-llegaron-al-50-ejecucion>

<sup>30</sup> Tomado de: <http://bogota.gov.co/mi-ciudad/movilidad/transmilenio-conductas-inapropiadas-contrarias-la-convivencia>

Sobre problemáticas puntuales como las ventas informales, según el Instituto para la Economía Social (IPES) (2022), dos mil **(2000)** vendedores se encontraban trabajando al interior del servicio masivo de transporte-Transmilenio. Encontrando de esta manera una inapropiada invasión del espacio público que lleva a la proliferación de otras conductas que consecuentemente acarrearán el perder un sentido de pertenencia y apropiación por nuestro entorno.

Conductas que es necesario combatir antes de la implementación de nuestro nuevo modelo de movilidad a través de como ya se hizo mención, estrategias de intervención en psicología social, que no solo permitan un buen comportamiento dentro de este entorno, sino que permitan difundir dicha información y replicar estas conductas a lo largo de nuestra ciudad, para así desarrollar un entorno de sana convivencia y de buenos principios, radicando estas estrategias en lo que se denominará Cultura ciudadana del metro de Bogotá.

## **VI. ALCANCES DE LA INICIATIVA Y DEMÁS CONSIDERACIONES DEL AUTOR**

La implementación del metro como nueva propuesta de movilidad de Bogotá ha sido una propuesta con gran impacto para la capital del país, no solo transformando en su totalidad el entorno de esta ciudad a través de tácticas de acupuntura urbana, sino que también la influencia del presente proyecto lleva a que su impacto se de manera multisectorial y de incidencia en otros ámbitos, entre estos el de cultura, en donde este espacio buscará una línea de construcción de cultura ciudadana a partir de un hecho de impacto en la ciudad que permita difundir una identidad, valores y principios comunes a la Capital de Colombia. Lo anterior llevando a que el metro de Bogotá sea ese punto focal de dispersión de estos, dado su impacto y su transversal recorrido a lo largo de esta urbe. Por lo anterior resulta necesario determinar el alcance de este proyecto.

### **6.1. OBJETIVO DEL PROYECTO DE ACUERDO**

En el marco de cumplimiento de las funciones deferidas por el Concejo de Bogotá a la empresa metro de Bogotá, esta última planeará e implementará el programa de cultura ciudadana del metro de Bogotá, a través del cual se busque crear una línea base de creación de identidad mancomunada a los ciudadanos de Bogotá D.C., para así lograr la construcción de principios y valores comunes entre los Bogotanos que den lugar a un sentido de apropiación, pertenencia, respeto por el espacio pública, amor por la cultura entre otros sentires.

## **6.2. POBLACIÓN OBJETIVO**

La implementación de las estrategias dispuestas por la cultura metro de Bogotá van destinadas a todos los usuarios que harán uso de este medio de transporte en la ciudad de Bogotá, tanto habitantes de la ciudad capitalina como población flotante que constantemente transita esta ciudad, además de quienes deseen gestionar la explotación de sus actividades económicas en dicho espacio. Contemplando un enfoque multisectorial, diferencial y de género.

## **6.3. DE LA VISIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO: PERSPECTIVA PSICOSOCIAL**

La construcción de una cultura ciudadana en el contexto del metro de Bogotá es un desafío que requiere un enfoque integral desde la psicología social y comunitaria. Comprender cómo los pensamientos, sentimientos y comportamientos de los ciudadanos son influenciados por su entorno social es fundamental para diseñar estrategias efectivas que fomenten la convivencia y el uso adecuado del sistema de transporte. Según (Bianco, 2024), es fundamental abordar cómo los factores emocionales y sociales influyen en la interacción de los ciudadanos con el sistema de metro de Bogotá. Las dinámicas de confianza recíproca, junto con el sentimiento de pertenencia a una comunidad, pueden influir significativamente en la disposición de los ciudadanos para adoptar comportamientos que favorezcan la convivencia.

### **6.3.1. ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA SOCIAL**

La psicología social permite analizar cómo las personas se comportan en sociedad, influenciadas por la presencia de otros, ya sea de manera real o implícita. Este enfoque es clave para el desarrollo de una cultura ciudadana sólida, pues ayuda a comprender fenómenos como la conformidad, la obediencia y la formación de actitudes. (Barra, 1998), ha sistematizado diversas perspectivas de esta disciplina, ofreciendo herramientas para su aplicación en entornos urbanos y comunitarios. En este sentido, la promoción de una cultura ciudadana en el metro de Bogotá debe partir del entendimiento de cómo las normas sociales y las interacciones diarias moldean el comportamiento de los usuarios del transporte público.



Las representaciones sociales, entendidas como sistemas de valores, ideas y prácticas compartidas, permiten a los ciudadanos orientarse en su entorno y establecer pautas de convivencia. Estas representaciones determinan la manera en que las personas ejercen sus derechos y deberes, influyendo en su actitud hacia el transporte público, para fortalecer la cultura ciudadana en el metro de Bogotá, es necesario trabajar sobre estas representaciones, promoviendo mensajes que resalten la importancia del respeto, la colaboración y el sentido de pertenencia con el sistema de transporte. Un sentido de pertenencia fuerte puede motivar a los usuarios del transporte a comprometerse con el mismo y adoptar comportamientos que beneficien a la comunidad, (Pino-vera et al., 2018).

Desde la psicología comunitaria, se reconoce la importancia de la participación activa de la comunidad en la identificación y solución de sus problemas. Esta perspectiva promueve el empoderamiento ciudadano y la transformación social, elementos esenciales para consolidar una cultura metro basada en la cooperación y la responsabilidad compartida. Según (Montero, 2004), el papel del compromiso comunitario es importante en la construcción de sociedades más equitativas, lo que refuerza la idea de que la cultura metro debe involucrar a los ciudadanos en el diseño e implementación de estrategias de convivencia.

El fortalecimiento de una cultura ciudadana en el metro de Bogotá conlleva múltiples beneficios. La interiorización de normas y valores comunes reduce conflictos y fomenta la cooperación entre los ciudadanos, la implicación de los ciudadanos en la toma de decisiones fortalece la democracia participativa y el sentido de comunidad, la interacción en el espacio público fomenta habilidades sociales, autoestima y sentido de pertenencia. Estos beneficios no solo mejoran la experiencia de los usuarios del metro, sino que también contribuyen a la cohesión social en la ciudad, estas habilidades son clave para construir relaciones interpersonales y constituir una base para el desarrollo de un comportamiento cívico positivo. La cultura del respeto y la colaboración en el uso del transporte público puede verse como un microcosmos de las relaciones sociales en la ciudad, donde el acto de compartir un espacio genera un sentido de comunidad (cano & silva, 2022).

### 6.3.2. IMPLEMENTACIÓN Y SENTIDO DE PERTENENCIA DE LA ESTRATEGIA DE CULTURA METRO

Para garantizar el éxito del sistema de metro en Bogotá, será necesario elaborar una estrategia fundamentada en principios psicosociales que promuevan un cambio positivo en el comportamiento ciudadano hacia el uso del transporte público. Entender las dinámicas sociales de la ciudad será primordial, ya que estas influyen en la percepción que tienen los ciudadanos sobre el transporte. La integración del sistema de transporte con el entorno urbano y la estructura social es clave para mejorar la aceptación y uso de estos servicios. Por ejemplo, varios estudios han demostrado que el transporte público no solo facilita la movilidad, sino que también tiene el potencial de transformarse en un componente vital de la cohesión social y el bienestar urbano (Navarro et al., 2018; Charles-Arenas et al., 2017).

Este documento tiene como objetivo delinear una estrategia integral que propicie el desarrollo de comportamientos cívicos en los usuarios del nuevo sistema de metro de Bogotá. La estrategia se fundamenta en experiencias previas exitosas, como la "Cultura Metro" de Medellín, y busca reforzar valores de respeto, puntualidad y solidaridad, al tiempo que promueve un sentido de apropiación y cuidado del transporte público. Se propone una combinación de campañas educativas, participación comunitaria e intervenciones psicosociales para reducir comportamientos incívicos y mejorar la convivencia en el espacio público.

### 6.3.3. ESTRATEGIAS

- **Campañas educativas:** Inspiradas en la "Cultura Metro" de Medellín, estas campañas deben incluir actividades de sensibilización que destaquen la importancia de los comportamientos cívicos en el uso del metro. Las campañas pueden utilizar medios variados como redes sociales, charlas en colegios y talleres comunitarios, llevando mensajes claros sobre el impacto positivo de la conducta respetuosa en el transporte público (Villar-Uribe, 2021; Hidalgo, 2019) .

- **Talleres de participación comunitaria:** Se deben realizar talleres y foros donde los ciudadanos puedan expresar sus opiniones y contribuir a la creación de un código de conducta para el uso del metro. Este proceso participativo puede mejorar el sentido de pertenencia y responsabilidad hacia el sistema de transporte (Hernández, 2023; Núñez et al., 2018) .
- **Intervenciones psicosociales:** Implementar programas que fomenten la empatía, la cooperación y la resolución pacífica de conflictos entre los pasajeros. Esto podría incluir sesiones de mediación en situaciones conflictivas y técnicas de resolución de conflictos (Márquez et al., 2024; García, 2005) . Estas intervenciones facilitarán que los pasajeros desarrollen habilidades para manejar situaciones de tensión de manera constructiva.
- **Incentivos para el buen comportamiento:** Crear un sistema de incentivos que reconozca y recompense a los usuarios que muestren comportamientos cívicos ejemplares. Esto podría incluir descuentos en pasajes o reconocimientos públicos (Molina, 2023) .
- **Evaluación continua:** Establecer un sistema de evaluación que permita medir la efectividad de las acciones implementadas a través de encuestas y observaciones directas, ajustando las estrategias según los resultados obtenidos (Flores et al., 2022)

Esta estrategia busca crear una cultura de respeto y cuidado en el nuevo sistema de metro de Bogotá, centrándose en la participación de la comunidad y en la implementación de programas psicosociales que fomenten el bienestar colectivo. Tomando como referencia el impacto positivo de la "Cultura Metro" en Medellín, se espera que estas iniciativas sensibilicen a la ciudadanía sobre la importancia del transporte público como un bien colectivo que requiere de su aportación y cuidado.

## 6.7. ANTECEDENTES FÁCTICOS DEL PROYECTO

### 6.7.1. DE LA CULTURA METRO EN OTRAS CIUDADES DEL MUNDO

Londres la primera ciudad en el mundo en implementar un nuevo modelo de movilidad ferrocarril, materializándose esta idea en el año 1951 y por ende siendo a hoy según el metro de Londres (2014)<sup>31</sup> la mayor red de trenes metropolitanos en el mundo. Que, en esa misma medida, lleva a que esta gran ciudad también sea una de las pioneras en la implementación de la cultura metro, teniendo un desarrollo de esta de más de 160 años. A hoy este medio de transporte no solo es eso, sino que de acuerdo con metro de Londres Lartey, Solomon (2024) este medio ha tenido impacto en la cultura popular inglesa, apareciendo en la literatura, en la música, y el séptimo arte; además de ser un medio de transporte de influencia para el sector turístico, teniendo ubicación estratégica de sus estaciones a sectores culturales de la ciudad tales como the London eye, el museo británico y la galería de arte tate modern<sup>32</sup>. Espacio que también ha expuesto reglas de conducta que han sido difundidas tanto a los locales como a los turistas, entre las que se halla el seguimiento de las reglas en las escaleras eléctricas, implementándose el lado derecho para quienes van parados y el izquierdo para quienes van con prisa (<sup>33</sup>Education First)<sup>34</sup>, siendo esta una de tantas reglas tales como dejar que los pasajeros se bajen antes de subir, ceder el asiento a los adultos mayores y embarazadas, el respeto por el espacio personal, tener el oyster card preparado para pasar el torniquete, entre otros. Convirtiéndose estas en reglas universales de conducta en diferentes medios de transporte alrededor del mundo.

Aunado a lo antes mencionado, se ha encontrado el metro en otras grandes ciudades del mundo como Tokyo (Japón) en donde la cultura metro se halla altamente desarrollada, encontrando puntos clave tales como:

---

<sup>31</sup> Tomado de: <https://www.metrolondres.es/historia-del-metro-de-londres/>

<sup>32</sup> Tomado de:

[https://www.researchgate.net/publication/383945559\\_Historical\\_Significance\\_and\\_Cultural\\_Impact\\_of\\_the\\_London\\_Underground\\_Tube\\_A\\_Comprehensive\\_Analysis](https://www.researchgate.net/publication/383945559_Historical_Significance_and_Cultural_Impact_of_the_London_Underground_Tube_A_Comprehensive_Analysis)

<sup>33</sup> Tomado de: <https://www.ef.com/wwes/blog/language/como-no-hacer-el-ridiculo-en-el-metro-de-londres/>

<sup>34</sup> Tomado de: <https://www.ef.com/wwes/blog/language/como-no-hacer-el-ridiculo-en-el-metro-de-londres/>

la 1) la priorización de asientos para personas de la tercera edad, viajeros con discapacidad, viajeros con bebés y mujeres embarazadas; 2) restricción del teléfono celular (por molestias como el ruido), 3) la implementación de vagones exclusivos para mujeres en búsqueda de evitar situaciones de acoso y permitir que las mujeres se sientan más seguras, 4) la implementación de llaveros con la “marca de maternidad” con el objetivo de crear una conciencia colectiva y de empatía hacia las mujeres embarazadas, entre otras conductas que permiten una sana convivencia en el metro de esta gran ciudad. (Metro de Tokio)<sup>35</sup>



Tomado de: <https://japonpedia.com/museo-metro-tokio/>

Sin embargo, es necesario hablar de la implementación de la cultura metro más allá de simples pautas de conducta que permitan una sana convivencia y la aplicabilidad de conductas cívicas, siendo dos ejemplos de ello el metro de Estocolmo y el metro de México, donde el primero es hoy mundialmente conocido como *tunnelbana*, siendo catalogado como la galería de arte más larga del mundo, y que de acuerdo con García García, Francisco (2011), “en esta ciudad la creatividad de los artistas se manifiesta integrada en el paisaje urbano, en ocasiones como un modo planificado por la autoridad competente de decorar el espacio público, pero de manera independiente a las intenciones económicas” p.61. Manifestando en el mismo sentido el autor, que “*En esta ciudad, y en general en todo el país, las instituciones gubernamentales asumen la protección del bienestar físico y estético de sus ciudadanos. Por eso se procura que los entornos públicos siempre estén bien atendidos, limpios y cuidados, puesto que es parte del compromiso social de los partidos en el gobierno prometen a los vecinos de la ciudad*”(García García, Francisco; 2011)<sup>36</sup>.

<sup>35</sup> Tomado de: <https://www.tokyometro.jp/es/tips/considerations/index.html>

<sup>36</sup> Tomado de: [https://www.researchgate.net/profile/Vanessa-Garcia-Guardia/publication/314872844\\_La\\_resignificacion\\_de\\_la\\_ciudad\\_a\\_traves\\_del\\_Carnaval\\_medieval\\_](https://www.researchgate.net/profile/Vanessa-Garcia-Guardia/publication/314872844_La_resignificacion_de_la_ciudad_a_traves_del_Carnaval_medieval_)



Tomado de: <https://www.neo2.com/el-metro-de-estocolmo-un-museo-de-arte-subterraneo/>

Finalmente, el ejemplo más cercano de cultura metro más allá de pautas de conducta es el de la ciudad de México, de las principales ciudades más representativas en América Latina, teniendo como ejemplo el “pasillo de transbordo entre la línea 3 y 12 del metro de la ciudad de México en donde se instaló un museo conmemorativo que recopila obras de caricaturistas mexicanos, como también la exposición de obras de arte como la exposición de multitud de mosaicos azules y blancos de Bisazza, obra del arquitecto Oscar Tusquets” (Vergara, Flor. 2020)<sup>37</sup>.



Tomado de: <https://www.admagazine.com/lugares/obras-de-arte-en-estaciones-del-metro-20200812-7269-articulos>

Todo lo anterior, llevándonos a una visión de la cultura metro en la que no solo se basa en la proscripción de pautas de conducta, sino que busca ir más allá permeando a sus comunidades de un interés por la cultura y el arte, logrando a través de ellos cambios en el tejido social de sus habitantes en aplicabilidad de metodologías de psicología social.

y\_el\_Movimiento\_15M\_analogias\_expresivas/links/58c6cafd4585150ab420721b/La-resignificacion-de-la-ciudad-a-traves-del-Carnaval-medieval-y-el-Movimiento-15M-analogias-expresivas.pdf#page=52

<sup>37</sup> Tomado de: <https://www.admagazine.com/lugares/obras-de-arte-en-estaciones-del-metro-20200812-7269-articulos>

### 6.7.2. DEL METRO EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN

Llegado el año 1979, Colombia a través de una de sus principales ciudades abre el escenario para incursionar en una nueva alternativa de transporte masivo. Medellín, la Capital de Antioquia, da lugar a la constitución de la *“Empresa de Transporte masivo del Valle de Aburrá Limitada, Metro Medellin Ltda, generando desarrollo y buscando ofrecer calidad de vida de los habitantes del valle de Aburrá” (Metro de Medellín)*,<sup>38</sup> ese mismo año comenzaron los estudios de factibilidad técnica y económica, para que llegado el año 1980 se sometiera a consideración del Gobierno Nacional y su Consejo Nacional de Política Económica y Social. Proyecto aprobado en 1982 y contratada su construcción en 1984<sup>39</sup>.

En 1995 inicia su operación comercial, posteriormente, en el año 2010, se puso en servicio su línea turística, y en los últimos años este medio de transporte ha tenido una evolución favorable siendo un medio transporte multimodal, contando con una conexión con tranvía y metro cable. Además de contar con espacios de naturaleza cultural como: bibliometro o la sala de alfabetización. Finalmente, este medio de transporte se encuentra en aplicabilidad del principio de movilidad sostenible, con energías limpias y con un gran beneficio social que ha sido reconocido como **“CULTURA METRO”**. *(Metro de Medellín)*

Como se mencionó anteriormente, este medio de transporte cuenta con una dinámica muy especial denominada **“CULTURA METRO”**, la cual según el metro de Medellín (2021), esta es *“entendida como el resultado del modelo de gestión social, educativo y cultural que el Metro ha construido, consolidado y entregado a la ciudad.”* Manifestando la misma empresa, que dicho modelo *“puede ser replicado de manera parcial por otras ciudades o instituciones que tenga como propósito la creación de una nueva cultura ciudadana, convivencia en armonía, el buen comportamiento, la solidaridad, el respeto de las normas básicas de usos de bienes públicos, de respeto propio y por el otro, entre otros aspectos. (Metro de Medellín)”*

Ahora, en concordancia a lo manifestado por Tabares D, Juvenal, Naranjo F, César Augusto (2018), *“el metro no es solo un referente de movilidad, sino que se fundamentó en una filosofía de atención a sus habitantes, la necesidad de proporcionarles espacios públicos, adecuación urbana, espacio de integración, para el deporte, para las manifestaciones artísticas y culturales. Es decir, la búsqueda de la creación de entornos para los ciudadanos, en los cuales pueden interactuar, acogiendo las actividades que el sistema plantea para los usuarios”*<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Tomado de: <https://www.metrodemedellin.gov.co/quienes-somos/historia/>

<sup>39</sup> Tomado de: <https://www.metrodemedellin.gov.co/quienes-somos/historia/>

<sup>40</sup> Tomado de:

<https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/6929/Formaci%C3%B3n%20y%20Cultura%20Metro.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Que en seguimiento a dicha línea argumentativa, García Rua (2024) ha manifestado que la intervención de línea metro es una intervención de naturaleza ideológica que prescribe el comportamiento dentro del sistema de la ciudad, además de la promoción de valores que se ajustan a un prototipo de usuario y ciudadano, el cual ha logrado un fuerte afianzamiento a consecuencia de un fuerte regionalismo que ha permitido crear una identidad compartida, en suma a una combinación de mecanismos disciplinares e ideológicos.

A hoy, Medellín se ha convertido en un referente en nuestro país no solo por un modelo innovador en movilidad, sino por la identidad y cultura que se ha creado alrededor de este a través de la implementación de programas que no solo van hacia un enfoque meramente de creación de cultura ciudadana, sino que este ha buscado ir más allá e impactar en la parte ambiental, en la creación de un dialogo ciudadano, en la formación de sus ciudadanos en otras áreas, implementación de una agenda cultural entre otras labores.<sup>41</sup>

Evidencia de lo anterior, es la implementación que ha realizado por 37 años de programas, estrategias y/o actividades tales como: el vagón escuela, escuela de lideres, amigos metro, bibliómetros, salas de alfabetización digital, guías educativos, aprendices de cultura metro, salas expositivas, museo metro (MUME), agenda cultural, entre otros.

Siendo lo anterior una muestra de que la implementación del metro para Medellín, no solo refería a simplemente una táctica de renovación urbana, sino a una estrategia de naturaleza psicosocial que influiría en la idiosincrasia de esta región, siendo una muestra de ello el reporte del modelo de gestión (2005) que como se cito en Tabares, Juvenal (2014) afirma que *“a la llegada del metro la ciudad se encontraba fraccionada, desarraigada, sin espacios públicos, sin lugares de encuentro para los ciudadanos y sin memoria”* Y que, como consecuencia de lo anterior,

*El metro sabía que su función estaba más allá de la solución de un transporte masivo, encontró que la clave para la rehabilitación de esa ciudad fragmentada estaba en esos mismos elementos olvidados y que para intervenir adecuadamente la ciudad y ejercer sobre ella influencia benéfica, debía unirla y humanizarla, es decir, plantear una nueva estructura de ciudad. (Modelo de Gestión, 2005, como se cita en Tabares Duque, juvenal, 2014, p.76)*

---

<sup>41</sup> Véase: <https://www.metrodemedellin.gov.co/cultura-metro/>



Que, bajo la misma línea argumentativa de los antes citados autores, la empresa metro de Medellín (2025) en respuesta a solicitudes de información elevadas bajo radicado **MTRO E-20250001784** ha manifestado que el sistema metro de Medellín no sólo es una solución al transporte masivo de la gran urbe, sino que también se constituye como el motor de una nueva cultura ciudadana. Buscando que su población se sienta más cercana al concepto de ciudadanos del mundo, (...) promoviendo comportamientos sociales adecuados como la puntualidad, el orden, la disciplina social, la solidaridad, la limpieza, la consideración por el otro, el cuidado del entorno entre otros.

Es a consecuencia de lo anterior que la Cultura Metro de Medellín, se convierte en un modelo a replicar en otras ciudades, como la ciudad capitalina del país que esta a portas de hacer transición a este modelo de movilidad, y que por ende requiere comenzar a crear una identidad ciudad y cultura alrededor de esta.

### 6.7.3. EL METRO EN BOGOTÁ

Bogotá por décadas ha contado con la necesidad de innovar en su sistema de transporte, buscando contar con un modelo de movilidad adaptable a las necesidades de nuestra sociedad de hoy, una sociedad en constante movimiento que requiere desplazamiento a través de grandes distancias. Teniendo como uno de los primeros intentos de acercamiento a esta propuesta el año 1954 en el que se anuncia la elaboración de un primer estudio, propuesta que el Concejo de Bogotá negó su préstamo (Empresa Metro de Bogotá)<sup>42</sup>. Pese a ello, diferentes dirigentes y actores estratégicos dentro de la administración de esta ciudad realizaron intentos a lo largo de la historia como 1957 que bajo la presidencia de Rojas Pinilla la cual fue contratada una firma japonesa para la construcción de este, sin embargo, la propuesta vuelve a declinarse por decisión del frente nacional (Empresa Metro de Bogotá). Continuando en estos tanteos de propuesta a lo largo de la línea del tiempo personajes como Jorge Gaitán cortes, Hernando Duran Dussan, Juan Martin, Juan Martin Caicedo, Jaime castro, Enrique Peñalosa, entre otros.

Intentos que llevaron a que esta propuesta se materializara en el año 2016 con la creación de la Empresa Metro de Bogotá S.A., la cual autorizó el concejo de la ciudad mediante acuerdo 642 de 2016<sup>43</sup>. Luego, Según Metro de Bogotá<sup>44</sup>, en el año 2017 el Concejo de Bogotá adopta el acuerdo 691 autoriza a la secretaria Distrital de Hacienda para asumir obligaciones para garantizar el aporte a la cofinanciación de la PLMB-T1 hasta la suma de 6,08 billones de pesos, que a su vez el CONFIS autoriza la Nación la asunción de compromisos de vigencias futuras por el valor de 15,1 billones de pesos constantes (Empresa Metro de Bogotá).

<sup>42</sup> Tomado de: <https://www.metrodebogota.gov.co/empresa-metro-bogota/historia>

<sup>43</sup> Tomado de: <https://www.metrodebogota.gov.co/empresa-metro-bogota/historia>

<sup>44</sup> Tomado de: <https://www.metrodebogota.gov.co/empresa-metro-bogota/historia>

Cerrando el año 2017 con la firma del convenio que define los montos, términos y condiciones. Para el año 2018, el concejo de Bogotá aprueba el acuerdo 699 el 2018 autoriza el cupo de endeudamiento hasta 10,8 billones de pesos constantes.

Para el año 2019, se oficializa la solicitud de participación de 7 grupos internacionales para participar de la licitación pública internacional, logrando 6 su precalificación. Para luego, en mayo de ese mismo año otorgar a la Empresa Metro de Bogotá el aval fiscal aprobado por el CONFIS, se emite el documento 2361, por el que se define los lineamientos de política de riesgo contractual para los proyectos férreos de transporte de pasajeros que sean cofinanciados por parte de la nación. Que llegando finalmente el mes de junio de 2019, se oficializa el llamamiento a la licitación pública internacional con la entrega de pliegos tipo y los términos del contrato de concesión, siendo seleccionado finalmente APCA TRANSMIMETRO como el grupo de empresas que construiría, suministraría en materia rodante, operaba y mantendría la primera línea de metro de Bogotá, siendo suscrito el contrato el 27 de Noviembre asumiendo la empresa contratista una nueva razón social, denominándose Sociedad Metro Línea 1 S.A.S. En agosto de 2020 se firma el contrato de interventoría, lo cual trajo como consecuencia que en el mes de octubre de ese año se firmara el acta de inicio de dicho contrato, teniendo una proyección de los primeros ensayos en 2027 (Metro de Bogotá)<sup>45</sup>

A hoy, 2025, se reportó un avance del 50%<sup>46</sup>, hecho que evidencia la innegable proximidad de la materialización del metro en Bogotá, lo cual lleva a cuestionarnos como será su incidencia en nuestra población, no solo en términos de infraestructura, sino también como incide este en el comportamiento de la población Bogotana. Tomando como referentes estrategias de psicología social en combinación con tácticas de acupuntura urbana que han llevado a que ciudades como Medellín, nuestro principal referente desarrolle una identidad y por ende una cultura cívica que ha creado sentidos de pertenencia, apropiación del espacio, integración de principios comunes que llevan a una unión de la población para fines comunes en su ciudad. Esto es lo que se busca lograr con la implementación de los lineamientos de la cultura metro de Bogotá, crear una identidad común de la que carece Bogotá para así crear valores y principios que lleven a una construcción social que permita estructurar ciudad desde el respeto, el bien común y valores comunes.

---

<sup>45</sup> Tomado de: <https://www.metrodebogota.gov.co/empresa-metro-bogota/historia>

<sup>46</sup> Tomado de: <https://bogota.gov.co/mi-ciudad/movilidad/obras-linea-1-del-metro-de-bogota-ya-llegan-50-de-avance-marzo-2025>

### 6.7.3.1. DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL METRO ELEVADO

Durante el 2019 el Distrito Capital informa que el Metro de Bogotá será elevado principalmente, por los **riesgos geológicos** que se encontraron al evaluar la construcción subterránea. Un estudio de 2015 realizado por SENER también concluyó que la tipología elevada era la más conveniente para la ciudad, considerando factores como el impacto ambiental, urbano, la experiencia del usuario, los beneficios sociales y financieros, y los riesgos de la construcción. Además, la alternativa elevada ofrecía mayores **beneficios y menos efectos negativos**, y el **componente económico** fue fundamental en la decisión.<sup>47</sup>

Como consecuencia de dicha situación, Bogotá se halla en un escenario de transformación urbana donde se hallará con nuevas áreas que conformen el espacio público, puntualmente bajo los puentes, espacios que han sido contemplados para su recuperación dentro del plan de Desarrollo Distrital, **acuerdo 927 de 2024, programa 5. Espacio Público seguro e inclusivo**. *“Donde la administración Distrital ha delineado una ambiciosa estrategia para hacer del espacio público un lugar donde los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y convivir sin temor. Planteando una revitalización urbana a través de proyectos integrales, el mejoramiento de parques con nuevas medidas de seguridad e iluminación, y la realización de intervenciones artísticas y culturales para promover la convivencia. Como también la modernización del alumbrado público, la defensa y administración eficiente del espacio público, y una estrategia para recuperar la cultura de aseo” (PDD, 2024)*<sup>48</sup>.

Viéndose materializada dicha propuesta tan osada, en el acuerdo 929 de 2024, **“Por medio del cual se dictan lineamientos para la apropiación y mantenimiento del espacio público debajo de los puentes vehiculares, puentes peatonales y sus alrededores en el Distrito Capital, con el fin de transformarlos en espacios destinados a la cultura, seguridad y convivencia ciudadanas y al reverdecimiento”**

Hallando en la estructura del Metro elevado de Bogotá, será parte de ese espacio público que requerirá atención e intervención en su zona baja, encontrando que puede llegar a ser parte del urbanismo táctico planteado en ese acuerdo 929 de 2024.

<sup>47</sup> <https://bogota.gov.co/mi-ciudad/movilidad/por-que-el-metro-de-bogota-sera-elevado>

<sup>48</sup> <https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=155699>

Dado que el proyecto citado develo ante la administración Distrital la necesidad de estrategias de acupuntura urbana frente a estos escenarios, dadas las altas estadísticas de inseguridad, en donde se cita estadísticas del año 2021 de la localidad de Kennedy, que identifico la presencia de 408 casos, alrededor del puente vehicular de la avenida primera de mayo con Boyacá, los cuales fueron citados de la siguiente forma:

**APLICACIÓN LEY 1801/16 ALREDEDORES DEL PUENTE VEHICULAR DE LA AV PRIMERA DE MAYO CON AV BOYACÁ  
AÑO 2021**

COMPARENDOS	COMPORTAMIENTO	CANTIDAD AÑO 2021
ARTICULO 27#6	PORTAR ARMA CORTOPUNZANTE	251
ARTICULO 27#7	PORTE ARMA TRAUMATICA	11
ARTICULO 140# 8,13,14	PORTE Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	85
ARTICULO 95 # 1	INCAUTACION CELULARES	22
ARTICULO 27 # 1,2,3,4	RIÑA POR INTOLERANCIA	13
93 # 11	INCAUTACION DE BICICLETAS	26

FUENTE: MEBOG E8

(Proyecto de acuerdo 161, 2024)

Identificando en adición, actores en dicha problemática tales como: vendedores informales, habitantes de calle y actores de la delincuencia común, llevando a que en dichas estrategias sea necesario aplicar teorías como la de la ventana rota, que en el transcurso del año 1969, la Universidad de Stanford realizó un experimento de psicología social, en donde las *“características de abandono de un objeto o lugar transmiten idea de deterioró, desinterés, despreocupación que dan lugar a romper códigos de convivencia, así como también otorgar percepción de ausencia de la Ley, normas, reglas. Es decir, “todo vale”. Escalando la problemática en actos que llegan a ser incontenibles y desembocando en violencia irracional,”* (People, 2023)<sup>49</sup>.

En ese sentido, la implementación de la Cultura Metro de Bogotá en un paralelo con una intervención de acupuntura urbana como la intervención del espacio público de puentes, lleva a que la presente propuesta no solo se una propuesta de pautas de conducta, sino una intervención de psicología social que busca transformar el tejido social de Bogotá.

<sup>49</sup> <https://people.accion.com/es/tendencias-e-inspiracion/teoria-ventanas-rotas/>

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acuerdo 609 de 2015. "Por el cual se crea la red distrital de cultura ciudadana y democrática de Bogotá."
- Acuerdo 642 de 2016. "Por el cual se autoriza al Alcalde Mayor en representación del Distrito Capital para participar, conjuntamente con otras entidades descentralizadas del orden Distrital, en la constitución de la Empresa Metro de Bogotá S.A., se modifican parcialmente los Acuerdos Distritales 118 de 2003 y 257 de 2006, se autorizan compromisos presupuestales y se dictan otras disposiciones en relación con el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá."
- Acuerdo 691 de 2017.
- Acuerdo 699 de 2018.
- Acuerdo 927 de 2024. "Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del distrito 2024-2027 "Bogotá camina segura"."
- Acuerdo 929 de 2024. "Por medio del cual se dictan lineamientos para la apropiación y mantenimiento del espacio público debajo de los puentes vehiculares, puentes peatonales y sus alrededores en el Distrito Capital, con el fin de transformarlos en espacios destinados a la cultura, seguridad y convivencia ciudadanas y al reverdecimiento."
- Alcaldía Mayor de Bogotá. (2022).
- Barra Almagiá, E. (1998). *Psicología social*. Sociedad Periodística e Impresora Renacimiento. [https://acms.es/wp-content/uploads/2019/05/UDEC\\_Psicologia\\_SocialBarra-Almagia.pdf](https://acms.es/wp-content/uploads/2019/05/UDEC_Psicologia_SocialBarra-Almagia.pdf)
- Bianco, Á. L. (2024). La comunidad de convivencia como modelo psicosocial alternativo. *Cuadernos De Sociología*, 3(6), 91-108. <https://facso.una.py/wp-content/uploads/2024/06/CS-vol3-nro6-2023.pdf>
- Cano, C., & Silva, S. (2022). Una propuesta de criterios de selección de instrumentos para intervenciones en cultura ciudadana, aproximación al problema ético. *Revista De Ciencias Sociales*, (172), 193-207. <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/sociales/article/view/49943>
- Charles-Arenas, C., Gutiérrez-Guerrero, P., Giorgi, E., Gutiérrez-Cota, H., & Díaz-Barriga, V. M. B. (2017). ¿A quién pertenece la ciudad? Movilización, espacio público, tejido social y bienestar. *Entretextos*, 9(26), 1-17. <https://revistasacademicas.iberoleon.mx/index.php/entretextos/article/view/284>
- Colombia. Asamblea Nacional Constituyente. (1991). *Constitución Política de Colombia*.
- Colombia. Congreso de la República. (1989). *Ley 86 de 1989*.
- Colombia. Congreso de la República. (1993). *Decreto Ley 1421 de 1993*.
- Colombia. Congreso de la República. (1996). *Ley 310 de 1996*.
- Colombia. Congreso de la República. (1996). *Ley 336 de 1996*.

- Colombia. Congreso de la República. (1997). *Ley 397 de 1997* (Ley General de Cultura).
- Colombia. Congreso de la República. (2003). *Ley 819 de 2003*.
- Colombia. Congreso de la República. (2006). *Ley 1083 de 2006*.
- Colombia. Congreso de la República. (2008). *Ley 1185 de 2008*.
- Colombia. Congreso de la República. (2013). *Ley 1682 de 2013*.
- Colombia. Congreso de la República. (2016). *Ley 1801 de 2016* (Código Nacional de Policía y Convivencia).
- Colombia. Congreso de la República. (2022). *Ley 2262 de 2022*.
- Corte Constitucional de Colombia. (2007). *Sentencia C-911 de 2007*.
- Distrito Capital. (2014). *Decreto Distrital 601 de 2014*.
- Education First.
- Empresa Metro de Bogotá.
- Flores, H. V. N., Cházaro - Basáñez, M., & Zárate, M. del Á. C. (2022). Árboles de parques urbanos del centro histórico de Xalapa. *UVserva*, (14), 136-152. <https://uvserva.uv.mx/index.php/Uvserva/article/view/2840>
- García, J. (2005).
- Garcia Garcia, F. (2011).
- García Rua. (2024).
- Hernández, M. A. G. (2023). El transporte público nocturno entre el discurso y la apropiación ciudadana. *Vínculos. Sociología, Análisis Y Opinión*, (8), 77-111. <https://vinculossociologiaanalisisyopinion.cucsh.udg.mx/index.php/VSAO/article/view/7679>
- Hidalgo, A. T. (2019). El entorno caminable como comodalidad para el transporte público: el caso de Quito = La caminabilidad en función de la comodalidad al transporte público. *Territorios en Formación*, (16), 130. <https://polired.upm.es/index.php/territoriosenformacion/article/view/4236>
- Instituto para la Economía Social (IPES). (2022).
- Lartey, S. (2024).
- Márquez et al. (2024).
- Metro de Londres. (2014).
- Metro de Medellín.
- Metro de Tokio.
- Modelo de Gestión. (2005).
- Molina, J. C. C. (2023). Transporte público y medios alternativos (TPA): dimensión social y necesidades en materia de comunicación. *Tendencias Sociales. Revista De Sociología*, (10), 191-226. <https://revistas.uned.es/index.php/Tendencias/article/view/37980>

- Montero, M. (2004). *Introducción a la psicología comunitaria: Desarrollo, conceptos y procesos*. Editorial Paidós.
- Navarro et al. (2018).
- Núñez et al. (2018).
- People. (2023).
- Pino-Vera, T., Cavieres-Fernández, E., & Muñoz - Reyes, J. A. (2018). Los factores personales e institucionales en el sentido de pertenencia de estudiantes chilenos a lo largo de sus estudios superiores. *Revista Iberoamericana De Educación Superior*, 24-41. <https://www.ries.universia.unam.mx/index.php/ries/article/view/276>
- Proyecto de acuerdo 161. (2024).
- Secretaría de la Seguridad. (2025).
- SENER. (2015).
- Tabares D, J., & Naranjo F, C. A. (2018).
- Tabares, J. (2014).
- Vergara, F. (2020).
- Villar-Urbe. (2021).
- Zarzosa-Márquez, E. D., Mendoza, C. H. N., Antón, C. H. C., & Placencia, L. (2024). Vínculo entre calidad del transporte público y bienestar universitario en Perú. *Prohominum*, 6(2), 109-125. <https://acvenisproh.com/revistas/index.php/prohominum/article/view/722>

**PROYECTO DE ACUERDO No 973 DE 2025****PRIMER DEBATE****“POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS BAJO LOS CUALES SE PLANEARÁ Y EJECUTARÁ EL PROGRAMA DE CULTURA METRO DE BOGOTÁ”**

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 1 del artículo 313 de la Constitución Política y el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993.

**ACUERDA****VII. ARTICULADO**

**ARTICULO 1°. OBJETO.** El presente acuerdo tiene por objeto establecer lineamientos bajo los cuales la empresa Metro de Bogotá en coordinación con otras entidades del Distrito planeará y ejecutará la estrategia de cultura ciudadana del Metro de Bogotá.

**ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.** La estrategia de Cultura Metro para Bogotá D.C. se aplicará en el territorio del Distrito Capital, con énfasis en las áreas de influencia directa e indirecta del sistema Metro.

**ARTÍCULO 3. PRINCIPIOS.** La estrategia Cultura Metro se regirá por los siguientes principios:

- a) Corresponsabilidad: La cultura Metro es responsabilidad compartida entre la administración distrital, la Empresa Metro, los usuarios y la ciudadanía en general.
- b) Participación: Se fomentará la participación de la ciudadanía en la construcción y sostenimiento de la Cultura Metro.
- c) Sostenibilidad: Las acciones implementadas deben garantizar la sostenibilidad social, ambiental y económica del sistema Metro.
- d) Inclusión: La Cultura Metro reconocerá y respetará la diversidad de la ciudadanía bogotana, garantizando el acceso de todos los grupos poblacionales.
- e) Coordinación: La estrategia articulará y coordinará los diferentes sectores administrativos del Distrito identificados como responsables en el presente acuerdo para su implementación efectiva.



f) Enfoque de género y diferencial: La estrategia implementará las políticas públicas de género y diferenciales de manera transversal.

**ARTICULO 4. LÍNEAS ESTRATÉGICAS.** El programa de Cultura Metro se desarrollará a través de las siguientes líneas estratégicas:

- a) Educación y Formación
- b) Gestión del espacio público
- c) Comunicación y Pedagogía
- d) Arte y Cultura en el Metro
- e) Participación Ciudadana
- f) Sostenibilidad Ambiental
- g) Enfoque de género y diferencial.

**ARTÍCULO 5. RESPONSABILIDAD.** La Empresa Metro de Bogotá en coordinación con la secretaria Distrital de Cultura, recreación y deporte, el Instituto para la Economía Social (IPES), la Secretaria Distrital de Ambiente, la defensoría del espacio público (DADEP), la Secretaria Distrital de la Mujer y las demás entidades correspondientes dentro del marco de sus competencias.

**ARTICULO 6. LINEAMIENTOS.** La empresa Metro de Bogotá en coordinación con Entidades del Distrito identificadas en el artículo 5° del presente acuerdo como responsables se regirán por los siguientes lineamientos:

- a) Implementar estrategias de comunicación, herramientas educativas, participación ciudadana y demás instrumentos que cultiven valores y conductas tales como: 1) Respeto y cuidado del espacio público, 2) identidad colectiva y comunitaria, 3) sentido de apropiación, 4) reglas básicas de convivencia, 3) respeto y solidaridad por el otro, entre otros valores y conductas.
- b) Destinar parte de los entornos que conforman el espacio público de la infraestructura del sistema metro de Bogotá a actividades y/o exposiciones artísticas, muestras de cultura y cualquier tipo de intervención de dicha índole.
- c) Promover la organización de ventas informales mediante la asignación de puntos fijos en el espacio público en el espacio público que conforma la infraestructura del sistema de transporte metro de Bogotá a esta actividad.

- d) Implementar acciones y estrategias que incentiven conductas a favor de la protección del medio ambiente.
- e) Promover a través de diferentes estrategias el conocimiento de políticas públicas de género y de enfoque diferencial que incentiven conductas a favor de dichos sectores.

**ARTICULO 7. FINANCIACIÓN.** La implementación de la Cultura Metro se financiará con:

- a) Recursos propios de la Empresa Metro de Bogotá S.A
- b) Recursos que financien el Plan de Desarrollo que se halle vigente.
- c) Recursos de cooperación internacional y alianzas público-privadas

**ARTÍCULO 6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.** La empresa metro en coordinación de las demás entidades responsables de la estrategia cultura metro, presentaran informes anuales al Concejo de Bogotá sobre la implementación de este acuerdo.

**ARTÍCULO 9. VIGENCIA.** El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

**AUTOR:**

**SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA**

Concejal de Bogotá

Partido Liberal Colombiano